



ASOFIDUCIARIAS

Relación de Jurisprudencia sobre con el negocio fiduciario – Consejo de Estado

SENTENCIA	TEMA	FECHA	ACTORES	NORMAS DEMANDADAS	MAGISTRADO PONENTE	TESIS	SUBTEMAS	FALLO
30/04/1982 Rad. 208752 243-CE- SEC4-1982- 04-30	Contrato de fiducia	30-04- 1982	Ornar Rodríguez Olaya	"D" del numeral 3o., inciso 3o. de la Circular externa D.B. No. 052 de 17 de julio de 1978, de la Superintendencia Bancaria	Gustavo Humberto Rodríguez	Una norma de menor rango, como una resolución, no puede modificar lo dispuesto en la ley 45 de 1923, e indicar que, para la celebración de un contrato de fiducia mercantil, se requiere de escritura pública como solemnidad ad substantiam actus, pese a que la regla general en el régimen mercantil es la consensualidad (P.J.): "Es preciso distinguir, ante todo, el "fideicomiso", figura civil (C.C., Arts. 793 y ss.), de la fiducia mercantil, figura comercial, reservada "solo a los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizadas por la Superintendencia Bancaria" (C. de Co. Art. 1226). 1. El "fideicomiso", civil, constituye un modo de limitación de la propiedad. Es "propiedad fiduciaria" la sujeta el gravamen de pasar a otra persona por	-Formalidades para la celebración de un contrato de fiducia -Diferencias entre fideicomiso civil y fiducia mercantil -Jerarquía normativa entre resolución y Código de Comercio	1o. Declárase la nulidad de la palabra "pública" utilizada en el literal d) de la instrucción 3a. de la Circular Externa No. DB 052 de 1978, julio 17, emanada del Superintendente Bancario.

					<p>el hecho de verificarse una condición (CC. Art. 794). O sea que la finalidad del fideicomiso es la transferencia de la propiedad de un bien a otra persona si se cumple la condición: se traslada del fideicomitente al fideicomisario o beneficiario, a través del fiduciario, pudiendo coincidir los dos primeros en una misma persona.</p> <p>En cambio, la "fiducia mercantil" es una institución cuya finalidad principal es la de obtener la administración del bien por parte del fiduciario, o la enajenación que éste haga "para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario" o fideicomisario (C. de Co. Art. 1226).</p> <p>Se distinguen o diferencian los dos institutos, entonces, por el orden jurídico a que pertenecen, por su finalidad, por las facultades y derechos del fiduciario (en el fideicomiso es propietario y recibe las mejoras y expensas; en la fiducia, es solo un administrador y recibe remuneración por su gestión administradora), por la clase de persona que es el fiduciario, pues en el fideicomiso es persona física (en la cual hay un grado de confianza), en tanto que en la fiducia son exclusivamente establecimientos de crédito y sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>(...) Dadas estas diferencias, y haciendo énfasis en la última de las distin</p> <p>ciones, que tiene su apoyo en el Art. 1228 del C. de Co., tanto el Art. 109 de la Ley 45 de 1923, que se considera violado, como la circular acusada de violatoria, no se refieren, ni pueden referirse sino a la fiducia mercantil. En consecuencia, es a las normas pertinentes consagradas en el estatuto de comercio a las cuales es preciso hacer referencia, sin consideración con la figura civil del fideicomiso.</p> <p>Se tiene, así que el Art. 1228 del C. de Co. preceptúa:</p> <p>"Art. 1228. La fiducia constituida entre vivos deberá constar en escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes. La constituida mortis causa, deberá serlo por testamento".</p> <p>Como se observa, esta norma contiene la expresión "según la naturaleza de los bienes", con la cual se significa que la existencia de la escritura pública para los actos entre vivos se refiere exclusivamente al evento en que los bienes constitutivos de la fiducia tengan la calidad de inmuebles.</p> <p>En tales condiciones debe concluirse que el C. de Co. (D.L. 410 de 1971) aclaró o complementó el Art. 109 de la</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Ley 45 de 1923 en cuanto a la exigencia de la aludida formalidad de la escritura pública para los casos de fiducia sobre inmuebles.</p> <p>De igual modo es preciso concluir que, a términos del transcrito artículo 1228 del C. de Co., la fiducia constituida sobre muebles no requiere de la solemnidad de la escritura pública, pudiendo constituirse mediante documento privado. Podrá argumentarse que si el fideicomiso se constituye con base en el elemento "confianza", en cambio la fiducia mercantil se erige con fundamento en el de "seguridad", la que además no es ofrecida con suficiente garantía en un instrumento privado. Pero el Art. 1234-8o. del C. de Co. exige al fiduciario "rendir cuentas comprobadas de su gestión al beneficiario cada seis meses", y el Art. 1231, ibídem, establece que "A petición del fiduciante, del beneficiario o de sus ascendientes, en caso de que aún no exista, el juez competente podrá imponer al fiduciario la obligación de efectuar el inventario de los bienes recibidos en fiducia, así como la de prestar una caución especial".</p> <p>4. De acuerdo con la aclaración dada en el artículo 1228 del C. de Co. debe colegirse que el Art. 109 de la Ley 45 de 1923 únicamente exige al instrumento privado para las operaciones sobre</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

						muebles, y solo exige la escritura pública para el evento en que los bienes dados en fiducia sean inmuebles.”		
CE 29/NOV/1993	Sociedad Fiduciaria, Control y Vigilancia de la actividad financiera	29-11-1993	La sociedad fiduciaria XXX S.A	Apelación auto del 5 de agosto de 1993. Tribunal Administrativo de Cundinamarca Auto.	Guillermo Chahín Lizcano	<ul style="list-style-type: none">• Reiteradamente ha sostenido la corporación, que la posibilidad que tienen los particulares de obtener la suspensión provisional de los actos administrativos, constituye un hecho de excepción y como tal, para que la jurisdicción pueda tomar esta medida, se exige el cumplimiento riguroso de los requisitos expresamente señalados en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo.• Conforme los artículos 31, 1602 y 1742 del Código Civil y el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 que precisa respecto de la nulidad de los actos jurídicos, como una declaración que puede ser hecha únicamente por un juez y no por una autoridad administrativa como lo es La Superintendencia Bancaria.• En esta ocasión la sala precisa que para establecer si la orden dada por la superintendencia a la actora corresponde únicamente a la rama judicial o si fue una orden en función de su ejercicio de fiscalización y control, requiere de un estudio	- Nulidad -Superintendencia Bancaria - Servicios financieros - Negocios fiduciarios - Suspensión provisional	Confirmase el auto apelado de 5 de agosto de 1993, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso 3419

						detallado de las normas que le otorgan competencia a la superintendencia, solicitud que no fue hecha.		
13/12/93 Rad. 565	Fiducia bajo el régimen de la ley 80 de 1993	13-12-93	Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	Consulta sobre alcance del artículo 81 de la ley 80 de 1993	Jaime Betancur Cuartas	<p>Celebrado un contrato de fiducia mercantil o de encargo fiduciario entre una sociedad fiduciaria y una entidad de derecho público, antes de la entrada en vigencia de la ley 80 de 1993, ¿podrá este acto jurídico seguir surtiendo efectos, y en caso de que ello sea afirmativo, es posible que las partes del negocio jurídico puedan modificarlo rigiéndose por las normas aplicables en el momento de la celebración del contrato? (P.J.):</p> <p>“1.) El numeral 5o.,del artículo 32 de la ley 80 de 1993, que según el artículo 81 ibídem entró a regir desde la promulgación de la ley, regula lo relativo a los contratos estatales de “encargo fiduciario y fiducia pública”.</p> <p>El inciso cuarto, del citado numeral 5º.. del artículo 32 ibídem, prescribe que "los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil que a la fecha de promulgación de ésta ley hayan sido suscritos por las entidades estatales, continuarán vigentes en los términos convenidos con las sociedades fiduciarias" (subrayado fuera de texto).</p> <p>De manera que la ley 80 de</p>	-Contratación estatal - Fiducia mercantil -Fiducia pública	Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala absuelve los interrogantes planteados por el señor Director encargado deí Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a saber: 1. Los contratos de fiducia o encargo fiduciario que se hubieran celebrado de conformidad con la legislación contractual anterior a la ley 80 de 1993, no pueden ser adicionados en su valor o su plazo porque su vigencia está sometida a los

						<p>1993, permitió que se siguieran ejecutando los contratos de fiducia suscritos por las entidades públicas antes de su vigencia, pero limitados a los términos convenidos en ellos, lo que implica que no se pueden modificar ni en cuanto a su plazo ni a su valor; obviamente tampoco se puede modificar su objeto porque se estaría frente a la celebración de un nuevo contrato que tendría que tramitarse de conformidad con el nuevo estatuto de contratación estatal.”</p>		<p>términos convenidos en dichos contratos con las sociedades fiduciarias.</p> <p>2. Los contratos de fiducia mercantil y encargo fiduciario no pueden adicionarse en ninguno de sus aspectos, entre otras razones porque su naturaleza es comercial y en la actual legislación la naturaleza de estos contratos es especial, de carácter público y se rige por la ley comercial sólo en aquello que no sea incompatible con su objeto. Además, estos contratos en ejecución están vigentes pero sometidos exclusivamente a las estipulaciones convenidas. De</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								este modo, y conforme a la ley 80 de 1993, no es posible introducir en ellos ninguna modificación.
30/11/1994 Rad. 652	Fiducia pública y encargo fiduciario	30-11-1994	Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social	Inquietud del Ministerio sobre como establecer el monto para fijar la garantía de seriedad y así mismo poder establecer el valor del contrato que nos permita determinar la garantía única.	Roberto Suárez Franco	<p>“A título enunciativo, la ley 80 de 1993, menciona algunos contratos y en el numeral 5o. se refiere a los “Encargos Fiduciarios y Fiducia Pública” en los siguientes términos:</p> <p>Las entidades estatales sólo podrán celebrar contratos de fiducia pública, cuando así los autorice la ley, la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal, según el caso.</p> <p>Los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las entidades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren.</p> <p>Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública solo podrán celebrarse por las entidades estatales con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente estatuto, únicamente para objetos y con plazos precisamente determinados. En ningún caso las entidades públicas fideicomitentes podrán delegar en las sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos que celebren en desarrollo del</p>	-Régimen de la seguridad social -Comisión de manejo o administración de contratación pública -Fondo de pensiones públicas	<p>LA SALA RESPONDE</p> <p>En los contratos de fiducia pública o encargo fiduciario, el valor de la comisión que se fije en el contrato deberá estar conforme con las tarifas que prescribe la Superintendencia Bancaria. El monto de la comisión constituye el valor contrato.</p> <p>Sobre dicho valor se determinará el monto de la garantía de seriedad y de la garantía única</p>

					<p>encargo o de la fiducia pública, ni pactar su remuneración con cargo a los rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se encuentren presupuestados.</p> <p>(...) el Congreso expidió la Ley 100 por la cual se creó el sistema de seguridad social integral y en el artículo 97 se establece que los fondos de pensiones, así como los intereses, dividendos o cualquier otro ingreso generado por los activos que los integren, constituyen patrimonios autónomos, propiedad de los afiliados, independientes del patrimonio administradora.</p> <p>El artículo 54 <i>ibidem</i>, determinó que la inversión de las reservas del Fondo de Pensiones Públicas entre otros, se manejarán mediante contrato de fiducia con las entidades del sector financiero especializado en este servicio.</p> <p>A su vez, el artículo 130 de la misma Ley 100 crea el "Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional como una cuenta de la Nación adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos se deben administrar mediante encargo fiduciario".</p> <p>(...) antes de iniciar un proceso de contratación se impone la determinación del objeto y el valor del contrato. A este respecto el artículo 24, numeral 5o. de la citada Ley 80 fija las</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>condiciones de los pliegos y dentro de ellas, en el literal c) establece: "Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato".</p> <p>De tal manera que es menester en todo contrato de fiducia precisar su valor como quiera que en la Ley 80 de 1993 no se reguló lo referente al valor o precio, se debe recurrir a las normas que reglamentan la fiducia mercantil, atendiendo lo dispuesto por el inciso 9º numeral 5o. Artículo 32 de la ley sobre contratación administrativa según el cual a la fiducia publica le serán aplicables las normas del Código de Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley.</p> <p>Así las cosas, el artículo 1237 del Código de Comercio establece que todo negocio fiduciario será remunerado conforme a las tarifas que al efecto expida la Superintendencia Bancaria; lo cual significa que la remuneración del contrato mencionado corresponde a la comisión de administración o manejo de los bienes o servicios que constituyen el objeto del contrato. De consiguiente debe claramente establecerse el valor de los bienes entregados en fiducia así como el valor de la comisión por el manejo de los mismos.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>La Ley 80 citada, consagra la obligación para el contratista de prestar garantía única con el objeto de avaluar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, y de igual forma para los proponentes exige la constitución de la garantía de seriedad de los ofrecimientos de su propuesta.</p> <p>Así mismo, el Decreto 679 de 1994 desarrolla lo referente a la garantía única y a la garantía de seriedad de la propuesta. Respecto de esta última, establece que no puede ser inferior al diez por ciento (10%) del valor de las propuestas o del presupuesto oficial estimado. (...) Lo que equivale a decir, que dicho porcentaje se aplica al total del valor de la comisión que se proponga como remuneración por el contrato de fiducia o encargo fiduciario, o el valor presupuestado que por dicha comisión haya estimado la entidad contratante.</p> <p>En los contratos de fiducia pública, habrá lugar a exigir la garantía única que cubra el riesgo de cumplimiento del contrato, por un valor no inferior al ciento (10%) de la comisión fijada, y se mantendrá vigente por todo el tiempo de duración del mismo. Dicho valor deberá incrementarse teniendo en cuenta monto de los recursos que se</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

						entreguen en fiducia.”		
02/06/1995 Rad. 6084	Fondos de inversión colectiva	02-06-95	Fiduciaria Alianza S.A.	Súplicas de nulidad de las Resoluciones números 4651 y 5358 de 1992	Jorge Enrique Correa Restrepo	<p>Dada la ausencia de regulación normativa, ¿debe el fiduciario hacer extensiva la aplicación de las normas relativas a la separación contable de su propio patrimonio y los patrimonios autónomos, a los encargos fiduciarios? (P.J.):</p> <p>“(…) el Superintendente Bancario, a través de la Resolución 4980 de 1987, dictó las normas de carácter contable aplicables a las sociedades fiduciarias. Así, en los cinco primeros Capítulos, que llegan hasta el artículo 54, hace referencia a la contabilidad y a los estados financieros de las sociedades fiduciarias, como tales, esto es, a sus bienes, obligaciones y operaciones propias, diferentes de los patrimonios autónomos y de las operaciones efectuadas en desarrollo de los mismos.</p> <p>En el Capítulo VI, constituido por el artículo 55, la Resolución previó las reglas a las cuales debería sujetarse el registro de cuentas de orden para los diferentes negocios fiduciarios, así:</p> <p>“ARTÍCULO 55.- Cuentas de Orden. Las cuentas de orden deben utilizarse para registrar, cuantificar y revelar en forma separada las obligaciones y derechos contingentes que puedan afectar la estructura</p>	-Sobregiro bancario -Separación contable -Fondos comunes de inversión (ahora FIC)	FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA.

					<p>financiera de la sociedad.</p> <p>El estado de los fideicomisos deberá registrarse en forma separada de las cuentas de orden de la sociedad, sin perjuicio de las normas que más adelante se consignan.</p> <p>En tratándose de negocios fiduciarios no traslaticios, se registrarán y se presentarán en las cuentas de orden de la sociedad fiduciaria, con arreglo, en lo pertinente, a las normas del Capítulo siguiente”.</p> <p>De conformidad con la disposición transcrita, se observa que la misma remite “en tratándose de negocios fiduciarios, no traslaticios...”, a “<u>lo pertinente en las normas del capítulo siguiente</u>”, esto es, del Capítulo VII, artículos 56 a 70, que hacen referencia a las normas contables aplicables a los patrimonios autónomos. De esta forma, para la Sala es claro que si bien el Capítulo VII de la Resolución 4980 de 1987 del Superintendente es un principio aplicable a los patrimonios autónomos, ello no obsta, para que tal como lo dispuso la misma resolución, sus disposiciones sean aplicables, por remisión, a los demás negocios fiduciarios.</p> <p>Dentro del Capítulo en comento,</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>obra el artículo 64, que reza:</p> <p>“ARTÍCULO 64.- Separación contable de los bienes fideicomitidos. Bajo ninguna circunstancia los bienes fideicomitidos, ni siquiera el efectivo, se deben involucrar con los propios de la fiduciaria y esta no puede registrar como propios los bienes que haya recibido en virtud de un contrato fiduciario”.</p> <p>Observa la Sala que las disposiciones legales imponen a la fiduciaria la obligación de mantener separados los bienes objeto de la fiducia de sus propios bienes, y también en relación con los demás negocios fiduciarios, en forma tal que la obligación conlleva el deber de indicar en todo momento a qué negocio corresponde determinado bien o transacción. Asimismo se exige la correlativa individualización para el evento en que se efectúen depósitos bancarios con dineros de los negocios fiduciarios, los cuales no pueden aparecer como propios por haberse derivado del desarrollo de <u>cualquier contrato fiduciario</u>, de donde se colige que tal exigencia no es producto de una aplicación analógica, sino de un mandato del citado artículo 64, que expresamente impone el deber, en tratándose de contratos fiduciarios.</p> <p>De otra parte no puede dejarse de</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>lado el hecho de que son <u>los contratos de fiducia mercantil</u>, pero no los encargos fiduciarios, modalidades éstas de los negocios fiduciarios, <u>los que generan patrimonios autónomos</u>, como quiera que es de su naturaleza la transferencia de la propiedad de los bienes materia del fideicomiso por parte del constituyente al fiduciario, lo cual en forma alguna caracteriza el encargo fiduciario, en virtud del cual no hay transferencia de dominio de los bienes dados para su inversión en los términos del mandato.</p> <p>De esta forma se observa la Sala, que si bien es cierto que el encargo fiduciario, no conlleva la transferencia de los bienes, sino la mera entrega, por lo cual estos no constituyen un patrimonio autónomo, a diferencia del contrato de fiducia mercantil, regido por los artículos 1226 y siguientes del Código de Comercio, cuya principal característica es la conformación del denominado “patrimonio autónomo”, no es menos cierto que como lo dispuso la resolución No. 4980 de 1987, entre otras disposiciones en el artículo 55 transcrito, las normas contables aplicables a los patrimonios autónomos, deberán ser observadas, “en lo pertinente”, a los diferentes negocios fiduciarios, entre los que se cuenta el encargo fiduciario, sin que por ello sea dable afirmar que la aplicación sea</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

						analógica.”		
14/06/96 Rad. 7450	Deberes del fiduciario	14-06-96	Juan Manuel Turbay Marulanda	Resoluciones Nos. 3029 del 13 de septiembre de 1993 y 3906 del 26 de noviembre de 1993, expedidas por la Superintendencia Bancaria.	Delio Gómez Leyva	<p>¿La adquisición de títulos futuros por parte del fiduciario, desborda su objeto social, y por ende escapa del criterio de tipicidad de los actos que le son establecidos por la ley? (P.J.):</p> <p>“Las sociedades fiduciarias como sociedades de servicios financieros que son, ejercen su actividad de acuerdo con lo previsto expresamente en las disposiciones normativas que las rigen, motivo por el cual sólo pueden realizar las actividades que taxativamente aquéllas les señalan.</p> <p>En efecto, el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, (antes artículo 2.1.3.1.1 del Decreto 1730 de 1991), prevé las operaciones que constituyen el objeto social exclusivo de las sociedades fiduciarias, y el artículo 119 No. 1º literal a) <i>ibídem</i> (anterior artículo 2.2.1.2.2 del decreto 1730 de 1991), prescribe que las sociedades fiduciarias, entre otras, deberán organizarse con arreglo a las normas de los establecimientos bancarios, tener objeto exclusivo y revestir la forma de sociedad anónima, o de cooperativa cuando sea filial de entidades de esa misma naturaleza.</p> <p>Ahora bien, la capacidad jurídica de las sociedades fiduciarias, como sociedades mercantiles que son</p>	-Títulos futuros -Estatuto Orgánico del Sistema Financiera -Capacidad jurídica de las sociedades fiduciarias -Objeto social de las fiduciarias	Revócase la providencia recurrida y en su lugar, se niegan las súplicas de la demanda.

					<p>(artículo 100 del C. Co.), en armonía con lo previsto en el artículo 99 del C. Co., se halla restringida a las operaciones que constituyen su objeto social, las cuales, se reitera, se encuentran expresamente autorizadas por la ley; así mismo, dicho atributo se extiende a aquellos actos que tengan por finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la compañía y a los actos directamente relacionados con la actividad principal, cuya armonía con ésta, tal como lo expresa la Superintendencia Bancaria en la resolución por la cual se multó a la Fiduciaria bursátil S.A. “deberá siempre expresarse a través de una relación instrumental —de medio a fin— cuyos extremos serán, en su orden, el acto considerado y la empresa o actividad prevista en los estatutos de la compañía”.</p> <p>De consiguiente, si la sociedad fiduciaria tiene en términos generales por actividad principal la celebración de negocios fiduciarios traslaticios y no traslaticios, es decir, de contratos de fiducia mercantil y de encargo fiduciario, a través de los cuales gestiona negocios ajenos, su capacidad jurídica se circunscribe a la realización de tales negocios, y se extiende tanto a aquéllos actos directamente relacionados con dicho objeto social principal como a los</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>que tengan por finalidad cumplir las obligaciones y ejercer los derechos derivados de la existencia y funcionamiento de la compañía, v. gr. los derechos y obligaciones derivados de sus relaciones laborales.</p> <p>Así las cosas, y dado que las sociedades fiduciarias no tienen previsto dentro de su objeto social principal la facultad de desarrollar habitualmente, a nombre propio, operaciones a futuro, solamente podrían celebrar operaciones de dicha naturaleza en la medida en que las mismas fueran consideradas como acto conexo o complementario de la actividad principal, para lo cual, como ya se precisó, debe existir relación directa de medio a fin con su objeto social exclusivo.</p> <p>En este orden de ideas, debe precisar la Sala si la celebración habitual por parte de la actora de compraventas de títulos a futuro, desbordó el ámbito de la capacidad de la actora.</p> <p>El mercado de futuros, (...) es un mercado financiero en el cual se celebran contratos de compraventa para entrega futura de un determinado activo y que brinda la oportunidad de que quien compró pueda vender el activo adquirido antes del vencimiento del plazo para la entrega</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>(...) Por tanto, no resulta de recibo el argumento según el cual la actuación de la Fiduciaria fue en interés del Fondo Común Ordinario, a través de la figura del mandato sin representación en virtud del cual las operaciones a futuro se celebraron a nombre propio pero por cuenta ajena, pues el negocio fiduciario exige la separación de los bienes fideicomitidos de los demás bienes de otros fideicomisos, y de los bienes propios de la sociedad fiduciaria, lo cual significa que el fiduciario no compromete su responsabilidad patrimonial, en tanto que en el mandato sin representación no existe tal separación y el mandatario sí compromete su propio patrimonio, por lo que en la administración de un Fondo Común Ordinario no existe la posibilidad de actuar en nombre propio pero por cuenta del fideicomitente o del patrimonio autónomo, y por ende, la Fiduciaria sólo actúa en nombre y por cuenta de otro y así debe darlo a conocer en el desarrollo de la gestión a ella encomendada.</p> <p>(...) A juicio de la Sala, la celebración a nombre propio y de manera habitual de operaciones a futuro por parte de la Fiduciaria Bursátil S.A., en manera alguna guarda relación de medio a fin con su actividad principal que es la gestión de negocios ajenos a través del genéricamente conocido como negocio fiduciario, pues no se ve</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>cómo una actividad ejercida a nombre propio tenga en lógica algún tipo de relación con otra actividad que se ejerce a nombre y por cuenta de otro, máxime si se tiene en cuenta que de conformidad con lo previsto en el artículo 1234 del C. Co., es deber indelegable del fiduciario mantener los bienes de la fiducia (y obviamente del encargo), separados de los suyos y de los que corresponden a otros negocios fiduciarios.</p> <p>(...) Admitir que los actos que desarrolle la fiduciaria para sus clientes pueden también ser ejecutados en interés propio, llevaría a situaciones aún contrarias a la ley, pues si por ejemplo, el objeto de una determinada fiducia fuera el de destinar unos recursos para adquirir a favor del patrimonio autónomo inmuebles en el número en que resultare posible según las instrucciones, al igual que la administración de los mismos, y que con las resultas de la administración se siguieran adquiriendo inmuebles, durante un lapso por decir algo de, 5 años, no puede significar el que la sociedad fiduciaria durante dicho lapso pueda adquirir indiscriminadamente inmuebles para incrementar su propio patrimonio, ya que el artículo 110 del E.O. del Sistema Financiero, prevé una serie de limitaciones y restricciones en relación con ese preciso tipo de inversión, el cual se hallaría claramente</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

						desconocido de admitirse tal situación.”		
26/07/1996 Rad. 7739	Liquidación de sociedad fiduciaria	26-07-96	Banco Cafetero	Nulidad de las resoluciones 4254 del dieciséis (16) de noviembre de mil novecientos noventa (1990) expedida por la Superintendencia Bancaria y 263 del veintiséis (26) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992) expedida por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.	Julio Enrique Correa Restrepo	<p>Cuándo una sociedad fiduciaria entre en estado de liquidación, ¿se entiende que dentro de la masa patrimonial, están comprendidos los bienes que hacen parte de los patrimonios autónomos, y por lo tanto, los acreedores de estos últimos deberán hacer parte del proceso concursal? (P.J.):</p> <p>“En efecto, en desarrollo del contrato de fiducia, se transfiere el dominio de los bienes fideicomitidos, al fiduciario, para el cumplimiento de un determinado fin, pero los mismos tampoco entran a hacer parte del patrimonio propio de la sociedad fiduciaria, por constituir desde ese momento, un patrimonio autónomo sin personería jurídica del que sólo se puede disponer para llevar a cabo la finalidad encomendada y que por tanto tampoco constituye garantía de los acreedores de la sociedad fiduciaria. Por lo anterior, el fiduciario está en la obligación de mantener separados contablemente los bienes fideicomitidos de los suyos propios y de los demás negocios fiduciarios.</p> <p>El patrimonio autónomo así confirmado, a pesar de no tener personería jurídica, puede ser sujeto de derechos y obligaciones como consecuencia de la administración que de él haga la sociedad fiduciaria, que lo representa,</p>	-Patrimonio autónomo -Prelación de créditos -Separación patrimonial de sociedades fiduciaria	FALLA: CONFIRMASE el fallo apelado

					<p>al servicio del contrato de fiducia, pues el objeto de éste determina el manejo de los bienes y las obligaciones de la fiduciaria, como quiera que el patrimonio fideicomitado debe destinarse al cumplimiento de la finalidad indicada.</p> <p>En atención a sus características especiales, el contrato fiduciario sólo puede celebrarse a través de las sociedades fiduciarias en tal calidad, que por ser sociedades de servicios financieros cuya actividad es de interés público, están sujetas a estatutos especiales.</p> <p>Tal como se precisó en el juicio 7450, con ponencia del Magistrado Delio Gómez Leyva, las sociedades fiduciarias están en la obligación de sujetarse a las normas de los establecimientos bancarios, de tener objeto exclusivo y de constituirse como sociedades anónimas o cooperativas, cuando sean filiales de entidades de la misma naturaleza.</p> <p>En consecuencia, su capacidad jurídica como sociedades comerciales que son, según lo previsto en los artículos 99 y 100 del Código de Comercio, debe circunscribirse a las actividades derivada de su objeto social, expresamente autorizados por el legislador, en virtud del cual gestiona negocios ajenos, de suerte que se le permite efectuar transacciones en</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>desarrollo tanto de su objeto social principal, como de las actividades propias de la sociedad.</p> <p>Conforme a lo anterior caben dos precisiones, a saber:</p> <p>La primera, para advertir que la sociedad fiduciaria está obligada a mantener separados jurídica y contablemente los bienes objeto de la fiducia, afectos a un determinado fin, de su activo propio y de los demás negocios fiduciarios, de manera que siempre sea posible establecer a qué negocio o negocios corresponde determinado bien o transacción, e igualmente a individualizar cuando se efectúen depósitos bancarios con dinero proveniente de negocios fiduciarios, que no puede aparecer como propio.</p> <p>La segunda, relativa a que en virtud de tal obligación, al momento de la liquidación de una sociedad de esta naturaleza, debe conformarse la masa de la liquidación , con todos los bienes actuales y futuros de la entidad que se liquida o que se ha sido intervenida, pues la totalidad de su patrimonio constituye la prenda general de sus acreedores, por lo cual consecuentemente se excluyen entre otros, los bienes que tenga la entidad en calidad de depositario o fiduciario, pues como ya se explicó, estos no</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>hacen parte del patrimonio de la sociedad y por ende no integran la garantía general de sus acreedores.</p> <p>(...) Tratándose de los acreedores de cada patrimonio autónomo, cuyos créditos deben ser cancelados con ocasión de la liquidación de la sociedad fiduciaria, al no existir norma especial que regule tal circunstancia, deben acogerse las disposiciones que de manera general regulan tal situación y que resultan aplicables por expresa disposición legal, a la masa de la liquidación de las sociedades fiduciarias, vale decir, los artículos 2488 y siguientes del Código Civil, entre los que se destacan el 2493 que consagra como causal de preferencia la hipoteca, el 2497 que establece como crédito de segunda clase el garantizado con prenda y el 2501 que libera a los acreedores hipotecarios de la obligación de aguardar las resultas del concurso general para proceder a ejercer sus acciones...”.</p> <p>Sin embargo la normatividad anterior de ninguna manera resulta aplicable a la restitución de los bienes fideicomitidos en los patrimonios autónomos, pues en tal caso no se trata de acreedores del negocio fiduciario, sino de la devolución de los bienes y haberes a los constituyentes, cuyo trámite se rige por el Artículo 9º del Decreto 2217 de 1982.”</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

25/04/97 Rad. 971	- encargo fiduciario	25-04- 1997	Director del DANE	El señor director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, doctor Edgardo Alberto Santiago Molina, consulta a la Sala acerca de aspectos relacionados con el contrato interadministrativo o de encargo fiduciario celebrado el 30 de julio de 1993 entre el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, FONDANE y Fiduciaria La Previsora Ltda.	Javier Henao Hidrón	<p>“De conformidad con el anterior estatuto de esa naturaleza (decreto ley 222 de 1983), al no encontrarse incluidos en el listado de los contratos administrativos, enumerados en su artículo 16, el de encargo fiduciario y el de fiducia mercantil pertenecían a la categoría de “contratos de derecho privado de la administración”, sujetos éstos en sus efectos y según su naturaleza, a normas civiles, comerciales y laborales.</p> <p>(...) Por su parte, el Código de Comercio prescribe, entre los deberes del fiduciario, los que conciernen a realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia y, cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones, pedir instrucciones al Superintendente Bancario (art. 1234, numerales 1º. y 5º.).</p> <p>De manera expresa, la ley 80 de 1993, que contiene el nuevo estatuto general de contratación de la administración pública, dispuso en relación con los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil que a la fecha de promulgación de esta ley hayan sido suscritos por entidades estatales”, que continuarán vigentes en los términos convenidos con las sociedades fiduciarias.</p> <p>(...) El contrato de encargo fiduciario</p>	-Contrato inter administrativo -Ley 80 de 1993 -Contratación pública	Fiduciaria La Previsora Limitada debe liquidar los contratos que celebró en cumplimiento del contrato interadministrativo de encargo fiduciario suscrito con el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, FONDANE, con observancia del procedimiento indicado en los artículos 287, 288 y 289 del decreto ley 222 de 1983.
----------------------	-------------------------	----------------	----------------------	--	------------------------	---	--	---

						<p>que es materia de la consulta, fue celebrado con antelación a la expedición de la ley 80 de 1993 y por ende se rige por la legislación entonces vigente, e implica un mandato sin transferencia de bienes y sin representación, al cual son aplicables normas de derecho privado. En desarrollo del mismo, la sociedad fiduciaria, (...)en su condición de encargada de la celebración de los contratos derivados del contrato principal, procede de acuerdo con las normas de derecho privado que correspondan a la esencia y naturaleza de aquéllos.</p> <p>Por consiguiente, es a la sociedad fiduciaria (...),- a la que corresponde la liquidación de dichos contratos, para lo cual deberá proceder con sujeción a las condiciones y al procedimiento previstos por el decreto ley 222 de 1983, en su Título XI, que lleva precisamente el nombre de Liquidación de los contratos”.</p>		
04/03/1998 – Rad. 1074	Fiducia pública y encargo fiduciario	03-03-98	Ministro del Interior	El señor Ministro del Interior, formula a la Sala la siguiente consulta : 2. Cuál es el alcance jurídico de la disposición contenida en la parte final	César Hoyos Salazar	<p>“Una interpretación armónica de las normas de la ley 80, (...) conduce a establecer dos modalidades de negocio fiduciario que pueden contratar las entidades estatales, a saber:</p> <p>a) Los encargos fiduciarios, figura en la cual no hay transferencia de la propiedad de los bienes fideicomitidos. La ley 80 de 1993 la</p>	<p>-Contratación pública -Ley 80 de 1993 -Fondo nacional para la atención integral a la población desplazada por la violencia</p>	<p>2.1 La norma contenida en el inciso 8º del numeral 5º del artículo 32 de la ley 80 de 1993, según la cual “A la fiducia pública le serán</p>

				<p>del inciso noveno, del numeral quinto del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 : “ A la fiducia pública le serán aplicables las normas del Código de Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley”, en lo que hace relación a los actos que se deben surtir a través de esta modalidad fiduciaria, tales como los de naturaleza precontractual, contractual y poscontractual ?</p>	<p>autoriza solamente para administrar o manejar los recursos vinculados a contratos que las entidades estatales celebren (art. 32-5º inc. 3º), lo cual se encuentra en consonancia con la disposición según la cual los pagos correspondientes a los contratos celebrados por las entidades para la prestación de los servicios de salud, se pueden hacer mediante encargos fiduciarios (art. 24-1º letra l) y con aquella que establece que los fondos destinados a la cancelación de obligaciones derivadas de contratos estatales pueden ser entregados en administración fiduciaria (art. 25-20).</p> <p>b) La fiducia pública, la cual constituye una nueva figura jurídica, creada por la ley 80 de 1993, y que si bien porta el nombre de fiducia se diferencia en varios elementos esenciales de la tradicional fiducia mercantil.</p> <p>En efecto, por regla general la llamada fiducia pública no implica transferencia de dominio sobre los bienes o recursos estatales, ni constituye tampoco un patrimonio autónomo, distinto del propio de la entidad estatal (art 32-5º inc. 8º). De manera excepcional, la misma ley 80 prevé en el artículo 41 parágrafo 2º inciso 2º la constitución de patrimonios autónomos, con entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia</p>		<p>aplicables las normas del Código de Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley”, significa que a la fiducia pública se le aplican las normas de la fiducia mercantil contempladas en el mencionado Código, con las siguientes cuatro salvedades: a) en la fiducia pública no hay transferencia de la propiedad de los bienes o recursos fideicomitidos; b) no se constituye un patrimonio autónomo; c) la adjudicación de</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

					<p>Bancaria, para desarrollar procesos de titularización de activos e inversiones y para el pago de pasivos laborales.</p> <p>Además, hay dos particularidades que contiene la ley 80, que son aplicables tanto al encargo fiduciario como a la llamada fiducia pública, y consisten en que la adjudicación de los contratos que se celebren en desarrollo del encargo o de la fiducia pública, tienen como sujeto contratante a las entidades estatales fideicomitentes, de manera que no se pueden delegar a las sociedades fiduciarias y que la remuneración o comisión de la fiduciaria no se puede pactar con cargo a los rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se encuentren presupuestados (art. 32-5º inc. 3º).</p> <p>La misma norma precisa en el inciso sexto, que los contratos que se realicen en desarrollo de un contrato de fiducia pública deben sujetarse a las normas de la ley 80, lo cual significa que si por la cuantía o por el hecho de no encontrarse uno de esos contratos en las previsiones de contratación directa del artículo 24, éste requiere de licitación pública, la sociedad fiduciaria, sea estatal o privada, debe realizar tal procedimiento, aunque, como se indicó, la adjudicación la debe efectuar la entidad estatal fideicomitente. A la excepción prevista en el artículo antes indicado se agregan la consignada en el</p>		<p>los contratos derivados de ella corresponde a la entidad estatal fideicomitente, y c) la comisión de la sociedad fiduciaria no se puede cancelar con los rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos estén presupuestados. Lo anterior no se aplica respecto de los casos en que dicha ley autoriza patrimonios autónomos, como tampoco para el caso de la fiducia mercantil previsto en ley posterior.</p> <p>En relación con la etapa precontractual, las entidades estatales para</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

					<p>artículo 41 parágrafo 2º inciso 9º de la misma ley para las operaciones de crédito público y las conexas con éstas, que se contratarán en forma directa, y las demás que en forma expresa establezca el estatuto de contratación o leyes posteriores.</p> <p>Estas características hacen que el tipo de contrato que regula la ley mencionada, sea diferente del contrato de fiducia mercantil establecido en el Código de Comercio y por tanto, constituye un contrato nuevo que se aplica para las entidades estatales, sin que signifique que haya modificado la fiducia mercantil, pues ésta permanece igual, fiel a sus postulados tradicionales, ya que la ley 80 de 1993 no entró a modificar el Código de Comercio.</p> <p>El punto que desconcierta es que se haya denominado fiducia a ese tipo de contrato, que se asimila más al encargo fiduciario por la no transferencia de propiedad, pero ello está dentro de la potestad del legislador de crear nuevas formas contractuales, así sea variando elementos esenciales de contratos conocidos o llamándolos con los nombres de éstos.</p> <p>(...) Sin embargo, para casos especiales la ley puede autorizar la celebración por entidades estatales de la fiducia mercantil. La propia ley 80 de</p>		<p>celebrar tanto el encargo fiduciario como la fiducia pública, requieren surtir el procedimiento de licitación o concurso públicos, salvo lo que se disponga en normas especiales.</p> <p>En cuanto a la parte contractual, el clausulado del encargo fiduciario y de la fiducia pública debe observar las cuatro salvedades expuestas anteriormente.</p> <p>Respecto de la etapa poscontractual, los negocios fiduciarios celebrados por entidades</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

					<p>1993 en su artículo 41 párrafo 2º inciso 2º consigna la posibilidad de constituir patrimonios autónomos para el desarrollo de procesos de titularización de activos e inversiones y para el pago de pasivos laborales. Así mismo, la ley 101 de 1993, artículo 30, prevé la posibilidad de un contrato especial de fiducia para administrar un fondo de contribuciones parafiscales agropecuarias y la ley 143 de 1994, artículo 13, en forma expresa establece que la Unidad de Planeación Minero-Energética de que trata el artículo 12 del decreto 2119 de 1992 manejará sus recursos presupuestales y operará a través del contrato de fiducia mercantil.</p> <p>Ahora bien, en cuanto al cuestionamiento sobre la interpretación de la parte final del inciso 8º del numeral 5º del artículo 32, transcrito en el párrafo anterior, habría que entender que a la fiducia pública se le deben aplicar las normas contenidas en los artículos 1226 a 1244 del Código de Comercio, con las siguientes cuatro salvedades:</p> <ol style="list-style-type: none">1) La fiducia pública no implica transferencia de la propiedad de los bienes o recursos fideicomitados.2) Tampoco constituye un patrimonio autónomo afecto a la finalidad de la fiducia, en manos de la sociedad fiduciaria.		<p>estatales, deben ser objeto de la liquidación del contrato prevista en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 o disposiciones legales especiales.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

					<div>3) La adjudicación de los subcontratos debe ser realizada por la entidad estatal fideicomitente.</div> <div>4) No se puede pactar que la comisión de la sociedad fiduciaria sea tomada de los rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se encuentren presupuestados.</div> <div>En cuanto a la etapa precontractual o el procedimiento de contratación de cualquiera de los negocios fiduciarios, esto es, el encargo fiduciario y la fiducia pública, por parte de las entidades estatales, se debe efectuar la licitación pública o el concurso establecidos en el parágrafo del artículo 30 de la ley 80.</div> <div>(...) En cuanto a la parte contractual, el encargo fiduciario se debe realizar sólo para manejar recursos relacionados con un contrato ya celebrado y debe cumplir los cuatro puntos arriba mencionados, la fiducia pública debe observar en su clausulado los mismos cuatro puntos y la fiducia mercantil en su texto debe seguir la normatividad del Código de Comercio.</div> <div>En relación con la etapa poscontractual, los negocios fiduciarios celebrados por entidades estatales requieren surtir el trámite de liquidación de los contratos, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 60 de la ley 80 o por leyes especiales.”</div>		
--	--	--	--	--	---	--	--

26/08/98 Rad. 1121	– Remuneración en la fiducia pública y encargo fiduciario	26-08-1998	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<p>Por esta razón, el señor Ministro formula a la Sala la siguiente consulta :</p> <p>2. ¿Es viable jurídicamente adicionar el contrato en más de un cincuenta por ciento del valor inicial ?</p>	Cesar Hoyos Salazar	<p>“Los elementos del contrato estatal. El artículo 13 de la ley 80 de 1993 somete los contratos que celebren las entidades estatales a las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en dicha ley. Según el artículo 32 de la misma ley son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a las cuales se refiere el estatuto de contratación, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, define el artículo citado.</p> <p>Por su parte, el Código Civil señala, en el artículo 1501, que en cada contrato se distinguen las cosas que son de su esencia, esto es, aquellas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; las que son de su naturaleza, o sea las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y las accidentales, que son aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen a un contrato, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.</p> <p>Algunos autores extranjeros distinguen dos clases de elementos en los contratos administrativos : a) los esenciales, y b) los propios de la</p>	<p>-Elementos esenciales, naturales y accidentales de un negocio jurídico.</p> <p>-Onerosidad del contrato de fiducia</p>	<p>(...) La determinación del precio pactado en el contrato de fiducia objeto de esta consulta, la cual debe hacerse conforme a las reglas previstas en el contrato, en cuanto no sean ineficaces, no constituye una adición del contrato y por consiguiente no está limitada al monto previsto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993.</p>
-----------------------	---	------------	--	---	---------------------	---	---	---

					<p>naturaleza, o no esenciales. Estos últimos, también han sido denominados “eventuales”, “accidentales o accesorios”. Dentro de la primera clase incluyen los sujetos, el consentimiento, el objeto, la causa, la finalidad y la forma; y en la segunda analizan el plazo, la licitación y pliego de condiciones, las garantías y las sanciones. Naturalmente la determinación de los elementos constitutivos del contrato estatal depende del régimen jurídico positivo de cada país.</p> <p>La ley 80 de 1993 dispone en su artículo 40 que las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en dicha ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Y, el artículo 41 ibídem prescribe : “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”.</p> <p>“Perfeccionar” significa completar los requisitos exigidos para que el contrato tenga plena fuerza jurídica. Por tanto, la omisión de cualquiera de los requisitos previstos en las disposiciones legales, salvo excepciones consignadas en las mismas, determina que el contrato no se forma, no produce efecto alguno.</p> <p>(...) La exigencia de la formalidad del</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>escrito en los contratos de las entidades estatales está consignada en el artículo 39 de dicho estatuto. Con todo, no se requiere escritura pública sino en los casos determinados en el mencionado artículo; ni se exigen las formalidades plenas cuando se trate de contratos cuyos valores correspondan a los que se relacionan en la misma norma. Así mismo, conforme al inciso 3º del artículo 41 ibídem, en caso de situaciones de urgencia manifiesta se podrá omitir el escrito y aún el acuerdo acerca de la remuneración, la cual se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado.</p> <p>Al prever el artículo 40 de la ley 80 que las estipulaciones que corresponden a la esencia y naturaleza del contrato no son sólo las de las normas civiles y comerciales, sino también las previstas en dicha ley, y estatuir el artículo 41 de la misma ley que el contrato se perfecciona al reunir, entre otros requisitos, el acuerdo sobre la contraprestación (el precio), debe concluirse que dicho elemento es de la esencia de todo contrato estatal oneroso, así la misma disposición permita en los casos de urgencia manifiesta posponer el acuerdo sobre la remuneración.</p> <p>La contraprestación en los contratos estatales está sujeta a diversas modalidades, según la especie de</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>contrato.</p> <p>(...) Por ser la fiducia la materia objeto de la consulta, debe indicarse que el Código de Comercio, en el artículo 1226, define el contrato de fiducia mercantil sin incluir como elemento esencial del mismo un precio o contraprestación. Y, en el artículo 1237 establece que “Todo negocio fiduciario será remunerado conforme a las tarifas que al efecto expida la Superintendencia Bancaria”. Sin embargo, esta entidad aún no ha fijado dichas tarifas.</p> <p>En caso de no pactarse expresamente la remuneración de la fiducia o encargo fiduciario, o de convenir las partes contratantes que no habrá lugar al pago de retribución, se entiende que hay derecho a ella, según lo dispuesto en el artículo mencionado, sin que el hecho de no pactarla o el acuerdo de no cobrarla determinen que el contrato no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Por tanto, la remuneración en el contrato de fiducia, en el ámbito de la contratación mercantil, es de la naturaleza y no de la esencia del mismo. En cambio, en la contratación estatal dicha remuneración, por constituir la contraprestación un requisito para el perfeccionamiento del contrato, se torna en elemento esencial de los contratos de fiducia pública y de encargo</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>fiduciario.</p> <p>El sistema de tarifas, que la ley mercantil prevé para la fiducia, indica que, según la clase de negocio fiduciario, aquellas pueden corresponder, entre otras, a las siguientes modalidades : una suma fija determinada, una cifra acordada entre una cantidad mínima y una máxima, una cifra equivalente a un porcentaje fijo, una cifra equivalente a un porcentaje gradual creciente o decreciente, o la combinación de algunas de las formas indicadas.</p> <p>La adopción del sistema de porcentaje obedece, en muchos casos, a la incertidumbre sobre el monto del valor de las cosas que serán objeto de la finalidad determinada por el constituyente de la fiducia o encargo fiduciario.</p> <p>Surge entonces una primera cuestión : ¿la exigencia de acuerdo sobre la contraprestación implica que ésta debe ser determinada o puede ser determinable ? La Sala considera que esta pregunta la absuelve el artículo 1518 del Código Civil al fijar reglas sobre las cosas que pueden ser objeto de la declaración de voluntad. En efecto, esta norma prescribe : “La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla”.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

CE 04/09/1998	Encargo publico/ Consortio	04/09/1998		La demanda está dirigida contra los incisos 1º y 5º del numeral 1º de la Carta Circular 69; del 18 de agosto de 1994	Julio E. Correa Restrepo	<ul style="list-style-type: none">• Luego no es posible darle al fenómeno de la pérdida de fuerza ejecutoria los mismos efectos de una causal de nulidad, pues esta institución de la nulidad del acto es totalmente diferente.• Es suficiente que una norma jurídica de carácter general haya tenido vigencia por un pequeño lapso, para que la jurisdicción de lo contencioso ante una demanda en su contra deba pronunciarse sobre su legalidad, puesto que el control del juez es necesario dados los efectos jurídicos que pudo haber producido durante el lapso de su vigencia y en procura del mantenimiento del orden jurídico.• La norma acusada está dirigida a los representantes legales y revisores fiscales de las sociedades fiduciarias y de los almacenes generales de depósito que obren como representante del consorcio o unión temporal, e imparte instrucciones contables que deben observar en tanto se conformen consorcios o uniones temporales entre sociedades fiduciarias para la ejecución de contratos de encargo fiduciario o de fiducia pública y prevé a	<ul style="list-style-type: none">- Consorcio- Almacenes generales- Representantes legales- Contabilidad- Uniones temporales- Sociedades fiduciarias- Contratos de encargo fiduciario	NIÉGANSE las pretensiones de lo demanda. Copíese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha
--------------------------------	----------------------------------	------------	--	--	-----------------------------	---	---	---

						<p>cargo de la sociedad fiduciaria a almacén general que actúe como representante del consorcio, la obligación de reportar unificadamente los estados financieros del consorcio y en forma simultánea a la transmisión de sus propios estados financieros.</p> <ul style="list-style-type: none">• Igualmente determina que en la contabilidad del consorcio y no en la de los partícipes deberán registrarse en forma unificada los ingresos, costos y deducciones que se deriven del contrato, con el fin de reportar como una unidad el resultado de la operación.• El asunto concreto recae sobre información de estados financieros de operaciones provenientes de la conformación de consorcios o uniones temporales entre sociedades fiduciarias para celebrar contratos de encargo fiduciario o de fiducia pública, o cuando éstos sean conformados por almacenes generales de depósito. Por tanto las previsiones acusadas no deben mirarse desde el punto de vista de las relaciones con el fisco, sino como instrumentos de verificación y control de la forma como se desarrollan las		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>actividades de las vigiladas.</p> <p>En efecto, el control no es sobre el consorcio, es sobre la operación misma, la finalidad de la circular El consorcio ha sido entendido como la pluralidad de personas unidas bajo esa denominación, que no da origen a una persona jurídica sujeta a derechos y obligaciones distinta de sus miembros, dado que ésta es una modalidad contractual mediante la cual dos o más personas se unen para el desarrollo de actividades económicas, aportando capital y tecnología, pero conservando su autonomía personal y administrativa y financiera y por ende no tienen personería.</p>		
CE 17/06/1999	Fiducia Publica	17/06/1999		Acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, contra el Decreto 2356 de 29 de diciembre de 1995, “Por el cual se constituye un fondo prestacional especial en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y	Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez	<ul style="list-style-type: none">• El Decreto 2356 de 29 de diciembre de 1995, se expidió por el Presidente de la República, “en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y de lo previsto en el artículo 283 de la Ley 100 de 1993”.• La constitución de patrimonios autónomos prevista en el artículo 283 está condicionado a reunir los siguientes requisitos; Que se trate de recursos con destino para el pago de prestaciones distintas a las consagradas en la misma ley	<ul style="list-style-type: none">- Prestaciones- Fondo prestacional especial- Patrimonio autónomo- Reservas- Fiduciario- Fondo de Solidaridad Agropecuario	<p>1. DECLÁRASE la nulidad del Decreto 2356 de 29 de diciembre de 1995, “por el cual se constituye un fondo prestacional especial en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional.</p> <p>2. Por no haber</p>

				<p>Minero, y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional.</p>		<p>para el sector público. Que sean administrados por encargo fiduciario. Que las reservas requeridas para dichas prestaciones excedan las proporciones de activos que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• “El fondo prestacional especial, constituido por el Decreto 2356 de 1995, sin lugar a dudas destina sus recursos al pago de las pensiones de jubilación, prestación a la que se refiere la ley de seguridad social, tal y como lo confirma el contrato de fiducia mercantil celebrado entre la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y el consorcio XXX, cuya copia simple fue enviada a esta corporación tanto por la citada caja como por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en respuesta a la solicitud presentada en tal sentido por esta corporación en uso de su facultad oficiosa de decretar pruebas, entidades que enviaron sendos oficios, obrantes a folios 302 y 323 del cuaderno principal, en los que manifiestan:”		<p>sido utilizada, devuélvase la suma depositada para gastos ordinarios del proceso.</p> <p>3. En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.</p> <p>.</p>
--	--	--	--	---	--	---	--	---

CE 3 Feb/00	Fiducia pública	03-02-00	SOCIEDAD CONFECIONES CEM LTDA.		Dr. RICARDO HOYOS DUQUE	<ul style="list-style-type: none">• La naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones o términos de referencia que elabora la administración pública para la contratación de sus obras, bienes o servicios, está claramente definida en tanto son el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección del contratista y delimita el contenido y alcances del contrato, al punto que este documento regula el contrato estatal en su integridad, estableciendo una preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista particular no sólo en la etapa de formación de la voluntad sino también en la de cumplimiento del contrato y hasta su fase final• Los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato porque son la fuente principal de los derechos y obligaciones de las partes y son la base para la interpretación e integración del contrato, en la medida que contienen la voluntad de la administración a la que se someten por adhesión los proponentes y el contratista que resulte favorecido. Por tal motivo, las reglas de los pliegos de condiciones deben prevalecer sobre los demás documentos del contrato.• Sobre la naturaleza jurídica de la propuesta que se formula por el particular interesado en la invitación de la administración, los estatutos contractuales y particularmente los pliegos de condiciones señalan los requisitos y formalidades que ésta debe atender, tales como los relativos al sujeto o calidades que debe reunir el potencial oferente, los del objeto, su forma, etc. y en general todos los pormenores que la administración exige para que ésta sea jurídicamente eficaz y válida,	<ul style="list-style-type: none">- Contratación estatal- Pliegos de condiciones y términos de referencia Perfeccionamiento del contrato	<p>REVOCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de septiembre de 1994 y en su lugar se dispone:</p> <p>Primero. INAPLICASE el parágrafo 1º del artículo 217 del Acuerdo No. 6 de 1985 - Código Fiscal Distrital- por resultar violatorio del art. 5º de la Ley 19 de 1982.</p> <p>Segundo. DECLARASE LA NULIDAD de las resoluciones 000292 del 25 de septiembre de 1991 y 000352 del 29 de octubre de 1991 expedidas por la directora ejecutiva del FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT-.</p> <p>Tercero. En firme este proveído, devuélvase el expediente al tribunal de origen.</p>
----------------	-----------------	----------	--------------------------------	--	-------------------------	--	---	---

						<p>que lo será si se ajusta material y formalmente al pliego de condiciones.</p> <ul style="list-style-type: none">• La ley 80 de 1993 precisó que "los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y las contraprestaciones y éste se eleve a escrito" y los requisitos que en el anterior régimen se requerían para perfeccionar el contrato pasaron a ser requisitos para su ejecución, lo cual significa que desde el momento en que las partes firman el contrato, éste existe como tal en el mundo del derecho.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

CE 16/09/20 01	Fondo común ordinario	16/09/20 01	XXX	Se declare la nulidad de las resoluciones 697 de 30 de junio de 1998 de la división de liquidación de la DIAN y 362 de 30 de diciembre de 1998 que decide el recurso de reconsideración por la división jurídica tributaria de la DIAN.	Dra. María Inés Ortiz Barbosa	<ul style="list-style-type: none">• La sala analiza la legalidad de las resoluciones 697 de 30 de junio 1998 y 362 de 30 de diciembre de 1998 por medio de las cuales se le impuso una sanción al fondo común ordinario, alegando que no envió correctamente la información tributaria, generando el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 631 del estatuto tributario.• La demandante fiduciaria dice que el fondo común ordinario carece de personería jurídica y por ello no es posible imponerle obligaciones.• La sala precisa en que conforme al artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero se entiende por fondo común, “un conjunto de recursos obtenidos con ocasión de la celebración y ejecución de negocios fiduciarias en los cuales se consagra como finalidad principal la inversión de los mismos en títulos, en los términos señalados por el legislador.”• Precisa que los fondos comunes ordinarios no son sujetos de derecho u obligaciones pues están carecen de personalidad jurídica.• Se le permite al director general de impuestos nacionales la solicitud de información a las personas, entidades contribuyentes y no contribuyentes, con el fin de estudiar esa información y ejercer un control adecuado de los tributos.• De aquí que fue necesario precisar que los fondos comunes ordinarios no son personas, tampoco son entidades pues el estatuto tributario distingue entre las entidades y los fondos comunes. De lo anterior que no tienen obligación de otorgar la información	- Fiduciaria - Fondo Común ordinario - Dian - Estatuto tributario - Debido proceso	<p>1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.</p> <p>2. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demanda a la doctora XXX, de conformidad con el poder que obra a folio 137.</p> <p>Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.</p> <p>Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.</p>
---	-----------------------------	----------------	-----	---	-------------------------------	--	--	---

						<p>según el artículo 631 del estatuto tributario.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pero de eso no puede concluirse que la administración tributaria no pueda obtener información sobre esos fondos, pues, es a la fiduciaria que se le debe exigir y la obligada a otorgarla y de incumplir se debe hacer la sanción a la fiduciaria respectivamente• Por no habersele pedido a la fiduciaria sino directamente al fondo común se viola el debido proceso.		
CE 27 Jul/05	Fiducia pública	27-07-05	Contraloría General del Departamento de Risaralda		Dr. RAMIRO SAAVEDRA BECERRA	<ul style="list-style-type: none">• La titularización es un mecanismo financiero a través del cual las entidades o empresas del sector financiero, obtienen recursos provenientes de su propio balance a través de lo que se conoce como movilización de activos, mediante la emisión de títulos que ingresan a los mercados públicos de valores. Su importancia, radica en el hecho de no incrementar los pasivos toda vez que no implica una operación de endeudamiento para la empresa que busca ayudarse por esta vía.• La fiducia mercantil es un contrato, por medio del cual un sujeto llamado fiduciante o fideicomitente, transfiere bienes o derechos a otro, llamado fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario• El contrato de fiducia mercantil es un contrato distinto del	<ul style="list-style-type: none">- Titularización- Contrato de fiducia mercantil- Entidades públicas- Patrimonio autónomo	CONFIRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 6 de junio de 1997.

						<p>mandato, toda vez que el fiduciario compromete los bienes afectados, sin que sus actos se puedan entender como realizados por cuenta de otro. Por esta razón el fiduciario no contrata a nombre del fiduciante, sino en nombre y por cuenta del patrimonio autónomo del cual es titular. Difiere del encargo fiduciario porque comporta la transferencia de la propiedad de los bienes fidelcomitados, en tanto que el encargo no, pues sólo existe la entrega de los bienes</p> <ul style="list-style-type: none">• Los bienes o derechos fidelcomitados salen del patrimonio del fiduciario, forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo, se mantienen separados del resto del activo del sujeto fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios. Estos bienes no pueden ser embargados por los acreedores posteriores a la constitución, tampoco son susceptibles de libre disposición por su parte y sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida• La titularización comporta la celebración de un contrato de fiducia mercantil, para transferir los bienes o derechos titularizables de la entidad pública originadora al patrimonio autónomo constituido con el objeto de que la sociedad fiduciaria, vigilada por la Superintendencia, lo administre, emita y coloque títulos en el mercado; las entidades públicas, por tanto, están facultadas para celebrar contratos de fiducia mercantil en desarrollo de las etapas propias del procedimiento de titularización• La regla contenida en el artículo 32 de la ley 80 de 1993 según la cual "La fiducia que se autoriza para el sector		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>público en esta ley, nunca implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituirá patrimonio autónomo del propio de la respectiva entidad oficial, sin perjuicio de las responsabilidades propias del ordenador del gasto", no impide la realización de contratos de fiducia mercantil, en desarrollo de los procesos de titularización autorizados a las entidades públicas</p>		
CE Sep 8/05	Circulares de la Superintendencia Bancaria	08-09-05	IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		Dra. MARIA INES ORTIZ BARBOSA	<p>• La Corte Constitucional estableció que “ si esas sanciones son impuestas por la Superintendencia Bancaria, entonces debe tratarse de intervenciones de esa entidad en ejercicio de su labor básica de policía administrativa, en virtud de la cual, le corresponde inspección, vigilar y controlar a las entidades que manejen recursos captados al público, de conformidad con las normas legales pertinentes, como los artículos 325 y ss del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que definen la naturaleza, los objetivos, las funciones y las facultades de esa Superintendencia. Por ello la Corte entiende que debe tratarse de leyes y reglamentos que operen en ese ámbito. Así, en cuanto a las leyes, deben ser únicamente aquellas que se refieran explícitamente a las labores de esos funcionarios. En cuanto a los reglamentos, a fin de respetar el principio de legalidad, para la Corte es claro que debe tratarse de los reglamentos por medio de los cuales el Presidente, en desarrollo de sus facultades constitucionales, y de conformidad con la correspondiente ley marco, regula y ejerce la intervención en ese sector. Y obviamente no deben entenderse incluidos dentro de esos reglamentos las circulares o conceptos emitidos por</p>	<p>- Derecho sancionador</p> <p>- Superintendencia Bancaria</p>	<p>1 REVÓCASE la Sentencia del 16 de octubre del 2003 de la Subsección "A" de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.</p> <p>2 En su lugar ANÚLANSE PARCIALMENTE las Resoluciones Números 1179 de 26 de julio, 1671 de 31 de octubre y 2050 de 29 de diciembre del 2000.</p> <p>3 En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho FIJASE la sanción a cargo de la sociedad IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL en la suma de trece millones doscientos diez y siete mil ciento ochenta y tres pesos (\$13.217.183)</p>

						<p>la Superintendencia Bancaria”.</p> <ul style="list-style-type: none">• Como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional, la decisión administrativa sancionatoria al igual que su confirmación en vía gubernativa, perdió su soporte jurídico y por ende no puede producir efectos ni ser objeto de cumplimiento, pues las conductas constitutivas de la infracción objeto de la sanción impuesta por la Superintendencia Bancaria, corresponden a las descritas en la Circular Básica Contable y Financiera No. 100 de 1995, acto administrativo cuyo incumplimiento por parte de los entes vigilados no puede servir de sustento a dicha entidad de control para tipificar los hechos y conductas sancionables• Utilizar la Circular 100 de 1995, como soporte para mantener una sanción que aún no se encontraba en firme, constituye una aplicación indebida que genera nulidad del acto por violación del artículo 66 ordinal 2 del código Contencioso Administrativo, pues aún cuando los hechos sancionados ocurrieron con anterioridad a la providencia de la Corte, el decaimiento del acto que tipificaba la infracción, tiene como consecuencia que la sanción ya no sea aplicable y que la Superintendencia Bancaria perdió su potestad sancionadora por los hechos contemplados en las disposiciones de la circular		
CE 5 Jul/05	Póliza global bancaria	05-07-05	FRANCIS CO IGNACIO HERRERA GUTIÉRREZ		ALIER E. HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ	<ul style="list-style-type: none">• La excepción en la aplicación a la propia Ley 80 no es absoluta, toda vez que el parágrafo citado bien dice que esa excepción aplica con dos condiciones: i) que no se trate de lo dispuesto en la ley sobre fiducia y encargo fiduciario, y ii) que los contratos correspondan a aquellos que son del “giro ordinario de las actividades” de este tipo	<ul style="list-style-type: none">- Ley 80 de 1993- Entidades financieras- Giro ordinario de	DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

			EZ			<p>de entidades. Los demás contratos, es decir, los que no encajen en los supuestos mencionados, se deben regir plenamente por la Ley 80 de 1993.</p> <ul style="list-style-type: none">• El giro ordinario de las actividades de una sociedad comercial no sólo consiste en lo que define en forma concreta su objeto social, sino que incluye todos aquellos actos directamente relacionados con su objeto social, lo que denota que entre estos y aquellos debe existir una relación de necesidad que los hace parte del objeto de la sociedad.• Debido a que las entidades financieras se encuentran expuestas a riesgos de diversa índole, en especial a los del mundo de los negocios, el sistema asegurador mundial creó y ofreció a la actividad bancaria un seguro que busca proteger a estas entidades de los riesgos que son propios de este tipo de negocios.• Esta póliza cubre riesgos disímiles, no obstante que alcanzan a especializarse, en virtud de la experiencia adquirida por las aseguradoras en este campo, lo que hace que tenga características diseñadas para ella.• La contratación de la póliza global bancaria, por parte de este tipo de entes financieros se encuentra contenido, incluso, dentro de su función principal, definida por el EOSF, lo que hace que sea legal el hecho de que los contratos que celebren en este sentido se ajusten a lo que la Ley 80 de 1993 dispuso a este respecto• La contratación de este tipo de pólizas, que busca proteger los valores y ofrecer seguridad a la gestión ordinaria de los bienes y personas que se relacionan con el sistema financiero, bien puede entenderse incluido	las actividades	
--	--	--	----	--	--	---	-----------------	--

						dentro de las actividades conexas del sistema financiero, y que en esta medida hace parte del “giro ordinario de las actividades”, pues este concepto está integrado tanto por el objeto o función principal de la entidad como por las actividades conexas, que buscan facilitar y poder ejecutar aquella.		
CE 9 Mar/06	Fiduciaria en liquidación	09-03-06	ALFRED O MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. Y OTRO		Dr. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA	<ul style="list-style-type: none">• La legitimación en la causa no es propiamente un presupuesto de la demanda, sino una condición sustancial para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado, por lo cual no es de recibo que al momento de proveerse acerca de la admisión de la demanda se defina ese aspecto• Legitimación de hecho en la causa, se entiende como la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado, por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado• La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no• La falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerva la pretensión procesal en su contenido, como si lo hace la excepción de fondo, pues la excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo, que se propone o se advierte por el juzgador; para extinguir, parcial o totalmente aquella.	<ul style="list-style-type: none">- Nulidad y restablecimiento del derecho- Legitimación en la causa por activa y por pasiva- Excepciones de fondo	REVÓCASE el auto de 27 de febrero de 2003, y en su lugar, TIÉNESE como demandado en este asunto a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

						<ul style="list-style-type: none">• En la falta de legitimación en la causa material por pasiva, como es la alegada en el caso objeto de estudio, no se estudia la pretensión contra el demandado para que éste no sea condenado, sino que se estudia sí existe o no relación real del demandado con la pretensión que se le atribuye, y este no es un presupuesto de la demanda, por lo cual sí ésta reúne los requisitos para su admisión debe procederse a ello.• El grupo de requisitos que el magistrado debe estudiar para ordenar la admisión de la demanda son los siguientes: a) que el libelo se formule ante el funcionario competente de la jurisdicción administrativa; b) que la persona demandada tenga capacidad jurídica y procesal para comparecer en juicio en calidad de tal y, c) que la demanda reúna los requisitos exigidos por la ley• De acuerdo con lo establecido en el artículo 149 del C.C.A., las entidades públicas y privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes debidamente acreditados. Por su parte, el artículo 150 establece que las entidades públicas y privadas que ejerzan funciones públicas son partes en todos los procesos contencioso administrativos que se adelanten contra ellas o contra los actos que expidan		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

CE 29/06/2006	Exención de gravamen financiero / Sociedad fiduciaria	29/06/2006	XXX	El actor indicó como violados los artículos 189 (11) de la Constitución Política; 879 (10) del estatuto tributario y 135 de la Ley 100 de 1993.	Dr. Héctor J. Romero Díaz	<ul style="list-style-type: none"> • Debe entrar la Sala a analizar si el artículo 2º del Decreto 449 de 2003, “por el cual se reglamenta (sic) parcialmente la Ley 788 de 2002 y el libro VI del estatuto tributario” es legal o no. • Por su parte, los fondos de pensiones del Decreto 2513 de 1987, son patrimonios autónomos constituidos por los bienes resultantes de los aportes de los partícipes y patrocinadores, y sus rendimientos, administrados por una compañía de seguros, una sociedad fiduciaria o un banco, a través de su sección fiduciaria, creados para cumplir uno o varios planes de pensiones de jubilación e invalidez (arts. 2º y 13). • Si bien el artículo 871 (4º y 7º) del estatuto tributario, establece que la cesión a cualquier título y retiro de recursos sobre las carteras colectivas por parte del beneficiario o fideicomitente, se gravan con el GMF generalmente, el legislador decidió que estas transacciones fueran exentas de dicho gravamen.. • Sin embargo, el artículo 2º del Decreto 449 de 2003 prescribe que se encuentran sujetos al gravamen a los movimientos financieros, de conformidad con el inciso sexto del artículo 871 del estatuto tributario, que según se precisó nada tiene que ver con el tema reglamentado, los retiros que realicen los trabajadores de sus aportes voluntarios a los fondos de pensiones. • Precisa la Sala que la norma acusada contraviene la exención establecida en el artículo 879 del estatuto tributario, pues se grava con el GMF los retiros 	<ul style="list-style-type: none"> - Patrimonio autónomo - Fondo de pensiones - Estatuto tributario - Exenciones legislativas - Operaciones financieras - Sociedad Fiduciaria - Legalidad de los actos 	<p>ANÚLASE el artículo 2º del Decreto 449 de 2003, cuyo texto es el siguiente:</p> <p>“Pagos sujetos al gravamen a los movimientos financieros por los fondos de pensiones. De conformidad con el inciso sexto del artículo 871 del estatuto tributario, los retiros que realicen los trabajadores de sus aportes voluntarios a los fondos de pensiones causan el gravamen a los movimientos financieros (GMF)”.</p>
------------------	---	------------	-----	---	---------------------------	--	---	---

						<p>hechos por los trabajadores de sus aportes voluntarios a los fondos de pensiones, desconociendo la norma tributaria que exenta del GMP dichas operaciones financieras realizadas con los recursos de los fondos de pensiones.</p> <ul style="list-style-type: none">• El reglamento acusado, excede, además, el alcance del artículo 135 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual están exentos de toda clase de tributos del orden nacional, entre otros recursos, los del sistema general de pensiones y los de los fondos de pensiones del Decreto 2513 de 1987, por lo que los pagos de aportes voluntarios a través del retiro de los mismos por parte del trabajador de los fondos de pensiones, necesariamente se encuentran exentos del GMF por tratarse de recursos provenientes de los fondos en mención.		
Tribunal administrativo de Cundina marca 20 Sep/06	Obligaciones tributarias de los patrimonios autónomos	20-09-06	Carlos Felipe Aroca Lara		LUZ MARY CARDENAS VELANDIA	<ul style="list-style-type: none">• La litis se centra en determinar si es ilegal el Acuerdo 105 de 2003, y el concepto 1043 de 2004, al incluir como sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio a los patrimonios autónomos y ordenar librar mandamiento de pago contra la sociedad fiduciaria para atender el pago de las deudas tributarias vinculadas a dicho patrimonio• Los tributos deben ser manejados por las entidades y el poder central en forma coordinada, con el fin de que se cumpla los principios y garantías de la tributación, consagrados en el artículo 363 de la Carta Política• La potestad legislativa en materia de tributos se encuentra reglada y si bien se consagra la autonomía territorial, esta no es limitada sino que se encuentra sujeta a la	<ul style="list-style-type: none">- Impuesto de industria y comercio- Potestad legislativa- Elementos característicos de la fiducia- Elementos esenciales del patrimonio autónomo	<p>PRIMERO.- ANÚLASE la expresión “del impuesto de industria y comercio” consagrada en el artículo 6 del Acuerdo 105 de 2003 y su parágrafo. Anulase la totalidad del concepto No. 1043 del 26 de julio del 2004 expedido por la Secretaria de Hacienda Distrital</p> <p>SEGUNDO: No se condena en costas ni en agencias de</p>

						<p>constitución y la Ley, esto se deriva del contenido del numeral 3 del artículo 287 y el numeral 4 del artículo 313 de la Constitución.</p> <ul style="list-style-type: none">• El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter municipal que recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se realizan en los distritos especiales y en los municipios, ya sea en forma permanente o transitoria y en establecimiento de comercio abiertos o no al público• El objetivo de la Ley 14 de 1983, consistió en unificar las bases gravables para los diferentes municipios, estableciéndola sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, en la misma Ley se consagró el hecho imponible, el sujeto activo y los sujetos pasivos de dicha obligación, la fijación de la tarifa se defirió a los concejos municipales. Posteriormente se expidió para Bogotá el Decreto Ley 1421 de 1993, que estableció que el sujeto pasivo en impuesto de industria y comercio, es la persona natural o jurídica o la sociedad de hecho, que realice el hecho generador del tributo.• Elementos característicos de la fiducia:<ol style="list-style-type: none">1. Transferencia de los bienes materia de fideicomiso por parte del constituyente o fideicomitente al fiduciario.2. Dicha transferencia no otorga el derecho de dominio, pues se efectúa para que el fiduciario administre los bienes o posiblemente los enajene, no para su beneficio, sino para cumplir las finalidades determinadas a favor del beneficiario o fideicomisario.3. El beneficiario o fideicomisario puede ser el mismo constituyente (fiduciante o fideicomitente) o un tercero.	- Sujeto pasivo de la obligación tributaria	<p>derecho, como lo prevé el artículo 171 del CÓDIGO Contencioso Administrativo por cuanto no aparecen causadas de conformidad con el numeral 8º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil</p> <p>TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente previa devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen y del excedente de gastos del proceso. Déjense las constancias del caso.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---

						<p>4. La fiducia mercantil debe originarse en un contrato, en que en su mayoría es elevado a escritura pública, a no ser que tenga por origen un acto testamentario.</p> <p>5. Los bienes que constituyen el fideicomiso son un patrimonio autónomo del fiduciario pero separado y diferente del resto de los bienes que conforman su patrimonio.</p> <p>6. Al vencimiento del contrato, los bienes fideicometidos los bienes del negocio fiduciario, no pueden quedar en cabeza del fiduciario sino que han de pasar a la persona designada por el contrato o, si hay silencio al mismo fideicomitente o a sus herederos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Encuentra el Tribunal que los bienes que constituyen el fideicomiso son un patrimonio autónomo del fiduciario, independiente y diferente del resto de los bienes que conforman su patrimonio.• El patrimonio autónomo contiene los siguientes elementos esenciales:<ul style="list-style-type: none">a. Es una universalidad jurídicab. Es un conjunto de derechos y obligaciones, separado del patrimonio que le dio origen.c. Los bienes que lo integran están destinados a cumplir una finalidad específica.d. Su creación es legal.e. No tiene personería jurídica.• El patrimonio autónomo o fideicomiso, no puede incluirse como sujeto pasivo de la obligación relacionada con el impuesto de industria y comercio, por cuanto el mismo no fue consagrado en la Ley, razón por la cual no podía el concejo, usurpar la función constitucional del Congreso e		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>incluirlo como tal, desconociendo el mandato legislativo y estableciendo un nuevo sujeto pasivo del referido tributo</p> <p>El Acuerdo además de crear un nuevo sujeto pasivo de la obligación, autoriza el desarrollo del proceso de cobro coactivo, para que se libre el mandamiento de pago a la sociedad fiduciaria para atender el pago de las deudas tributarias vinculadas al patrimonio autónomo, con los recursos de ese mismo patrimonio, argumento que no tiene ninguna solidez jurídica en relación con el impuesto de industria y comercio</p>		
CE 29 Mar/07	Fiducia pública	29-03-07	FIDUCIA RIA POPULA R S.A.		DR. HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ	<ul style="list-style-type: none">• El artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero define los fondos comunes, como un conjunto de recursos obtenidos con ocasión de la celebración y ejecución de negocios fiduciarios, que tienen como finalidad la inversión de los miembros en títulos. Sobre dichos fondos el fiduciario ejerce una administración colectiva.• El artículo 631 del Estatuto Tributario faculta a la DIAN para solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, información con el fin de efectuar los tributos. Esta solicitud de información se debe formular mediante resolución del Director General de Impuestos nacionales, en la cual se establezcan los grupos o sectores de personas o entidades que deben suministrar la información requerida, los plazos para su entrega, que en todo caso no podrán ser inferiores a dos meses, y los lugares donde deberá enviarse• Dado que los fondos comunes no son personas ni entidades y, por tanto, no están obligados a suministrar	<ul style="list-style-type: none">- Información tributaria- Obligación de la fiduciaria- Fondos comunes	<p>CONFÍRMASE la sentencia de 10 de marzo de 2004 proferida por el Tribunal de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de Fiduciaria Popular S.A. contra la DIAN.</p> <p>RECONÓCESE personería a la abogada Flori Elena Fierro Manzano, como apoderada de la DIAN.</p>

						<p>información tributaria, tampoco les son aplicables las sanciones que la omisión de dicho deber originan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lo anterior no significa que la Administración no pueda obtener la información de las operaciones de los fondos, pues la fiduciaria que los administra en la entidad a la cual se le debe exigir y la obligada a presentarla. En consecuencia, si la información no se presenta o se hace en forma incorrecta, es la fiduciaria la que se hace merecedora de la sanción.		
CE 13 Sept/07	Fiducia de garantía	13-09-07	ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.		Dra. LIGIA LÓPEZ DÍAZ	<ul style="list-style-type: none">• Para que se configure el contrato de fiducia mercantil, se requiere que el fiduciante o fideicomitente, transfiera uno o más bienes, sin importar la naturaleza y cuantía de los mismos, a una sociedad autorizada especialmente para celebrar esta clase de contratos (sociedad fiduciaria), que llevará a cabo las actividades y finalidades determinadas por el fiduciante, para que sus frutos o rendimientos sean entregados al mismo constituyente o a un tercero llamado fideicomisario, señalado igualmente en el acto de constitución por el fiduciante. Cuando este contrato versa sobre bienes inmuebles se requiere de su protocolización mediante escritura pública que deberá inscribirse ante las oficinas de registro competentes• Características de la fiducia mercantil de garantía las siguientes:<ul style="list-style-type: none">- El fideicomitente es generalmente un deudor- Se transfieren de manera irrevocable al fiduciario uno o más bienes, muebles o inmuebles- Los bienes fideicomitados respaldan una o varias obligaciones a favor de los beneficiarios (acreedores)- En caso de incumplimiento del deudor, el fiduciario	<ul style="list-style-type: none">- Fiducia mercantil- Características de la fiducia de garantía- Patrimonio autónomo- Declaraciones tributarias	<p>CONFIRMASE la Sentencia del 4 de noviembre de 2004 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.</p> <p>RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la abogada ESPERANZA LUQUE RUSINQUE.</p>

						<p>procede a la enajenación de los bienes y a pagar correlativamente a los respectivos acreedores.</p> <ul style="list-style-type: none">• Surge un patrimonio autónomo destinado al cumplimiento de la finalidad establecida en el contrato de fiducia, que para el caso será garantizar el cumplimiento de obligaciones. El constituyente deja de tener la libre disposición de los bienes entregados en fiducia, por lo que no hacen parte de su patrimonio. En su contabilidad registrará el valor del derecho originado en el negocio fiduciario.• Los derechos fiduciarios deben ser declarados por el beneficiario, que para el caso del fideicomiso de garantía es el constituyente, por el valor de la participación en el patrimonio líquido del fideicomiso, de acuerdo con la certificación expedida para el efecto por el fiduciario. El fideicomitente no declara dentro de su patrimonio el valor de los bienes transferidos, sino el de los derechos fiduciarios.• Los derechos fiduciarios constituyen un activo diferente de las acciones, pues éstas últimas son inversiones representativas del derecho que se tiene en una sociedad, mientras que los primeros constituyen activos intangibles representativos de la participación que se tiene dentro de un patrimonio autónomo.• El artículo 102 del Estatuto Tributario, establece un sistema especial de valoración de activos, para los derechos fiduciarios que difiere de la prevista para las acciones, aportes y demás derechos en sociedades.• El artículo 271-1 del Estatuto Tributario dispone que los bienes conservan para los beneficiarios la condición de		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>movibles o inmovilizados, monetarios o no monetarios que tengan en el patrimonio autónomo, lo cual aplica para la clasificación de los derechos fiduciarios dentro del patrimonio del beneficiario, para efectos de ajustes integrales por inflación, pero ello no significa que</p> <ul style="list-style-type: none"> • se reintegre la propiedad de los bienes o que el valor que tengan dentro del fideicomiso se le traslade al beneficiario por la misma suma, porque no son valores equivalentes. 		
CE 26/Sept/ 07	Inversiones autorizadas a las sociedades fiduciarias	26/09/2007	Alianza Fiduciaria S.A.	Solicitó la anulación de las Resoluciones 0461 de mayo 9, 1099 de septiembre 28 y 1491 de diciembre 21, todas del año 2001 y como restablecimiento del derecho que se condene a la Superinten	Dra. María Inés Ortiz Barbosa	<ul style="list-style-type: none"> • El problema jurídico aquí es determinar si los actos administrativos por medio de los cuales la Superintendencia Bancaria sanciona a Alianza Fiduciaria S.A., por realizar inversiones no autorizadas para sociedades que prestan servicios fiduciarios se consideran legales o ilegales. • A su vez la sala precisa que la actividad principal de las sociedades fiduciarias es contratos de fiducia mercantil y de encargo fiduciario, por medio del cual gestionan negocios ajenos, su personalidad jurídica se limita a eso y a los actos que tengan relación directa para llevar a cabo su objeto social principal que ya se precisó anteriormente. • Además señala que “precisamente el artículo 2034 del Código de Comercio establece que las entidades financieras están sujetas al estatuto mercantil, salvo que existan normas imperativas especiales de la legislación bancaria que las exceptúen de su acatamiento. Por ende, los beneficios tributarios consagrados en las Leyes 218 de 1995 y 383 de 1997 para la Zona del Río Páez, son directrices generales en materia impositiva, que en manera 	<ul style="list-style-type: none"> - Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - Entidades fiduciarias - Sanciones administrativas - Caducidad de la sanción - Superintendencia Bancaria - Principio de igualdad - Estatuto mercantil - Sociedades mercantiles - Teoría de los estatutos 	<p>CONFIRMASE la sentencia apelada.</p> <p>RECONÓCESE para actuar a nombre de la demandada al abogado VÍCTOR HERNANDO GÁMEZ VILLALOBOS en los términos del poder conferido.</p>

				<p>dencia Bancaria a restituir a la actora la suma de \$30.450.000, cancelada en cumplimiento de los actos demandados, junto con la corrección monetaria respectiva.</p> <p>Invocó como violados los artículos 2º inciso final, 6, 13, 29, 83, 209 y 230 de la Constitución</p>		<p>alguna contrarían los preceptos especiales del Ordenamiento Financiero, que deben ser atendidos por las instituciones sometidas a su regulación.”</p> <ul style="list-style-type: none">• La sala hace un listado de que negocios son objeto de inversión por parte de las sociedades fiduciarias como lo son las entidades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, bolsas de valores, comisionistas de bolsas, empresas de servicios técnicos o administrativos entre otros, y llega a la conclusión que las dos empresas en las que la sociedad fiduciaria Alianza decidió invertir no están en ese límite dado por el legislador financiero ni en relación directa de medio a fin con su objeto social principal.• De lo anterior se concluye que no se vulnera el principio de igualdad constitucional que se alega pues, no se permite realizar inversiones en cualquier sociedad que se quiera por parte de ninguna entidad fiduciaria, pues, para ello existe una regulación especial que determina que operaciones se autorizan.• De tal manera, que no se vulnera el principio de igualdad constitucional que alega el impugnante, puesto que a ninguna entidad fiduciaria se le permite realizar inversiones en la sociedad que desee, en la medida en que existe una normatividad especial y preferente que determina la operaciones autorizadas.	<p>especiales</p> <p>- Objeto social</p>	
--	--	--	--	---	--	---	--	--

				n Política; 38 del Código Contencio so Administra tivo, 29, 110, 147, 211, y 326 numeral 5° del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 8° de la Ley 510 de 1999 y 6° de la Ley 489 de 1998.				
CE 13/11/20 08	Patrimonio Autónomo	13/11/20 08	Alianza Fiduciaria S.A.	Alianza Fiduciaria S.A., solicitó la nulidad del requerimie nto especial y	Héctor J. Romero Díaz	<ul style="list-style-type: none"> La sala requiere determinar si los patrimonios autónomos de los cuales la actora administra pueden considerarse como sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio en el municipio de Medellín, y en caso afirmativo, si era la actora merecedora de la sanción por inexactitud. De acuerdo al artículo 1226 del Código de comercio, 	<ul style="list-style-type: none"> Fiducia mercantil Negocio jurídico Fiduciario Fiduciante Bienes fideicomitidos 	REVÓCASE la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia 15 de marzo de 2007, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., contra el municipio de

				<p>de la liquidación oficial de revisión 3874 de 9 de agosto de 2005. A título de restablecimiento del derecho pidió que se declare que no está obligada al pago del mayor impuesto a cargo y de la sanción por inexactitud determinados en el acto acusado y la firmeza de la declaración</p>		<p>“la fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.”</p> <ul style="list-style-type: none">• Se hace mención a que los bienes fideicomitados deben ser separados del resto del activo del fiduciario y los negocios fiduciarios, pues estos bienes se consideran que conforman un patrimonio autónomo. De aquí que el patrimonio autónomo no puede considerarse como persona natural ni jurídica, y por ello debe actuar por medio del fiduciario, quien actúa como administrador y vocero de este patrimonio y realiza las actuaciones jurídicas necesarias para lograr la finalidad prevista.• “El artículo 32 de la Ley 14 de 1983, reiterado por el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986 o Código de Régimen Municipal, precisa que el impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, como establecimientos de comercio o	<ul style="list-style-type: none">- Transferencia de dominio- Impuesto de industria y comercio- Sujeto pasivo del impuesto- Tributos- Principio de legalidad	<p>Medellín. En su lugar, dispone:</p> <p>DECLÁRASE inhibida la Sala para resolver de fondo sobre la legalidad del requerimiento especial 3874 de 22 de noviembre de 2004, aclarado el 24 del mismo mes, por ser un acto de trámite.</p> <p>Por ilegales e inconstitucionales INAPLICANSE los artículos 1 [par] del Acuerdo 61 de 1999 del Concejo de Medellín y 64 [par 2] del Decreto 710 de 2000, del Alcalde del mismo municipio.</p> <p>ANÚLASE la liquidación de revisión 3874 de 9 de agosto de 2005, por la cual el municipio de Medellín modificó la declaración del impuesto de industria y comercio de 2003 presentada por la actora.</p> <p>A título de restablecimiento del derecho DECLÁRASE la</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

				<p>n. También solicitó condenar en costas a la demandada.</p> <p>Como normas vulneradas invocó los artículos 26, 29, 83, 95 [9], 150 [12], 287[3], 313 [4], 338 y 363 de la Constitución Política; 2, 28 y 35 del Código Contencioso Administrativo; 32 y 33 de la Ley 14 de</p>	<p>sin ellos.”</p> <ul style="list-style-type: none">• La ley va a encargarse de limitar el sentido que a través de sus acuerdos, los concejos municipales fijan en materia tributaria. De ahí que “los artículos 64 (par. 2º) del Decreto 710 de 2000 y 1º (par.) del Acuerdo 61 de 1999, señalaban que los patrimonios autónomos son responsables del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros únicamente cuando no tributen en cabeza de las fiduciarias “• Se debe decir que el artículo 1º (par.) del Acuerdo 61 de 1999 como el artículo 64 (par, 2º) del Decreto Municipal 710 de 2000 son ilegales pues ponen al patrimonio autónomo como un sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio distinto al contemplado por la ley pues no es ni persona natural, jurídica, ni una sociedad de hecho. Además de considerarse ilegal esos artículos por señalar al patrimonio autónomo como sujeto pasivo de dicho impuesto, se considera ilegal por haber legislado en materia tributaria sin haber tenido la facultad para hacerlo.		<p>firmeza de la declaración de industria y comercio de 2003, presentada por la demandante.</p> <p>Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.</p> <p>Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

				1983; 195 y 196 del Decreto Ley 1333 de 1986; 4, 67, 68 y 337 del Decreto Municipal 710 de 2000 y 683 y 647 del Estatuto Tributario				
CE 07/05/2008	Encargo fiduciario/Fideicomiso de administración	07/05/2008	UNIÓN TEMPORAL C/SUPERINTENDENCIA BANCARIA	Demanda la nulidad de los oficios 20000890 59-7 de 14 de junio de 2001, 20000890 59-15 de 12 de octubre de 2001 y 20000890 59-20 de 11 de	Juan Ángel Palacio Hincapié	<ul style="list-style-type: none"> • Empieza la sala por precisar que la superintendencia delegada en virtud del artículo 328(3) ibídem es competente para instruir a las vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad. En este caso, mediante los oficios demandados, la delegada dio alcance e instrucción a la fiduciaria sobre la forma de acatar las normas de carácter contable, entre ellas, la Circular Externa 82 de 2000. Por lo tanto, no se trató de una nueva reglamentación, sino de una instrucción para que la contabilidad se adaptara a la realidad del negocio fiduciario celebrado. • Este despacho en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren los literales a) y b) del numeral 3º del artículo 326 de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, considera oportuno efectuar 	<ul style="list-style-type: none"> - Patrimonio autónomo - Superintendencia delegada - Legalidad del acto - Negocio fiduciario - Fideicomisos de administración - Bienes fideicomitidos 	<p>1. DECLÁRASE no probada la excepción propuesta.</p> <p>2. DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.</p> <p>Cópiese, Notifíquese, Comuníquese. Cúmplase.</p> <p>La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.</p>

				<p>junio de 2002 expedidos por la superintendente delegada para entidades administradoras de pensiones y cesantías. A título de restablecimiento del derecho pide que se declare la vigencia de la Circular Externa 82 de 21 de diciembre de 2000 y su aplicación</p>		<p>las siguientes precisiones relacionadas con el manejo de fideicomisos que administran recursos de concesiones cuyo objeto es la construcción y explotación de obras públicas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Las entidades con negocios fiduciarios que administren esta clase de recursos deben clasificarlos como fideicomisos de administración y pagos, esto es, tipo 3, subtipo 1 y no como proyectos de construcción inmobiliaria.• Los aportes al fideicomiso deben contabilizarse en el código 73-Bienes fideicomitados en sus respectivas cuentas de acuerdo al tipo de aportes de que se trate y la obra en ejecución debe registrarse como construcciones en curso en el código PUC-71810 Construcciones en curso, el cual se crea y cuya dinámica se anexa.• Según este criterio y de conformidad con el artículo 328 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Sala considera que la superintendencia delegada tenía plena competencia para expedir los oficios demandados porque dio instrucciones a las fiduciarias sobre la forma de contabilizar los aportes entregados al fideicomiso de acuerdo con la particularidad del negocio jurídico, es decir, instruyó un procedimiento para un tema específico, que no está por fuera de su competencia.• La exigencia de la separación de los “bienes fideicomitados” del resto del activo de una fiduciaria ⁽³⁾, busca que ese patrimonio no se confunda con el del fiduciario ni con otros patrimonios igualmente	<p>- Fideicomiso</p>	
--	--	--	--	---	--	---	----------------------	--

				al registro de contabilida d de los fideicomis os I y II.		<p>constituidos, por ello se constituye como patrimonio autónomo y contablemente debe ser reflejado de manera diáfana su registro como bienes propios, en el caso de la fiducia mercantil.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pues bien, en el presente caso, en la constitución de los patrimonios autónomos estipulados tanto en el contrato de concesión como en el de fiducia mercantil, el fideicomitente fue COMMSA y aunque los recursos del INVIAS se transferirían al FIDEICOMISO I (aportes inicial de capital del INVIAS) y al FIDEICOMISO II (aportes anuales de capital por parte del mismo Instituto), no por ello puede considerarse que el INVÍAS hubiera adquirido la condición de fiduciante.• Finalmente, los rendimientos son una renta producida por un capital que pertenecen al titular del capital de donde provienen, de manera que en el caso de los aportes del Invías, cuya titularidad está en cabeza de esa entidad, sus rendimientos también son propios y deben contabilizarse, como lo establecieron los actos acusados, como un mayor valor del pasivo, en atención al principio del derecho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal• Por lo anterior la Sala considera, que las instrucciones dadas en los actos acusados por la superintendencia delegada sobre la forma de contabilizar los aportes de capital del Invías recibidos por los fideicomisos, así como sus rendimientos, no desconocieron las normas generales expedidas por la Superintendencia Bancaria, ni las legales que rigen		
--	--	--	--	---	--	---	--	--

						el contrato de fiducia mercantil.		
CE 03/07/20 08	Fiducia Mercantil - Contrato de cesión	03/07/2008	Jorge Alvenio Ladino Casalla y Otra	Invoca como normas violadas los artículos 6º, 121, 122, 189(24) de la Constitución Política; 35 y 44 del Código Contencioso Administrativo; 5º de la Ley 58 de 1982; 95(1) y 396(3-b) del Estatuto Orgánico del Sistema	Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta	<ul style="list-style-type: none"> • Entra la sala a analizar las resoluciones número 01 de 24 de septiembre de 1999 que negó a los actores la reclamación del derecho sobre el cupo 307 (apartamento) argumentando que no tenían titularidad como fideicomitente, inversionista adherente o beneficiario sobre el derecho reclamado. Y a su vez se analiza la 0047 de 8 de septiembre de 2000 por medio de la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por los actores confirmando lo dicho anteriormente. • De ahí que la sala debe identificar cual es la relación jurídica de los demandantes en virtud del contrato de promesa de cesión del derecho de fideicomitente inversionista que celebraron con Alfredo Muñoz Construcciones S.A., y si como consecuencia de ese contrato tienen título para que se les pueda reconocer la condición de fideicomitentes respecto al cupo 307. • Luego de analizar varios artículos que regulan el contrato de promesa de cesión la corte concluye que se puede inferir que la cesión de una posición de fideicomitente inversionista debe constar por escrito, tal como nace el derecho o la posición objeto de la cesión, pues el cesionario inversionista pasa a sustituir al fideicomitente inversionista en la posición cedida, en sus derechos y obligaciones dentro del fideicomiso. • De aquí que se concluye que solo cuando consta por 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrato de cesión - Promesa de cesión - Fideicomitente - Fideicomisario - Escritura pública - Negocio jurídico - Cesionario - Cedente - Contrato de promesa 	<p>1.- CONFIRMASE la sentencia apelada, de 6 marzo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual niega las pretensiones de la demanda en el proceso de la referencia.</p> <p>2.- Se reconoce a la abogada Gloria Lucía Cabeles Caro como apoderada del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, en los términos y para los fines conferidos en el poder que obra a folio 85 de este cuaderno.</p> <p>Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 3 de julio de 2008</p>

				Financiero ; 101 del Decreto 111 de 1996, 36 del Decreto 2649 de 1993; 1226 del Código de Comercio; 27, 28, 32(4) y 41 inciso primero de la Ley 80 de 1993 y la Circular 82 de 2000 proferida por el Superintendente Bancario.		<p>escrito y ha sido firmado por las partes interesadas, el cedente, el cesionario y la fiduciaria, se puede decir que hubo una cesión de la posición en el contrato o que trate en el fideicomiso.</p> <ul style="list-style-type: none"> “En este caso, tal como se acepta por las partes y consta en autos, el contrato de cesión no llegó a celebrarse, pues el cedente, no suscribió el contrato luego los actores no lograron sustituir al fideicomitente inversionista en la posición prometida en cesión, la 307, de modo que los únicos derechos que les asisten son los que se deriven de la promesa de contrato de cesión en relación con los dineros entregados por causa de la misma” 		
CE 05 Feb/09	Impuesto de industria y comercio a	05-02-09	Carlos Felipe Aroca Lara	Artículo 6° del Acuerdo 105 de	Dra. MARTHA TERESA BRICEÑO	<ul style="list-style-type: none"> El artículo 6° del Acuerdo 105 de 2003, proferido por el Concejo Distrital de Bogotá, establece que para los efectos del impuesto de industria y comercio que se originen en relación con los bienes o con actividades 	<ul style="list-style-type: none"> Patrimonio autónomo Fiducia mercantil 	CONFÍRMASE la sentencia apelada.

	patrimonios autónomos			2003 expedido por el Concejo de Bogotá D.C. y Concepto 1043 de 26 de julio de 2004	DE VALENCIA	<p>radicados o realizados a través de patrimonios autónomos constituidos en virtud de fiducia mercantil, será responsable en el pago de impuestos, intereses, sanciones y actualizaciones derivados de las obligaciones tributarias de los bienes o actividades del patrimonio autónomo, el fideicomitente o titular de los derechos fiduciarios.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se identifican dos elementos esenciales para que se cause el impuesto de industria y comercio; el primero, es que se realice cualquier actividad industrial, comercial o de servicios; y segundo, que la realice una persona natural, jurídica o una sociedad de hecho, de manera que el impuesto no se causa sólo porque se realice una actividad gravada, sino que debe concurrir la calidad de sujeto pasivo del tributo quien la realiza• En concordancia con el principio de legalidad de los tributos previsto en el artículo 150-12 de la Constitución Política y con el 338 ibídem, que reservó con exclusividad para los cuerpos colegiados de elección popular la facultad de imponer tributos, en tiempo de paz, solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales.• El principio de legalidad busca la uniformidad de los tributos locales con el fin de garantizar una igualdad, no sólo, en el tratamiento tributario de las actividades gravadas en los diferentes departamentos y municipios, es decir, equidad para todos los contribuyentes, sino, también para los recursos locales.• Las corporaciones de elección popular (asambleas y	<ul style="list-style-type: none">- Impuesto de industria y comercio- Principio de legalidad- Bienes fideicomitidos	
--	-----------------------	--	--	--	-------------	--	---	--

					<p>concejos) son únicas autorizadas para votar las contribuciones e impuestos locales y deben desarrollar su función de conformidad con la Constitución y la ley creadora del Tributo, de manera que no invadan la órbita de competencia del legislador, con nuevos tributos, hechos generadores o sujetos en cabeza de quienes recaiga el tributo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Los actos acusados quebrantaron los principios de legalidad y predeterminación del impuesto de industria y comercio, al considerar que el patrimonio autónomo constituido por un contrato de fiducia mercantil, es sujeto pasivo del mencionado gravamen• La fiducia mercantil está contemplada en el ordenamiento comercial como un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o mas bienes a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Una vez el fiduciante transfiere los bienes al fiduciario, se forma con ellos un patrimonio autónomo, separado del resto de activos de la entidad y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios. Este patrimonio autónomo está afecto a la finalidad para la cual fue creado y no forma parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario, de manera que los bienes fideicomitidos sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida• La exigencia de la separación de los "bienes fideicomitidos" del resto del activo de una Fiduciaria,		
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>busca que ese patrimonio no se confunda con el del fiduciario ni con otros patrimonios igualmente constituidos, por ello se constituye como patrimonio autónomo y contablemente debe ser reflejado de manera transparente su registro como bienes propios, en el caso de la fiducia mercantil.</p> <ul style="list-style-type: none">• El hecho de que el artículo 102 del Estatuto Tributario regule el impuesto de renta para contratos de fiducia mercantil, no es fundamento legal para someter al impuesto de industria y comercio al patrimonio autónomo, toda vez que son dos impuestos que difieren en cuanto a la materia imponible y en cuanto a los demás elementos esenciales se refiere, de manera que ni por analogía, ni por remisión normativa las normas del impuesto de renta pueden aplicarse al impuesto de industria y comercio.		
CE 07 May/09	Obligaciones tributarias de las fiduciarias	07-05-09	UNIÓN TEMPORAL FIDUAGRARIA-FIDUESTADO		Dr. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS	<ul style="list-style-type: none">• La controversia versa sobre actos administrativos dictados dentro de un proceso de cobro coactivo y tales actos sí son susceptibles de control judicial, pues, existen ciertas decisiones de la Administración en este tipo de procesos que los administrados pueden controvertir y que de no ser así quedarían desprovistas de tutela jurídica y de control jurisdiccional.• Una vez el fiduciante transfiere los bienes al fiduciario, se forma con ellos un patrimonio autónomo, separado del resto de activos de la entidad y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios. Este patrimonio autónomo está afecto a la finalidad para la cual fue creado y no forma parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario. Los bienes fideicomitidos sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad	<ul style="list-style-type: none">- Cobro coactivo- Patrimonio autónomo- Fiduciaria- Bienes fideicomitidos	<p>REVÓCASE el fallo de 23 de febrero d 2006 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de la UNIÓN TEMPORAL FIDUAGRARIA-FIDUESTADO contra la DIAN. En su lugar, dispone:</p> <p>ANÚLANSE los Oficios 00-031-061-814 de 30 de mayo de 2003, 00-31-066-0277 de 1 de agosto de 2003 y 00-31-066-0296 de 25 de agosto de</p>

						<p>perseguida. Además, los bienes fideicomitidos no pueden ser perseguidos por los acreedores del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo</p> <ul style="list-style-type: none">• La exigencia de la separación de los bienes fideicomitidos del resto del activo de una Fiduciaria, busca que ese patrimonio no se confunda con el del fiduciario ni con otros patrimonios igualmente constituidos• No se pueden confundir las obligaciones tributarias que adquiere el fideicomitente, como persona jurídica independiente y distinta que desarrolla un objeto para el cual fue creado, con las obligaciones tributarias, en cabeza del fideicomiso.• La sociedad fiduciaria responde por los hechos que realiza en su propio nombre como persona jurídica que es y no por los hechos que pueda realizar el fideicomiso.		<p>2003 expedidos por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN.</p> <p>A título de restablecimiento de derecho, ORDÉNASE a la demandada reintegrar a la actora la suma de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$1.471.173.260M/L), correspondientes a los CDT's y sus rendimientos que fueron embargados ilegalmente por la DIAN, junto con los intereses de mora a partir de la ejecutoria del fallo, en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.</p> <p>RECONÓCESE a la abogada Nidia Amparo Pabón Pérez como apoderada de la demandada.</p>
CE 18 Jun/09	Fideicomiso de inversión	13-06-09	CÁCERE S Y FERRO		Dr. HÉCTOR J.	<ul style="list-style-type: none">• La toma de posesión para liquidar es una decisión que profiere el Superintendente Bancario para proteger a los ahorradores y a los terceros e impedir que la situación de	- Superintendencia bancaria	<p>CONFÍRMASE la sentencia 2 de octubre de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo</p>

			S.A. Y OTROS		ROMERO DÍAZ	<p>la entidad genere desconfianza en el sistema y termine por afectar al sector financiero en general, debido al interés público que envuelve la actividad financiera. Esta posesión conlleva la disolución y liquidación de la entidad vigilada; la separación de los administradores y directores de la administración de los bienes de la intervenida; la separación del revisor fiscal; la exigibilidad de todas las obligaciones a plazo a cargo de la intervenida y la formación de la masa de bienes</p> <ul style="list-style-type: none">• A pesar de que las sociedades fiduciarias pueden obtener recursos mediante negocios fiduciarios de inversión, en este caso no se celebró fiducia ni encargo alguno, pues, no aparece contrato en el que consten instrucciones de los inversionistas (fideicomitentes) para que la Fiduciaria invirtiera en títulos• Aunque las ofertas de inversión daban la apariencia de ser contratos de fiducia mercantil, no se creó un patrimonio autónomo para el manejo e inversión de los dineros, pues, los recursos ingresaban a los fideicomisos inmobiliarios como se lee expresamente en las ofertas. Además, los inversionistas no adquirirían la calidad de fideicomitentes ni beneficiarios del fideicomiso, pues no se constituyó fideicomiso alguno.• No le asiste razón a la apelante, debido a que no hubo fideicomiso de inversión alguno, por lo que tampoco podía probarse su existencia, pues mediante los pagarés y las ofertas comerciales de inversión se quiso dar la apariencia de dicho negocio fiduciario, a pesar de que está probado que eran sólo mecanismos de captación de recursos de terceros, debido a que los fideicomisos	<ul style="list-style-type: none">- Negocios fiduciarios de inversión- Responsabilidad administrativa y responsabilidad penal- Patrimonio autónomo- Liquidación de la fiduciaria- Protección del sistema financiero	de Cundinamarca dentro del proceso de la referencia.
--	--	--	--------------	--	-------------	---	---	--

						<p>presentaban serios problemas de liquidez.</p> <ul style="list-style-type: none">• Una es la responsabilidad administrativa que cabe a una entidad vigilada por la violación de las normas que estatutaria y legalmente debe acatar y por el manejo no autorizado e inseguro de sus negocios, que puede conducir y, otra la responsabilidad penal por la realización de un hecho punible, cuya determinación corresponde legalmente al juez penal. Ambas responsabilidades pueden concurrir, sin que sea dable aceptar que la autoridad administrativa deba esperar la decisión el juez penal para tomar medidas que, como la toma de posesión, deben ser inmediatas para evitar el desplome del sistema financiero por la pérdida de la confianza del público.		
CE 13 Ago/09	Fiducia de garantía	13-08-09	ODINSA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.		Dr. WILLIAM GIRALDO GIRALDO	<ul style="list-style-type: none">• Cuando el fiduciante transfiere los bienes al fiduciario se forma con ellos un patrimonio autónomo, separado del resto de activos de la entidad y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios. Este patrimonio autónomo está afecto a la finalidad para la cual fue creado y no forma parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario, de manera que los bienes fideicomitidos sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida• La separación de los “bienes fideicomitidos” del resto del activo de una Fiduciaria tiene como fin que ese patrimonio no se confunda con el del fiduciario ni con otros patrimonios igualmente constituidos. Tampoco se pueden confundir las obligaciones tributarias que tiene el fideicomitente, con las que pueda contraer el fiduciario, como consecuencia de que realice un hecho generador	<ul style="list-style-type: none">- Bienes fideicomitidos- Derecho de propiedad- Terminación de la fiducia- Derechos fiduciarios- Patrimonio fiscal	<p>REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar: DECLÁRASE la nulidad parcial de la liquidación de revisión 310642003000150 de 24 de octubre de 2003 y de la resolución 310662004000014 de 11 de marzo de 2004, proferidas por la DIAN, únicamente en tanto impusieron sanción por inexactitud.</p> <p>En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, FÍJASE como total saldo a pagar por impuesto de renta</p>

					<p>de una obligación tributaria.</p> <ul style="list-style-type: none">• El derecho de propiedad sufre una escisión como resultado de que la propiedad formal pertenece al fiduciario, y la beneficiosa o de derecho (derechos fiduciarios) pertenece al beneficiario.• La fiducia termina porque el fideicomitente cumpla con las obligaciones garantizadas o porque las incumpla y, entonces con el patrimonio autónomo se satisfagan, en cuyo caso podría haber un derecho a remanentes.• La fiducia en garantía implicó que la fiduciante transfiriera el derecho de dominio de unas acciones, a cambio de lo cual adquirió unos derechos fiduciarios equivalente al valor de las acciones.• El derecho de dominio lo recupera la fideicomitente sobre las acciones cuando le sean devueltas por pagar las obligaciones que había garantizado.• La satisfacción de las obligaciones garantizadas o su incumplimiento, que lleva a que la fiduciaria las asuma con cargo al patrimonio autónomo, implica la terminación de la fiducia por cumplimiento del objeto del contrato.• No existe incompatibilidad entre las normas del Código de Comercio que regulan la fiducia mercantil, y las del Estatuto Tributario respecto del tratamiento que debe dársele a los derechos fiduciarios dentro del patrimonio fiscal del contribuyente, puesto que tanto en el contexto mercantil como en el tributario se entiende que el fiduciante se desprende de la propiedad de unos bienes que van a cumplir una finalidad específica, a cambio de lo cual se hace titular de unos derechos personales sobre un patrimonio autónomo, los que son apreciables en dinero		<p>de ODINSA PROYECTOS E INVERSIONES S.A., por el año gravable 2000, la suma de CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$400.843.000 M.L).</p> <p>RECONÓCESE a la abogada Nidia Amparo Pabón Pérez como apoderada de la demandada.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

						y, por tanto, deben ser reflejados dentro del activo del constituyente.		
CE 24 Sept/09	Fiducia de administraci ón	24-09-09	GUSTAV O CÁCERE S SERRAN O, CECILIA FERRO DE CÁCERE S, ÁNGELA, GUSTAV O y MANUEL CÁCERE S FERRO y la sociedad CÁCERE S Y FERRO S.A	Solicitaron la nulidad del acto por el cual la SUPERIN TENDENC IA BANCARI A tomó posesión de los bienes, haber es y negoc ios de la Fiduciaria con fines de liquidación . Como normas violadas invocaron los artículos 29 [2], 114	HUGO FERNAN DO BASTIDA S	<ul style="list-style-type: none">• En esta oportunidad es tarea de la Sala precisar si la resolución 721 de 13 de Mayo de 1999 por medio de la cual se ordenó la toma inmediata de posesión de los bienes, haber es y negocios de la sociedad fiduciaria se ajusta o no a derecho.• Dicha resolución se motivó basándose en la presunta violación de sus estatutos y la ley, persistir en el manejo de sus negocios en forma no autorizada e insegura y con fines de liquidación, por haber incurrido en cesación de pagos.• La toma de posesión para liquidar es una decisión que profiere el Superintendente Bancario para proteger a los ahorradores y a los terceros e impedir que la situación de la entidad genere desconfianza en el sistema y termine por afectar al sector financiero en general, debido al interés público que envuelve la actividad financiera (C.N., art. 335). Conlleva, en general, la disolución y liquidación de la entidad vigilada; la separación de los administradores y directores de la administración de los bienes de la intervenida; la separación del revisor fiscal; la exigibilidad de todas las obligaciones a plazo a cargo de la intervenida y la formación de la masa de bienes (EOSF, art. 116).• De acuerdo a las visitas de inspección realizadas se concluyó que la situación de iliquidez de los fideicomisos inmobiliarios se estableció plenamente, entre otras razones, por las quejas de personas	- Posesión para liquidar - Superintendencia bancaria - Obligación de rendir cuentas - Captación masiva - Responsabilidad por omisión - Patrimonio autónomo - Bienes fideicomitidos - Competencia administrativa	1. CONFIRMASE la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pero por las razones expuestas en este proveído. 3. RECONÓCESE personería al doctor (...), como apoderado de la Nación, en los términos del poder a él conferido.

				<p>[a), e) y f)] y 208 [3 y 4] y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; 20 y 21 del Decreto 2920 de 1982; 1 del Decreto 1981 de 1988 y Ley 45 de 1923</p>		<p>vinculadas a los mismos, en razón de que no se habían atendido sus acreencias y porque los proyectos inmobiliarios iniciaban la etapa de construcción, sin los recursos suficientes para cubrir los costos del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Y, como el incumplimiento de las obligaciones de los fideicomisos generó su iliquidez, la fiduciaria recurrió a la captación masiva de dineros del público para obtener recursos, a tal punto que, según lo precisó el acto acusado y no pudo controvertirlo la demandante, a 31 de marzo de 1999, los trece fideicomisos a través de los cuales se captaron recursos de terceros, adeudaban a estos \$ 8.310 millones por capital; \$ 1.228 millones por intereses corrientes; \$ 1.036 millones por intereses de mora, para un total de \$ 10.572 millones.• A su vez la sala observa que el manejo inseguro de los negocios fiduciarios también fue consecuencia de la falta de estudio de títulos previo a la constitución de los fideicomisos, la omisión del deber de rendir cuentas y la ausencia de controles respecto de la vigencia de las pólizas para amparar los bienes fideicomitidos• La sala además precisa que la sanción administrativa no excluye ni entra en el ámbito de competencia penal. Establece que ambas responsabilidades pueden concurrir, sin que sea dable aceptar que la autoridad administrativa deba esperar la decisión el juez penal para tomar medidas que, como la toma de posesión, deben ser inmediatas para evitar el		
--	--	--	--	---	--	---	--	--

						<p>desplome del sistema financiero por la pérdida de la confianza del público. Tampoco es aceptable que por el hecho de que la superintendencia haya encontrado probado que la fiduciaria incurrió en captación masiva e ilegal de dineros del público, esté reemplazando al juez penal, pues, la determinación de si hubo tal conducta para efectos de tomar las medidas administrativas correspondientes no significa que la demandada invada la competencia del juez penal, dado que, se insiste son dos tipos de responsabilidad que no se excluyen y, por el contrario, concurren.</p>		
CE 26 Oct/09	Impuesto de renta para fideicomisos	26-10-09	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIANA -BBVA		Dra. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA	<ul style="list-style-type: none">• Conforme al artículo 102 del Estatuto Tributario y teniendo en cuenta las características y particularidades del contrato de fiducia mercantil, la ley estableció unas reglas especiales para efectos del impuesto de renta, pues señala quiénes son los responsables del impuesto en diferentes eventos atendiendo a las rentas que éstos producen• El impuesto se causa sobre la utilidad que le reporte el negocio fiduciario, no las pérdidas, pues las pérdidas se liquidarían con otros ingresos diferentes a los generados por el fideicomiso, lo cual no es procedente en materia del impuesto de renta.• El beneficiario de un contrato de fiducia mercantil es el titular de las rentas que produzcan dichos bienes, quien en ciertas ocasiones puede ser el mismo fiduciante• No es posible considerar que las pérdidas que ocasiona un negocio fiduciario sean trasladadas al beneficiario o	<ul style="list-style-type: none">- Fiducia mercantil- Utilidades y pérdidas- Beneficiario	<p>REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar: DENIÉGANSE las súplicas de la demanda. RECONÓCESE a la abogada María Helena Caviedes Camargo como apoderada de la DIAN.</p>

						<p>que el beneficiario deba hacer la depuración de la renta gravable o de la pérdida del negocio. El parágrafo del artículo 271-1 del Estatuto Tributario establece que para los fines de determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, los fiduciarios deberán expedir cada año, a cada uno de los beneficiarios de los fideicomisos a su cargo, un certificado indicando el valor de sus derechos, los rendimientos acumulados hasta el 31 de Diciembre del respectivo ejercicio, aunque no hayan sido liquidados en forma definitiva y los rendimientos del último ejercicio gravable</p> <ul style="list-style-type: none">• Es diferente la disminución de las pérdidas del año con las compensaciones recibidas en el mismo año y los ingresos por recuperación de deducciones correspondientes a pérdidas de años anteriores. De manera que el contribuyente no puede tratar como compensación los ingresos por recuperación de deducciones y disminuir con tales rubros las pérdidas del año, como lo hizo en este caso el Banco demandante.		
CE 15 Abr/10	Impuestos del patrimonio autónomo	15-04-10	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		Dra. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA	<ul style="list-style-type: none">• La representación en el caso de los impuestos administrados por la DIAN la tiene el Director General y la DIAN puede actuar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como demandante por medio del Director General• El ejercicio de la delegación por parte de la Administradora de Impuestos se ajustó a derecho, pues el otorgamiento del poder no significa una subdelegación de sus funciones administrativas, ya que la delegación en la Administradora para presentar la demanda y representarla procesalmente, confiere una serie de	<ul style="list-style-type: none">- Patrimonio autónomo- Contrato de fiducia- Declaraciones de IVA	<p>REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar: DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.</p> <p>RECONÓCESE a la abogada Nidia Amparo Pabón Pérez como apoderada de la DIAN.</p> <p>RECONÓCESE al abogado Mauricio Alfredo Plazas Vega como apoderado de</p>

						<p>facultades que incluye la de otorgar poder a un abogado, para su comparecencia</p> <ul style="list-style-type: none">• En virtud del contrato de fiducia, el propietario de los bienes era el Patrimonio Autónomo, que en tal calidad los exportó a través de su mandatario, Lloreda S.A., que a su vez es el fideicomitente. Estas exportaciones fueron las que originaron los saldos a favor del exportador por los bimestres 4, 5 y 6 de 2000.• Aunque el Patrimonio Autónomo fue el exportador, no puede considerarse como un exportador propiamente dicho, porque el fideicomiso se constituyó, no para exportar, sino para administrar los recursos provenientes de la venta de los productos terminados y servir de fuente de pago para los acreedores del fideicomitente• Como no existe duda de que el Patrimonio Autónomo era el exportador, se encontraba legitimado para pedir la devolución de los saldos a favor de las declaraciones de IVA de los bimestres 4, 5 y 6 de 2000 y tenía derecho a obtenerla, como en efecto lo decidió la DIAN, mediante las resoluciones demandadas		<p>Lloreda S.A. Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.</p>
<p>CE 12 May/10</p>	<p>Reglas de contabilidad</p>	<p>12-05-10</p>	<p>LLOYDS TRUST S.A.</p>		<p>Dra. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA</p>	<ul style="list-style-type: none">• La Superintendencia Bancaria (hoy Superfinanciera) tiene entre sus facultades de inspección y vigilancia la de dictar o instruir a las entidades sometidas a su control, sobre las normas generales en materia de contabilidad, sin perjuicio de que éstas puedan utilizar métodos de reconocido valor aceptados por la ley.• El Decreto 2649 de 1993 constituye el reglamento general de la contabilidad en Colombia y contiene el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y	<p>- Superintendencia Financiera</p> <p>- Normal en materia de contabilidad</p> <p>- Aplicación subsidiaria del código de</p>	<p>1. REVÓCASE la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 31 de enero de 2008, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de la sociedad LLOYDS TRUST S.A. contra la Superintendencia Bancaria</p>

					<p>actividades de personas naturales o jurídicas</p> <ul style="list-style-type: none">• Las entidades del sector financiero, entre ellas las sociedades fiduciarias, reguladas en el Estatuto Orgánico del Sector Financiero, en su calidad de sociedades comerciales, ostentan la calidad de comerciantes, y como tal, están obligadas a llevar libros de contabilidad bajo las prescripciones legales contempladas en el Código de Comercio así como en el reglamento general de la contabilidad• La aplicación de las normas generales previstas en el reglamento de la contabilidad se entienden sin perjuicio de las directrices específicas que dicte la Superintendencia, siempre y cuando no se aparten de los criterios y principios contables de la normativa general. Igualmente se debe precisar que las normas generales expedidas por los órganos de control como la Superintendencia Bancaria deben un acercamiento a los principios de contabilidad de general aceptación, y en virtud del principio de legalidad, no se descarta que cuando en algún asunto específico propio de la actividad financiera que regula, se expida una disposición especial por las entidades de control y vigilancia éstas prevalecerán sobre las generales del Código de Comercio• El principio de asociación o relación de causalidad indica que se deben asociar los ingresos devengados o recibidos con los costos y gastos incurridos para producir tales ingresos, registrando unos y otros simultáneamente en las cuentas de resultados. Esto implica que con el fin de lograr que los resultados de cada período muestren un valor confiable y demostrativo de la realidad económica,	<p>comercio</p> <ul style="list-style-type: none">- Principio de asociación o relación de causalidad- Activos fijos o movibles.	<p>(hoy Financiera). En su lugar DECLÁRASE la nulidad de los Oficios Nos. 2002006091-1 del 4 de marzo de 2002 y 2002006091-4 del 2 de mayo de 2002 expedidos por el Director Técnico para Sociedades Fiduciarias de la Superintendencia Bancaria y del 2002006091-6 del 17 de junio de 2002 de la Superintendente Delegada para Entidades Administradoras de Pensiones y Cesantías.</p> <p>2. A título de restablecimiento del derecho se ORDENA reversar los asientos contables que registraron la totalidad de los costos y gastos financieros incurridos por el Fideicomiso Impsa-Foster-Eiffel en el Estado de Pérdidas y Ganancias de la sociedad en el año 2002 y se restituya la cuenta de Cargos Diferidos hasta la fecha de enajenación de la Estación de Gases Licuados a ECOPETROL.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>los costos y gastos realizados en el período que sean necesarios para la obtención de los ingresos por el mismo período deben contabilizarse simultáneamente.</p> <ul style="list-style-type: none">• La propiedad, planta y equipo mejor conocido como activos fijos, representa los activos o bienes que ordinariamente no están destinados para la venta, ya que no hacen parte del giro ordinario u objeto social principal, sin que esto signifique que esté prohibida su enajenación. La propiedad de estos bienes tiene como finalidad utilizarlos para la producción, comercialización o prestación de servicios en desarrollo de su actividad principal, o bien para entregarlos en arrendamiento o usarlos en la administración de la empresa. Los costos y gastos incurridos para su construcción o adquisición deben capitalizarse, esto es, llevarse como mayor valor de los mismos, hasta que el bien esté en condiciones de utilización• El bien inmueble denominado La Estación constituía en ese momento para el fideicomitente un inventario o activo movable pues representaba el objeto del contrato de obra suscrito con la sociedad fiduciaria Anglo FIDUANGLO, naturaleza que no variaba para la fiduciaria a partir de su entrega en arrendamiento a ECOPETROL ya que el percibir ingresos no es un factor relevante tratándose de un bien, para considerarse fijo o movable, sino su destinación, y en este caso, la destinación y objeto principal de los contratos de arrendamiento, promesa de compraventa y transferencia, era la adquisición de la estación de gas por parte de ECOPETROL		<p>3. RECONÓCESE personería a la abogada CONSTANZA CLAUDIA CAYCEDO GUTIÉRREZ como apoderada de la demandada.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

CE 31/05/11	Administrador fiduciario del régimen subsidiario de salud	31-05-11	Ministerio de la protección social		DR.GERARDO ARENAS MONSALVE	<ul style="list-style-type: none">• El Decreto 4975 de 2009 del Gobierno Nacional, declaró la emergencia social en salud y en su desarrollo se expidió el Decreto legislativo 132 de 2010 que tuvo como objetivo aumentar la eficiencia en la prestación del servicio público de salud. Del control de legalidad realizado a las Resoluciones 1035 y 1036 de 19 de marzo de 2010 por desarrollar el Decreto Legislativo 132 de 2010 dictado durante estado de excepción , se colige que el reglamento se ajusta a la norma reglamentada, sin encontrarse reparo alguno por ilegalidad del acto y por tanto se consideran ajustadas a derecho las siguientes consideraciones:• En busca de una solución a los problemas presentados entre las entidades encargadas de la presupuestación, recaudo, administración y giro de los recursos que financian el Régimen Subsidiado, el decreto legislativo pretendió la adopción de criterios para su administración en el nivel central, de manera que se garantizara la eficiencia y oportunidad en el flujo de los recursos, sin que se afectaran las competencias legales de las entidades territoriales ni la titularidad sobre estos recursos• Con la constitución de un Patrimonio Autónomo se fijó una nueva forma para la administración de los recursos que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado de Salud. El administrador fiduciario del patrimonio autónomo giraría directamente los recursos a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado• se constituyó el patrimonio autónomo para el recaudo, administración y giro de los recursos que financian y	<ul style="list-style-type: none">- patrimonio autónomo- administración de recursos del régimen subsidiado de salud-- administrador fiduciario del patrimonio autónomo- estados de cuenta del patrimonio autónomo	DECLÁRANSE AJUSTADAS A DERECHO, mientras produjeron efectos, las Resoluciones 1035 y 1036 de 19 de marzo de 2010, proferidas por el Ministerio de la Protección Social, mediante las cuales se reglamentó parcialmente el Decreto Legislativo 132 de 2010.
------------------------------	---	----------	------------------------------------	--	----------------------------	---	--	---

						<p>cofinancian el Régimen Subsidiado y, se designó a una de las entidades fiduciarias o consorcios fiduciarios con los que se tiene contrato vigente, para que actúe transitoriamente como administrador fiduciario del patrimonio autónomo y recaude, administre y gire los recursos que lo conformarán, hasta tanto se surta la adjudicación del administrador fiduciario mediante el proceso de licitación pública – se designó a la Fiduciaria La Previsora S.A</p> <ul style="list-style-type: none">• Se estimó que el recaudo, la administración y el giro directo de los recursos que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado de Salud a las Empresas Promotoras de los Servicios de Salud o a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y a la Cuenta de Alto Costo, deberá realizarlos el patrimonio autónomo por medio de un administrador fiduciario• Se estatuyó que los costos y gastos necesarios para garantizar el manejo del patrimonio autónomo tales como los de administración, auditorias, apoyo técnico y remuneración fiduciaria se pagarán en primera instancia, con cargo a los rendimientos financieros de los recursos.• Establecido quedó que en el Patrimonio Autónomo habrá un estado de cuenta individual por cada departamento, distrito y municipio, en el cual se registrarán los valores provenientes de los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo, y que por titulares tienen a las entidades territoriales, conservándose la autonomía administrativa de dichas entidades que continuarán verificando el cumplimiento de los procesos de la administración y operación del Régimen Subsidiad		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

CE 30/06/11	Fiducia mercantil como servicio financiero	30-06-11	Fundación para la promoción de la investigación y la tecnología .		DR. HUGO FERNAN DO BARCEN AS	<ul style="list-style-type: none">• Habida cuenta de que el contrato de fiducia mercantil es un negocio jurídico regulado por el código de comercio es un acto mercantil, pero no por ello, quienes celebran tal negocio jurídico pueden ser llamados comerciantes o concluir que realizan una actividad comercial• El Fideicomitente es aquella persona natural o jurídica que encomienda a la sociedad fiduciaria una gestión determinada para el cumplimiento de una finalidad. Por eso , en el contrato, la ley o el fideicomitente precisan las instrucciones que debe acatar la fiduciaria para el desarrollo de la gestión encomendada• La parte actora escogió el negocio fiduciario para la administración de los recursos de la fundación y, por ende, para cumplir el objeto social para la que fue constituida. Luego, contrario a lo que sostiene el Distrito, si son relevantes los fines para los cuales se concertó la fiducia mercantil, pues si tal negocio jurídico se suscribe para cumplir la finalidad determinada por el constituyente , y la finalidad de la fundación es, indiscutiblemente , el desarrollo de su objeto social, la fiducia mercantil se erige como un mero instrumento de administración de los recursos de la fundación, mas no como una actividad comercial para obtener lucro• La fiducia mercantil si entraña una actividad lucrativa, pero no de carácter comercial, sino de servicios financieros. En esa medida, la calidad en que actúa la parte actora en dicho contrato permite advertir que quien ejecuta la actividad de servicios financieros es la sociedad fiduciaria. La parte actora simplemente se beneficia de tales servicios financieros que le presta la	- Acto mercantil - Calidad de comerciante - Fin de la fiducia mercantil - Servicio financiero de la fiducia mercantil - Impuesto de industria y comercio	CONFIRMASE la Sentencia de fecha 12 de junio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta , Subsección “B” dentro del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la parte actora contra el Distrito Capital, contra las Resoluciones Nos.10855 DDI 063721 del 13 de septiembre de 2006 y DDI 059451 del 20 de junio de 2007, mediante las que la entidad territorial demandada decidió imponer a la parte actora sanción por no declarar el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, correspondiente a los periodos 4 a 6 del año gravable 2011 y 1 al 6 de los años gravables 2002 a 2005
------------------------------	--	----------	---	--	---	---	--	---

						<p>Sociedad Fiduciaria en procura del desarrollo del objeto social de la fundación y, por eso, si bien percibe ingresos en virtud del contrato de fiducia mercantil, tales ingresos no provienen de una actividad mercantil, en si misma considerada , que haya sido ejecutada por la fundación</p> <ul style="list-style-type: none"> • La sociedad fiduciaria es la que ejerce de manera profesional y habitual la actividad de servicios financieros. El fideicomitente es un simple beneficiario de tales servicios y, por tanto, no ejerce ni una actividad mercantil como lo dijo el Distrito, ni tampoco la de servicios financieros, pues esta la ejecuta la Sociedad Fiduciaria • Es evidente que nos son objeto del impuesto de industria y comercio los ingresos que por rendimientos financieros percibió la fundación, pues tales ingresos no provienen de la ejecución de la actividad comercial que le endilgo el Distrito en los actos demandados 		
CE 14/07/11	Vigencias futuras excepcionales	14-07-11	Efrén Antonio Hernández Díaz		DR. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO	<ul style="list-style-type: none"> • Los departamentos y municipios conservan sus competencias constitucionalmente reconocidas, especialmente en materia crediticia, pero de forma concurrente con las competencias asignadas al estado central y en especial al legislador, que se justifican por cuanto las variables esenciales de la economía , reclaman un manejo coordinado y una aplicación uniforme • Ni el decreto 111 de 1996, ni la ley 819 de 2003 prevén la posibilidad de que entes territoriales comprometan vigencias futuras excepcionales; y de que mal puede interpretarse el silencio de la ley en este respecto como una autorización tácita 	<ul style="list-style-type: none"> - Competencias crediticias de los entes territoriales - Vigencias futuras ordinarias - Vigencias futuras excepcionales 	<p>ADICIONASE el numeral 1° de la sentencia apelada , en el sentido de inaplicar en este caso concreto, asimismo, el artículo 153 de la ley 1151 de 2007 en el caso que se juzga, por infracción a los artículos 352 de la Constitución Política y 11 de la ley 819 de 2003</p> <p>CONFIRMASE el fallo apelado en el que el Tribunal con fundamento en el artículo</p>

					<ul style="list-style-type: none">• La diferencia fundamental entre las vigencias futuras ordinarias y las excepcionales , radica , esencialmente, en que en las primeras la ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia en curso, mientras que en las excepcionales , se afecta el presupuesto de vigencias futuras, sin apropiación del año en que se concede la autorización• La ley 819 de 2003 en su artículo 12 dispone que en las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura , en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador• Para comprometer vigencias futuras excepcionales han de mediar los siguientes requisitos:<ul style="list-style-type: none">a) Autorización del Consejo Superior de Política Fiscalb) Se trata de obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorizaciónc) Su objeto es hacer viable la realización de obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, y las garantías a las concesionesd) El monto máximo de las vigencias futuras excepcionales, su plazo y condiciones deberán estar en consonancia con las metas plurianuales de marco fiscal del que trata el artículo 1 de la ley 809 de 2003• Si el legislador hubiera querido que las entidades territoriales apropiaran vigencias futuras excepcionales, habría indicado que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas		<p>4°C.P, inaplico la Ordenanza 14 de 2006 “por la cual se adoptaron modificaciones al Estatuto Orgánico de Presupuesto de Casanare” y declaro la nulidad de la Ordenanza 1 de 2009, por la cual la asamblea de Casanare “autoriza al gobernador de Casanare para formular, adoptar e implementar el Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico y ambiental del Casanare</p> <p>-En firme esta providencia , devuélvase el expediente al Tribunal de origen</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>consultaran las metas plurianuales del Marco Fiscal para las entidades territoriales específicamente su artículo 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • La asamblea departamental del Casanare no podía expedir las autorizaciones contenidas en la Ordenanza 1 del 30 de enero de 2009, que comprometían vigencias futuras excepcionales del departamento a partir dl año 2010 hasta el 2018 • El Gobernador del Casanare no podía adoptar un esquema fiduciario para el departamento partiendo de la apropiación de vigencias excepcionales futuras y por ende tampoco podía celebrar los convenios y contratos necesarios que fueren necesarios para la correcta implementación de dicho sistema 		
CE 18/08/11	Contrato de fiducia mercantil para la administración de recursos del Estado	18-08-11	Jaime Amorocho Murallas		DR.GERARDO ARENAS MONSALVE	<ul style="list-style-type: none"> • La Fiduciaria la Previsora S.A., es una empresa Industrial y Comercial del Estado motivo por el cual, las actividades que le han sido encomendadas se rigen por un régimen privado cuyo fin no es el de definir la situación prestacional de un servidor público, a través de actos administrativos, mucho menos de aquellos que gozan de regímenes especiales, como es el caso de los docentes. • La Fiduciaria la Previsora S.A en desarrollo del contrato de fiducia mercantil suscrito con el Ministerio de Educación Nacional, para administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, limita su función a aprobar o improbar los proyectos de resoluciones, de reconocimiento prestacional que elabora previamente el citado fondo y la Secretaría de 	<ul style="list-style-type: none"> - Fiducia mercantil - Fiduciaria como empresa industrial y comercial del Estado - Funciones de la fiduciaria - Acto administrativo - Respuesta a peticiones 	CONFÍRMASE la sentencia de 24 de abril de 2008, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por JAIME AMOROCHO MURALLAS contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, con la

						<p>Educación del correspondiente ente territorial donde el docente prestó sus servicios</p> <ul style="list-style-type: none">• la Fiduciaria la Previsora S.A., al expedir el Oficio de 23 de abril de 2004, donde manifestó al demandante que “no era posible dar curso a su solicitud de tramitar la pensión de jubilación, se arrogó una competencia que no le está dada por las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y los Decretos reglamentarios 1775 de 1990 y 2831 de 2005• Bajo este supuesto, en ningún caso la Fiduciaria la Previsora S.A., en su condición de administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, está facultada para dar respuesta directamente a las peticiones de los docentes, tendientes a obtener el reconocimiento de una prestación pensional, dado que su naturaleza es la de una sociedad de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de empresa industrial y comercial del estado, cuyo objeto no es el de definir la situación prestacional de un servidor público, a través de actos administrativos• En el caso concreto, sin embargo a juicio de la Sala el hecho de que el citado Oficio le hubiera manifestado al demandante que “no era posible dar curso a su solicitud de tramitar la pensión de jubilación”, le define su derecho pensional motivo por la cual teniendo en cuenta el carácter especial e imprescriptible del derecho pensional y , para garantizarle su derecho de acceso a la administración de justicia, (artículo 229 de la Constitución Política), deberá entenderse que el citado Oficio constituye el acto administrativo a través del cual la	pensionales	<p>siguiente adición.</p> <p>ORDÉNASE al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Secretaría de Educación departamental de Santander, que expedida el acto administrativo de reconocimiento pensional a favor del señor JAIME AMOROCHO MURALLAS, en la forma prevista en la parte motiva de esta providencia.</p>
--	--	--	--	--	--	--	-------------	---

						<p>administración resolvió la petición formulada por el actor tendiente a obtener el reconocimiento y pago de una prestación pensional</p> <ul style="list-style-type: none">• Ya considerado el Oficio como acto administrativo entro la sala a estudiar su legalidad para establecer si la negativa contenida en el mismo resultaba acorde a lo dispuesto en las normas que regulan lo concerniente al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a los docentes oficiales.• Estima la Sala que el demandante en el caso concreto tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación, a partir del momento en que adquirió su estatus pensional, esto es el 5 de agosto de 2003, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, “equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.”.• A juicio de la Sala, resulta acertada la decisión del Tribunal de acceder a las súplicas de la demanda en tanto que, la parte actora logró desvirtuar la presunción de legalidad del Oficio de 23 de abril de 2004, al ser expedido de manera irregular, toda vez que la Fiduciaria la Previsora S.A., asumió una competencia que el legislador le ha confiado de manera exclusiva al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, esto es la de definir la situación prestacional de los docentes afiliados, en este caso la del señor Jaime Amorocho Murallas en su condición de docente oficial.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

CE Radicación 11001- 03-27- 000- 2008- 00038- 00(1741 4)	Registro de la adquisición de derechos fiduciarios, como modalidad de inversión extranjera	31-05-12	Emilio Wills Cervantes		HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS	<ul style="list-style-type: none">• La Constitución Política le confirió al Banco de la Republica la competencia para regular, entre otros, el régimen de cambios internacionales.• El artículo 372 de la Constitución le otorgó a la Junta Directiva del Banco de la Republica el carácter de autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme con las funciones que le asigne la ley• La responsabilidad para fijar el régimen de cambios internacionales está a cargo de tres autoridades: El Congreso de la República, que expide la ley marco sobre el régimen de cambios internacionales. El Gobierno Nacional, que debe dictar el decreto que desarrolla la ley marco y “señalar el régimen de cambios internacionales, en concordancia de las funciones que la Constitución consagra para la junta directiva del Banco de la República”. Y la Junta Directiva del Banco de la República, que regula los cambios internacionales, con sujeción a la política económica general.• La Resolución Externa 8 del 5 de mayo 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República compendió el régimen de cambios internacionales. En lo que interesa, los artículos 30 a 37 incluyeron las inversiones de capital del exterior como operaciones sujetas al régimen cambiario, cuyo registro corresponde al Banco de la República, de acuerdo con la reglamentación que la misma entidad debe expedir• El artículo 3° del Decreto 2080 de 2000, prevé que son inversiones de capital la inversión portafolio y la inversión directa. La inversión de portafolio incluye la inversión en	<ul style="list-style-type: none">- Régimen de cambios internacionales- Inversiones de capital- Inversión directa- Adquisición de derechos fiduciarios- Fiducia mercantil- Registro de inversiones extranjeras	DECLÁRASE AJUSTADA A DERECHO la expresión demandada —prevista en el literal a), numeral 1°, del punto 7.2.3. del manual de cambios internacionales, establecido por la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del 22 de junio de 2007—, siempre que se entienda así: “La inversión extranjera directa de que trata el artículo 3, literal a), ordinal ii) del Decreto 2080 de 2000, solo podrá ser sujeta de registro cuando se utilice como mecanismo transitorio previo a la constitución de una empresa o para la compra, venta y administración de participaciones en empresas que no estén registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores.”
---	--	----------	------------------------	--	---------------------------------	---	---	--

						<p>acciones, bonos convertibles en acciones y otros valores inscritos en el registro nacional de valores. En lo que interesa para resolver el caso concreto, se considera inversión directa la adquisición de derechos en patrimonios autónomos, constituidos mediante contrato de fiducia mercantil, bien sea como medio para desarrollar una empresa o para la compra, venta y administración de participaciones en empresas que no estén inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios.</p> <ul style="list-style-type: none">• Las inversiones de capital extranjero, según el artículo 8° del Decreto 2080 de 2000, deben registrarse en el Banco de la República, “de acuerdo con el procedimiento que establezca dicha entidad” . Para el caso de las inversiones extranjeras en derechos fiduciarios, el literal c), ordinal 4°, del artículo 8°• Para la Sala, en efecto, la norma parcialmente demandada desconoce que la empresa, según el artículo 25 C. Co., es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Actividad que se realiza, generalmente, por medio de establecimientos de comercio. Mientras que el artículo 98 ib. Define la sociedad como el contrato en el que dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad.• La norma parcialmente demandada no podía limitar el registro de la adquisición de derechos fiduciarios, como		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>modalidad de inversión extranjera, a los casos en que se utilizara como medio previo para constituir una sociedad, pues lo cierto es que el régimen de inversiones extranjeras (Decreto 2080 de 2000) aludía expresamente a que ese tipo de inversiones debían utilizarse como medio previo para la constitución de una empresa</p> <ul style="list-style-type: none">• Sin duda, el acto demandado modificó las condiciones para la adquisición de derechos fiduciarios por parte de inversionistas extranjeros. Esto es, el Banco de la República interpretó erróneamente el ordinal ii) del literal a) del artículo 3° del Decreto 2080 de 2000 y expidió una regla de registro que limitaba las inversiones de esa naturaleza. Aunque la modalidad de inversión siguiera siendo la misma (la adquisición de derechos fiduciarios), la regla de registro limitaba la inversión extranjera, en cuanto a que disponía que se registraba siempre que se utilizara como medio previo para constituir una sociedad, no una empresa.• En lo concerniente a las inversiones extranjeras, sin embargo, la función de registro que cumple el Banco de la República debe sujetarse al Decreto 2080 de 2000. El Banco de la República, entonces, estaba en la obligación de registrar la adquisición de derechos fiduciarios por parte de inversionistas extranjeros, siempre que se acreditara que tales derechos se adquirieron como medio para desarrollar una empresa, pues esa era la única condición prevista por la norma vigente al momento en que se expidió el acto parcialmente demandado (el ordinal ii) del literal a) del artículo 3° del Decreto 2080 de 2000)		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> En esas condiciones sería del caso declarar la nulidad de la norma parcialmente demandada. Empero, sólo para efectos de que la norma sobre el registro de ese tipo de inversión tenga efectos prácticos y para preservar la coherencia de los demás supuestos que prevé la norma se declarara ajustada a derecho la expresión demandada, siempre que se entienda así: “La inversión extranjera directa de que trata el artículo 3, literal a), ordinal ii) del Decreto 2080 de 2000, solo podrá ser sujeta de registro cuando se utilice como mecanismo transitorio previo a la constitución de una empresa o para la compra, venta y administración de participaciones en empresas que no estén registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores”. 		
CE Radicación 25000 2324 000 2007 00488 01	Fiduciaria como vocera y administradora de patrimonio autónomo	26-07-12	Fiduciaria Popular S.A		MARCO ANTONIO VELILLA MORENO	<p>•La Sala se ocupará de establecer si en la actuación administrativa que expidió las resoluciones 0147 de 31 de enero de 2007 y 000876 de julio de 2007 mediante las cuales se imponen sanciones a la sociedad Patrimonios Autónomos Fiduciaria Popular S.A por infracciones al régimen cambiario, se vulneró o no el derecho a la defensa de la Fiduciaria Popular S.A., en razón a no haber sido vinculada a la misma, no obstante ser administradora del patrimonio autónomo titular y beneficiario de la cuenta de compensación especial por cuyo uso irregular se impuso una sanción.</p> <ul style="list-style-type: none"> La entidad demandada afirma que la renuencia a aceptar la intervención de la sociedad Fiduciaria Popular S.A. en el proceso sancionatorio obedeció al hecho cierto y probado de que la mencionada sociedad acudió 	- Patrimonio autónomo - Contrato de Fiducia mercantil - Fiduciaria administrador a y vocera del patrimonio autónomo - Derecho de defensa - Personería del patrimonio	CONFIRMAR la sentencia apelada, de fecha 8 de octubre de 2009, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de las resoluciones 0147 de 31 de enero de 2007 y 000876 de 25 de julio de 2007, proferidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante las cuales, en su orden, se impone a la sociedad Patrimonios Autónomos Fiduciaria Popular S.A. una multa por

						<p>actuando en nombre y representación propia, pese a que debió vincularse en calidad de administradora del patrimonio autónomo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Considera la Sala que, tal como lo reconoce la misma entidad demandada, la sociedad demandante, Fiduciaria Popular S.A., es la administradora del patrimonio autónomo titular de la cuenta de compensación especial por cuya utilización se impuso la sanción cambiaria, y por mandato legal, tiene la personería de dicho patrimonio, debiendo entonces actuar en nombre de éste para todos los efectos administrativos o judiciales• Aunque en el recurso de apelación la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales señala que el patrimonio autónomo si bien es sujeto de derechos y obligaciones no constituye una persona jurídica, y que por ende debe ser representado por el fiduciario, como administrador del mismo, se advierte que en la actuación administrativa no dio aplicación a estos criterios, impidiendo que la demandante ejerciera la representación que en derecho le correspondía como vocera del patrimonio autónomo titular de la cuenta de compensación especial por cuya utilización se inició la actuación administrativa sancionatoria.• Señala el código de comercio que los bienes objeto de la fiducia salen del patrimonio del fideicomitente pero no entran al del fiduciario (artículo 1227) y, que para todos los efectos legales, los bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo de fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad	autónomo	<p>infracciones al régimen cambiario, y se rechaza por falta de legitimación el recurso de reposición interpuesto contra esa decisión por la sociedad Fiduciaria Popular S.A. y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenó a dicha entidad abstenerse de cobrar a la parte actora el valor de dicha sanción.</p>
--	--	--	--	--	--	---	----------	--

						<p>contemplada en el acto constitutivo (artículo 1233).</p> <ul style="list-style-type: none">• Son deberes indelegables del fiduciario, además de los previstos en el acto constitutivo, entre otros, realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia, mantener los bienes objeto de la fiducia separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente (art. 1234).• los artículos 1233 y 1234 del Código de Comercio, disponen que el patrimonio autónomo conformado en desarrollo del contrato de fiducia mercantil, aunque se constituye en receptor de los derechos y obligaciones legal y convencionalmente derivados de los actos y contratos celebrados y ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del contrato de fiducia, no es persona natural ni jurídica, por lo cual debe actuar por conducto del fiduciario quien, a su vez, actúa como vocero y administrador del patrimonio autónomo y en tal carácter celebra y ejecuta diligentemente todos los actos jurídicos necesarios para lograr la finalidad del fideicomiso, comprometiendo al patrimonio autónomo dentro de los términos señalados en el acto constitutivo de la fiducia. Para este efecto, el fiduciario deberá expresar que actúa en calidad de vocero y administrador del respectivo patrimonio autónomo• El fiduciario lleva la personería del patrimonio autónomo en todas las actuaciones procesales de carácter administrativo o jurisdiccional que deban realizarse para		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>proteger y defender los bienes que lo conforman contra actos de terceros, del beneficiario o del constituyente, o para ejercer los derechos y acciones que le correspondan en desarrollo del contrato de fiducia.</p> <ul style="list-style-type: none">• la Administración desconoció la normativa citada, no siendo de recibo sus argumentos sobre que la renuencia a aceptar la intervención de la sociedad Fiduciaria Popular S.A. en el proceso sancionatorio obedeció al hecho de que la mencionada sociedad acudió actuando en nombre y representación propia cuando debió vincularse en calidad de administradora del patrimonio autónomo.• Teniendo la entidad que adelanta el proceso sancionatorio la obligación de identificar adecuadamente al presunto infractor y conociendo además que la ley dispone que los patrimonios autónomos deben actuar por intermedio de su representante, debió vincular al mismo precisamente a éste, lo cual no hizo, pues en los actos acusados se advierte que en ningún momento se precisa en ellos que el sujeto que finalmente sancionó sea la sociedad fiduciaria administradora (que no lo es en todo caso) del Patrimonio Autónomo Ecopetrol, quien figuraba como titular de la cuenta corriente especial de compensación cuyo manejo dio origen al procedimiento administrativo.• Aunque en sus intervenciones la Fiduciaria Popular S.A. no fue lo suficientemente explícita, como debió serlo, sobre su condición respecto del patrimonio autónomo titular de la cuenta corriente, sí dejó claro que éste debía estar representado por su sociedad administradora,		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>teniendo en cuenta esto, estima la Sala que era deber de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales requerir previamente a dicha sociedad en orden a determinar si ostentaba la condición de fiduciaria del patrimonio autónomo Ecopetrol, más aun cuando en las pruebas que se acompañaron con los descargos aparecía como titular de la cuenta “Patrimonio Autónomo Ecopetrol-Fiduciaria Popular S.A.”, y no rechazar de plano su intervención, como en efecto ocurrió</p> <ul style="list-style-type: none">• Lo anterior, constituye claramente una violación del derecho a la defensa, en la medida en que se impuso una sanción cambiaria a un patrimonio autónomo sin que el mismo estuviera legalmente representado en el trámite administrativo por la sociedad fiduciaria que lo administra y sin tener la oportunidad de ser escuchado.		
CE Radicación: 25000- 23-24- 000- 2007- 00488- 01	Fiduciaria como administradora del patrimonio autónomo y titular de su personería jurídica	9-08-12	Fiduciaria Popular S.A		DR. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO	<ul style="list-style-type: none">• La Sala se ocupará de establecer si en la actuación administrativa que culminó con la expedición de los actos acusados se vulneró o no el derecho a la defensa de la Fiduciaria Popular S.A., en razón a no haber sido vinculada a la misma, no obstante ser administradora del patrimonio autónomo titular y beneficiario de la cuenta de compensación especial por cuyo uso irregular se impuso una sanción.• tal como lo reconoce la misma entidad demandada, la sociedad demandante, Fiduciaria Popular S.A., es la administradora del patrimonio autónomo titular de la cuenta de compensación especial por cuya utilización se impuso la sanción cambiaria, y por mandato legal, tiene la personería de dicho patrimonio, debiendo entonces actuar en nombre de éste para todos los efectos	<ul style="list-style-type: none">- Representante del patrimonio autónomo- Personería del patrimonio autónomo- Defensa de los bienes fideicomitidos- Derecho de defensa	CONFIRMAR la sentencia apelada, de fecha 8 de octubre de 2009, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de las resoluciones 0147 de 31 de enero de 2007 y 000876 de 25 de julio de 2007, proferidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante las cuales, en su orden, se impone a la sociedad Patrimonios Autónomos Fiduciaria Popular

					<p>administrativos o judiciales</p> <ul style="list-style-type: none">• Como se impuso la sanción por la infracción cambiaria sin que en la respectiva actuación administrativa se vinculara formalmente a la Fiduciaria Popular S.A., en esa precisa condición, siendo deber de la Administración hacerlo, es evidente que se vulneró el derecho de defensa de la parte actora, pues ésta no tuvo la posibilidad de que sus argumentos de defensa fueran escuchados• Aunque en el recurso de apelación la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales señala que el patrimonio autónomo si bien es sujeto de derechos y obligaciones no constituye una persona jurídica, y que por ende debe ser representado por el fiduciario, como administrador del mismo, según lo dispuesto en el artículo 1234 del Código de Comercio y en el artículo 1º del Decreto 1049 de 2006, se advierte que en la actuación administrativa no dio aplicación a esta normativa, impidiendo que la demandante ejerciera la representación que en derecho le correspondía como vocera del patrimonio autónomo titular de la cuenta de compensación especial por cuya utilización se inició la actuación administrativa sancionatoria• Son deberes indelegables del fiduciario, además de los previstos en el acto constitutivo, entre otros, realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia, mantener los bienes objeto de la fiducia separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y llevar la personería para la protección y defensa de los		<p>S.A. una multa por infracciones al régimen cambiario, y se rechaza por falta de legitimación el recurso de reposición interpuesto contra esa decisión por la sociedad Fiduciaria Popular S.A. y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenó a dicha entidad abstenerse de cobrar a la parte actora el valor de dicha sanción.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

						<p>bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente (art. 1234)</p> <ul style="list-style-type: none"> En efecto, teniendo la entidad que adelanta el proceso sancionatorio el deber de identificar adecuadamente al presunto infractor y conociendo además que la ley dispone que los patrimonios autónomos deben actuar por intermedio de su representante, debió vincular al mismo precisamente a éste, lo cual no hizo, pues si se observan los actos acusados se advierte que en ningún momento se precisa en ellos que el sujeto que finalmente sancionó sea la sociedad fiduciaria administradora (que no lo es en todo caso) del Patrimonio Autónomo Ecopetrol, quien figuraba como titular de la cuenta corriente especial de compensación cuyo manejo dio origen al procedimiento administrativo. 		
CE 22/03/20 13	Sujeto pasivo del impuesto de delineación urbano en las sociedades fiduciarias	22/03/2013	Fiduciaria de Occidente S.A.	Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a contra la sentencia del 16 de febrero de 2011, proferida por el	Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez	<ul style="list-style-type: none"> En esta oportunidad la Sala debe analizar si los actos administrativos por medio del cual se sanciono a la Fiduciaria de Occidente S.A. por no declarar el impuesto de delineación urbana es legal o no. Se establece que si bien el impuesto de delineación urbana estaba regulado por el Decreto Distrital 352 de 2002, aplicable en la fecha en que se causó el tributo, en cuyo artículo 74 dispuso como sujeto pasivo del mismo a los propietarios de los predios sobre los cuales se realiza el hecho generador, no se puede echar de menos que el sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana, no puede ser otro que quien realiza el hecho gravable, lo que en este caso ocurre con la expedición de la licencia de construcción de la que pueden ser titulares, entre 	<ul style="list-style-type: none"> - Impuesto de delineación urbano - Patrimonio autónomo - Sujeto pasivo - Sanción administrativa - Contrato de fiducia mercantil - Fideicomitent e 	<p>1. CONFÍRMASE la sentencia del 16 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección A.</p> <p>2. RECONÓCESE personería para actuar al doctor Carlos Felipe Pinilla Acevedo, como apoderado judicial de la parte demandante, en los términos conferidos en el poder que obra en los folios 398 y 399 del cuaderno principal.</p>

				Tribunal Administra tivo de Cundinam arca		<p>otros, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia, pero también los fideicomitentes de las mismas fiducias, de los inmuebles objeto de la solicitud.</p> <ul style="list-style-type: none">• A su vez se debe precisar que el Acuerdo 20 de 1940 estableció que estaban obligados a pagar el tributo de delineación urbana, aquellos interesados en las respectivas obras o edificaciones, sin exigir como requisito ser propietario del inmueble de dicha construcción.• De ahí que, negarle al fideicomitente el derecho a cumplir con la obligación de declarar y pagar el impuesto, es prohibirle que cumpla un requisito exigido para poder obtener la licencia, lo que iría en contra del efecto útil que deben tener las normas.• La Sala no desconoce que el contrato de fiducia mercantil celebrado a favor de la Fiduciaria de Occidente S.A., respecto del predio objeto del impuesto en cita, implicó la transferencia de un bien afecto al cumplimiento de la finalidad determinada por el fideicomitente y que de ello surgió un patrimonio autónomo del cual es su vocera. Sin embargo, en este caso, como se precisó líneas atrás, no solo los propietarios pueden ser sujetos pasivos del impuesto de delineación urbana, pudiendo recaer la obligación también en el fideicomitente.• Por lo tanto la Sala concluye conforme a las pruebas allegadas al proceso, el fideicomitente, quien pidió la licencia de construcción, cumplió a cabalidad con la obligación de presentar la declaración del impuesto y		Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase
--	--	--	--	---	--	--	--	--

						el pago del mismo.		
CE 04/04/20 13	Impuesto de Delineación Urbana / Sociedad fiduciaria	04/04/2013	Alianza Fiduciaria S.A	La sociedad Alianza Fiduciaria S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la cual solicitó se declare la nulidad de las Resoluciones 634 DDI 225589 del 4 de agosto de 2009 y DDI 185493 del 11 de agosto de	Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez	<ul style="list-style-type: none"> • En esta oportunidad le corresponde a la Sala decidir si los actos administrativos por medio de los cual el Distrito Capital impuso sanción por no declarar son nulos o no. • De ahí que se debe entrar a analizar si la obligación de pagar el impuesto de delineación urbana por las etapas 4 y 5 fueron debidamente cumplidas por quien tenía dicha obligación, o si por el contrario, quien tenía dicha obligación no cumplió, caso en el cual la sanción sería lo correcto. • El origen del impuesto a que se refiere este proceso se remonta al literal g) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 que autorizó al Concejo de Bogotá para reglamentarlo y crearlo. • Si bien el impuesto de delineación urbana estaba regulado por el Decreto Distrital 352 de 2002, aplicable en la fecha en que se causó el tributo, en cuyo artículo 74 dispuso como sujeto pasivo del mismo a los propietarios de los predios sobre los cuales se realiza el hecho generador, no se puede echar de menos que el sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana, no puede ser otro que quien realiza el hecho gravable, lo que en este caso ocurre con la expedición de la licencia de construcción de la que pueden ser titulares, entre otros, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia, pero también los fideicomitentes de los mismos fideicomisos, de los inmuebles objeto de la solicitud. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tributos - Fideicomisos - Fideicomitentes - Título de dominio 	1. CONFÍRMASE la sentencia del 25 de mayo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. contra el Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda.

			<p>2010 312-000005 y que como consecuencia de lo anterior se señale que dichas resoluciones no son procedente</p> <p>En el texto de la demanda invocó como violadas las siguientes disposiciones: artículos 43 de la Ley 962 de 2005, 3, 4, y 70 a 77</p>	<ul style="list-style-type: none">• De una interpretación sistemática de las normas antes citadas se puede afirmar que puede ser sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana el fideicomitente. Esta conclusión parte de una premisa fundamental, y es que si se le permite a los fideicomitentes obtener las licencias de construcción, no se les puede negar que declaren y paguen el tributo, lo que constituye la obligación previa para obtener la licencia, para lo cual están autorizados por el mismo ordenamiento.• En otras palabras, negarle al fideicomitente el derecho a cumplir con la obligación de declarar y pagar el impuesto, es prohibirle que cumpla un requisito exigido para poder obtener la licencia, lo que iría en contra del efecto útil que deben tener las normas.		
--	--	--	---	---	--	--

				del Decreto Distrital 352 de 15 de agosto de 2002, 11-1, 13, 54, 55, 60 y 116 del Decreto Distrital 807 de 1993, 60 del Decreto Distrital 897 de 1993.				
CE 11/07/20 13	Patrimonio autónomo	11/07/2013	Acción Sociedad Fiduciaria S.A.	Se acusa el artículo 1ero de la resolución 3600 de 1988 por vulnerar los artículos 4, 6, 13, 58 y 83 de la	Hugo Fernando Bastidas Bárcenas	<ul style="list-style-type: none">• En esta oportunidad le corresponde a la Sala decidir si es nulo el acápite de la Resolución 3600 de 1988 expedida por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), correspondiente a la cuenta 1195, del Plan Único de Cuentas para el Sistema Financiero adoptado mediante dicha resolución.• Ahora bien, ya en el campo concreto de la fiducia mercantil, se puede decir que dicha figura tiene unas características que le dan su fisonomía y que, como se verá más adelante, son relevantes para la	- Principio de independencia - Responsabilidad de la sociedad fiduciaria - Bienes fideicomitidos - Fiduciante	NIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Cópiese, notifíquese y cúmplase».

				<p>Constitución Política. Artículos 1226, 1227 y 1233, y numerales 2° y 3° del artículo 1234 del Código de Comercio. Artículos 12 y 15 del Decreto 2649 de 1993. Cartilla Fiduciaria, expedida por la “Asociación de Fiduciarias”.</p>		<p>decisión. Se trata de un contrato en virtud del cual una persona (fiduciante o fideicomitente) transfiere a otra (fiduciario) uno o más bienes, con el objeto de que este los administre o enajene y con miras al cumplimiento de una finalidad determinada por el fiduciante. Una de las características de la fiducia mercantil es que se trata de un negocio jurídico claramente instrumental. Es decir, es un contrato que sirve como medio para obtener otros resultados buscados por las partes.</p> <ul style="list-style-type: none">• A su vez se debe precisar que como consecuencia de la fiducia mercantil existe la formación del patrimonio autónomo conformado por los bienes objeto de la fiducia. De aquí a que se deriva un principio de independencia con dos consecuencias fundamentales.• En primer lugar los bienes del patrimonio autónomo tienen una finalidad específica, señalada en el acto de constitución. Y en segundo lugar se precisa que dichos bienes deben estar separados del patrimonio del fiduciante, y a su vez, de los demás patrimonios autónomos conformados.• La separación de los bienes implica que los mismos están excluidos de la garantía común de los acreedores del beneficiario y solamente garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad del fideicomiso• La independencia de los patrimonios originados en la constitución de una fiducia mercantil es relativa y limitada. Relativa, porque se trata de patrimonios	<p>- Fiduciario - Negocio jurídico - Acreedores - Riesgo de pérdida - Administración - Contabilidad</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

						<p>separados pero cuyo titular es una misma persona, la fiduciaria. Y dicha separación no es absoluta, ya que no se trata de patrimonios cuya administración sea libre, sino que se encuentra afecta a un fin específico claramente determinado en el acto de constitución.</p> <ul style="list-style-type: none">• Consecuencia de lo anterior es que las facultades de administración del titular del patrimonio autónomo no son las mismas que el ordenamiento jurídico reconoce al titular de un patrimonio normal. Y como consecuencia de esto, la responsabilidad del administrador es mayor. El artículo 1243 del Código de Comercio dice que el fiduciario responderá hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su gestión.• La norma acusada impone a las entidades vigiladas la obligación de hacer provisiones en aquellos eventos en los que se constate la existencia de un riesgo, consistente en pérdidas por falta de conciliación de partidas no aclaradas en un término de 30 días o más. En otras palabras, lo que la norma hace es reconocer que la falta de conciliación de dichas partidas es un hecho económico relevante que, en caso de que genere el riesgo de pérdida, debe ser registrado como una contingencia y debe hacerse la provisión respectiva.• La razón de ser de dicha disposición es clara. La pérdida o riesgo probable de pérdida que, en principio, sea atribuible a la administradora del fideicomiso, es una pérdida que, en caso de materializarse, esto es, en caso de convertirse en hecho cierto, tendría que ser asumida por la fiduciaria		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>y afectar sus estados de resultados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lo anterior no es violatorio del principio de independencia de los patrimonios, ya que no es que los hechos económicos del patrimonio autónomo se registren en la contabilidad de la fiduciaria, sino que se trata de un hecho económico propio de la fiduciaria. Es una falta de conciliación de cuentas que puede llegar a producir una pérdida para la fiduciaria, pues es ésta la que deberá responder con sus recursos propios y no el patrimonio autónomo. • Por último, respecto de la vulneración de la denominada “Cartilla Fiduciaria”, de la “Asociación de Fiduciarias”, es evidente que, por no tratarse de una norma jurídica, no resulta viable estudiar la causal de nulidad por violación de la norma en que debía fundarse el acto demandado. 		
CE 24-10/2013	Régimen de liquidación/ Sociedad fiduciaria	24-10-2014	Distrito Capital - Secretaría de Hacienda	Legalidad de las resoluciones 78, 79, 80 y 85 de 15 de enero de 2008 y 115, 116, 119 y 120 de 5 de marzo de 2008, por	Martha Teresa Briceño de Valencia	<p>En esta ocasión la Sala entra a decidir sobre la legalidad de las resoluciones 78, 79, 80 y 85 de 15 de enero de 2008 y 115, 116, 119 y 120 de 5 de marzo de 2008, por las cuales la Fiduciaria del Estado S.A. - Fiduestado en Liquidación rechazó las reclamaciones presentadas por el Distrito Capital, las cuales se relacionan con acreencias como consecuencia de impuestos predial y de vehículos.</p> <p>A continuación se va a precisar en unos extractos relevantes para el negocio fiduciario. Respecto del régimen de liquidación se debe tener en cuenta varias normas como lo son las siguientes;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Liquidación forzosa - Emplazar - Notificación personal - Cesión de contratos - Contratos de ejecución - Fiducia mercantil - Disolución - Medidas 	<p>Por las razones expuestas, CONFÍRMASE la sentencia apelada.</p> <p>Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».</p>

				las cuales la Fiduciaria del Estado S.A. - Fiduestado en Liquidación rechazó las reclamaciones presentadas por el Distrito Capital		<p>ART. 2º—El régimen aplicable a la liquidación de la Fiduciaria del Estado S.A., Fiduestado será el previsto en el presente decreto y en las normas del Código de Comercio, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y en las demás disposiciones aplicables. En todo caso, la decisión de disolver y liquidar la Fiduciaria del Estado S.A., Fiduestado conlleva los efectos y la aplicación de medidas que se señalan a continuación:</p> <p>1. La prevención a los deudores de la sociedad en liquidación que sólo pueden pagar al liquidador, advirtiéndole la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta.</p> <p>2. La prevención a todos los que tengan negocios con la sociedad en liquidación, que deben entenderse exclusivamente con el liquidador.</p> <p>3. La advertencia que en adelante, no se podrán iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al liquidador, so pena de nulidad.</p> <p>[...]</p> <p>Para el caso en concreto se establece que el régimen aplicable a la liquidación de Fiduestado es el del Decreto 1717 de 2002 y el Código de Comercio. Además se aplicarán las normas sobre liquidación de entidades financieras cuando sea pertinente.</p> <p>Además es aplicable a la liquidación de negocios fiduciarios</p>	preventivas - Obligaciones	
--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------	--

						<p>el Decreto 2894 de 31 de Julio de 2007 “por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la liquidación de negocios fiduciarios de las sociedades fiduciarias en liquidación”. El artículo 4º de dicho decreto establece el procedimiento que debe seguirse para la liquidación de los negocios fiduciarios.</p> <p>Además se debe tener en consideración el siguiente artículo cuando sea necesaria la cesión de negocios fiduciarios;</p> <p>“ART. 2º—Cesión de negocios fiduciarios. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del acto que ordene la liquidación de la sociedad fiduciaria respectiva, el liquidador deberá realizar gestiones encaminadas a ceder todos los negocios fiduciarios que aún tengan pendiente el plazo de ejecución, cualquiera que sea su clase, sin perjuicio del régimen propio de los contratos estatales. La orden de liquidación de una sociedad fiduciaria generará la terminación y liquidación de cada negocio fiduciario celebrado por dicha entidad, que no haya podido cederse dentro del plazo previsto en el presente artículo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 290 del estatuto orgánico del sistema financiero. [...]”..</p>		
CE 03-04-2014	Mandatario como agente retenedor de los negocios llevados a cabo en	03-04-2014	Pedro Enrique Sarmiento Pérez y César Camilo Cristancho	Aparte del inciso 1º del artículo 29 del Decreto 3050 de 1997, que se subraya	Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia	-Aduce el actor que en caso de haber un mandato sin representación, no se le debe dar la calidad de retenedor al mandatario por cuanto esté en caso del mandato sin representación no actúa en nombre del mandante sino en nombre propio frente al tercero; en ese sentido el aparte demandado trasgrede el Estatuto Tributario teniendo en cuenta que conforme con el artículo 368 (par. 2º) del citado: “Además de los agentes de retención enumerados en este	-Mandato -Agente retenedor. -Retención en la fuente. -Mandato con representación.	NIEGASE LAS SUPPLICAS DE LA DEMANDA. Teniendo en cuenta que todo mandato es representativo, independientemente de las relaciones que tiene el mandatario con los terceros. El aparte demandado no

	nombre del mandante.			a continuación: “ART. 29.— Retención en la fuente en mandato. En los contratos de mandato, incluida la administración delegada el mandatario o practicará al momento del pago o abono en cuenta, todas las retenciones del impuesto	artículo, el Gobierno podrá designar como tales a quienes efectúen el pago o abono en cuenta a nombre o por cuenta de un tercero. En ese sentido, como el mandatario sin representación actúa en nombre propio frente al tercero, este no podría ser llamado a retener. -Recordando que la retención en la fuente no es un impuesto, es solo un medio que facilita, acelera y asegura el recaudo del tributo con fundamento en la ley. De igual forma, este mecanismo busca vincular a los particulares en la gestión tributaria, imponiéndoles un deber de colaboración que se concreta en las siguientes obligaciones: 1. Practicar las retenciones a que haya lugar (E.T., art. 375). 2. Expedir a los beneficiarios de los pagos, los correspondientes certificados donde consten las retenciones practicadas (E.T., arts. 378 y 381). 3. Presentar las declaraciones mensuales de retención en la fuente (E.T., art. 375). 4. Consignar las retenciones en las entidades autorizadas para recaudar y dentro de los plazos fijados (E.T., art. 376). Ya teniendo claras las obligaciones del agente retenedor, se debe delimitar sobre quien recaen estas obligaciones. Así la corte afirma que <i>“La retención en la fuente debe ser practicada por los denominados “agentes de retención”</i>	-Mandato sin representación. -Mandatario como agente retenedor	vulnera el Estatuto Tributario y por tanto, los mandatarios se consideran agentes retenedores, hecho para el cual necesariamente deben tener en cuenta la calidad de la persona en cuyo beneficio actúan y no su propia calidad, pues frente al mandante no actúan en nombre propio.
--	----------------------	--	--	--	---	---	--

				<p>sobre la renta, ventas, y timbre establecidas en las normas vigentes, teniendo en cuenta para el efecto la calidad del mandante . Así mismo, cumplirá todas las obligaciones inherentes al agente retenedor.</p>	<p><i>quienes al detraer una suma determinada en la ley o en el reglamento, actúan a nombre del Estado como recaudadores iniciales respecto a los ingresos sometidos al impuesto</i>”. De ahí que se afirme que son agentes de retención quienes por sus funciones intervengan en actos u operaciones en las cuales por mandato de la ley deben practicar retención en la fuente o percepción del tributo. Las siguientes normas, por ejemplo, señalan quiénes son agentes de retención.</p> <p>Con respecto al contrato de mandato, conforme con el artículo 368 (par. 2º) del estatuto tributario: “Además de los agentes de retención enumerados en este artículo, el Gobierno podrá designar como tales a quienes efectúen el pago o abono en cuenta a nombre o por cuenta de un tercero o en su calidad de financiadores de la respectiva operación, aunque no intervengan directamente en la transacción que da lugar al impuesto objeto de la retención” (resalta la Sala).</p> <p>Bajo esta perspectiva:</p> <p>-Recordando la doctrina y la jurisprudencia al respecto de la naturaleza o no representativa del mandato hay que recordar que en el mandato según la citada, siempre hay representación, solo que hay ocasiones en que el mandatario actúa frente al tercero sin descubrir su calidad de tal, sin que ello haga desaparecer los efectos y cumplimiento del mandato, de suerte que al contratar lo hace en su propio nombre, y frente al mandante está</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>cumpliendo con la obligación que se deriva del contrato de mandato, cual es la de hacer uno o varios negocios jurídicos en su nombre.</p> <p>Cosa distinta es que frente al tercero los efectos del acto jurídico realizado se consideren como propios del mandatario, ya que a este no se le puede exigir que conozca, de antemano la calidad o condición en la que actúa la persona con quien celebra el negocio. De allí que siempre haya representación, mirada con relación al mandante y al mandatario y no respecto de los terceros.</p> <p>Considerando entonces que el mandatario siempre actúa en representación del mandatario, sin perjuicio de los efectos frente a los terceros que solo pueden oponer acciones contra el mandatario ya que dicho contrato no les es oponible; considera el H. Concejo de Estado que el Gobierno Nacional ejerció la facultad reglamentaria dentro del marco de la ley que reglamentó, se ajustó a su contenido y alcance y en consecuencia, la Sala no encuentra razón para anular la disposición demandada, por lo que se negarán las pretensiones de la parte demandante.</p> <p>- En ese sentido, el artículo 29 del Decreto 3050 de 1997 reglamenta cabalmente el artículo 368 parágrafo 2º del estatuto tributario, dado que dicha norma superior faculta al Gobierno Nacional para fijar como agentes de retención a “quienes efectúen pagos o abonos en cuenta a nombre o por cuenta de un tercero”, que son</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

						exactamente los mandatarios, para lo cual necesariamente deben tener en cuenta la calidad de la persona en cuyo beneficio actúan y no su propia calidad, pues frente al mandante no actúan en nombre propio.		
CE 15-05-2014	Derechos fiduciarios frente al Impuesto de Industria y Comercio.	15-05-2014	Municipio de Medellín	Municipio de Medellín - Impuesto de Industria y Comercio 2002	Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia	<p>-La Sala decide sobre la legalidad de los actos por los cuales el municipio de Medellín modificó la declaración privada del impuesto de industria y comercio que la actora presentó por el año gravable 2002 e impuso sanción por no informar.</p> <p>En concreto, precisa si el hecho de no aportar con la demanda, copia de las normas locales es razón suficiente para negar las pretensiones de la demanda. En caso negativo, determina si procedía la adición de ingresos y la consiguiente sanción por inexactitud, al igual que la sanción por no informar.</p> <p>En el caso en estudio, el tribunal negó las pretensiones de la demanda, porque la actora no aportó las normas locales que invocó como violadas. Esta decisión desconoce los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la actora, al igual que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.</p> <p>Para reivindicar los derechos desconocidos a la actora y garantizar el debido proceso de las partes, por auto de 14 de marzo de 2014 se ordenó a la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Medellín remitir copia auténtica del Estatuto Tributario de Medellín vigente para la época de los hechos y</p>	<p>-Impuesto de industria y comercio.</p> <p>-ICA</p> <p>-Derechos fiduciarios</p> <p>-Prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.</p> <p>-Notificación a persona distinta del representante legal.</p> <p>-Fiducia Mercantil.</p> <p>-Patrimonio Autonomo.</p>	<p>1. DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL de la liquidación de revisión 662 de 2 de febrero de 2005 y de la Resolución SH 17-206 de 18 de mayo de 2005, actos por los cuales el municipio de Medellín modificó la declaración del impuesto de industria y comercio presentada por la actora por el año gravable 2002 y le impuso sanción por no informar.</p> <p>2. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE la firmeza de la declaración del impuesto de industria y comercio que la actora presentó por el año 2002 en el municipio de Medellín y que la actora está obligada a pagar la sanción por no informar impuesta en los actos demandados por \$</p>

					<p>bajo esas normas dictar sentencia.</p> <p>-En relación a la adición de ingresos, luego de hacer ciertas precisiones sobre la causación del ICA y la porción correspondiente al municipio de Medellín, la el H. Concejo de estado entra al estudio de la presunta omisión por parte del demandado ingresos por la venta de inmuebles, pues en la contabilidad registró derechos fiduciarios sobre fideicomisos constituidos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Medellín y Envigado.</p> <p>Recordando la naturaleza jurídica de la fiducia mercantil y teniendo en cuenta que los bienes fideicomitados se mantienen separados del resto del activo del fiduciario y de los que corresponden a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad señalada en el acto constitutivo; el fideicomitente o constituyente entonces, en virtud de la celebración del contrato de fiducia, adquiere derechos fiduciarios que son bienes inmateriales que representan la participación de éste en el patrimonio autónomo.</p> <p>En la contabilidad, los derechos fiduciarios se registran en el activo (1), en el grupo de inversiones (12) y en la cuenta 1245 - derechos fiduciarios que, según el PUC para comerciantes, tiene la siguiente descripción:</p> <p>“Registra el valor de los bienes entregados con el propósito de cumplir una finalidad específica, bien sea en beneficio del fideicomitente o de un tercero en calidad de fideicomiso de inversión”.</p>	<p>3.006.070.</p> <p>Lo anterior teniendo en cuenta que, en razón del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, aunque al juez no se le hayan aportado la normativa tributaria del municipio de Medellín, este no debe ampararse en ello para desestimar las pretensiones y por el contrario debe usar sus poderes procesales para la consecución de los derechos sustanciales que corresponden a cada parte.</p> <p>De igual manera, frente al gravamen del ICA frente a los derechos fiduciarios, se precisa que estos no constituyen una especie de ingresos o utilidades sino que solo representan los derechos que tienen sobre un patrimonio autónomo destinado a una finalidad específica, en este sentido, no pueden ser grabados con el</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>Así, los derechos fiduciarios son bienes intangibles que forman parte del patrimonio del contribuyente y el hecho de que figuren en la contabilidad no significa que el fideicomitente haya percibido algún ingreso asociado al fideicomiso.</p> <p>En el presente caso, el municipio de Medellín sostiene que la actora no declaró ingresos por la venta de inmuebles de los fideicomisos “Castillo de la Castellana” y “Laureles”.</p> <p>Considerando lo anterior, los derechos fiduciarios no constituyen <i>per se</i> un ingreso asociado al contrato de fiducia mercantil, por lo que no puede grabarse su valor ni mucho menos los ingresos percibido por el patrimonio autónomo en razón de dichos bienes sino en la medida que el contrato sea liquidado y el fideicomitente reciba cierta utilidad o ingresos en razón de sus derechos fiduciarios. Es decir, el ICA no puede grabar los derechos fiduciarios ni mucho menos los ingresos percibidos por el Patrimonio Autónomo, mas si puede gravar los ingresos que el fideicomitente, en su calidad de beneficiario ha llegado a percibir.</p> <p>-En relación con la sanción impuesta por el municipio de Medellín a la demandante, este aduce que no fue notificada del oficio de requerimiento ordinario ya que, si bien la notificación fue enviada a su dirección, esta no fue entregada a quien sea o haya sido su representante legal.</p> <p>En sentencia de 13 de septiembre de 2012, expediente 18473, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, la Sala</p>		<p>ICA por el simplemente hecho de ser derechos fiduciarios, ni mucho menos grabarse las operaciones que lleva a cabo el Patrimonio Autónomo; en este sentido, solo podrán gravarse las utilidades o ingresos que <i>realmente</i> adquiera el constituyente, fruto de la liquidación parcial o total del contrato de fiducia.</p> <p>Con respeto a la falta de notificación del requerimiento ordinario hecho por el municipio de Medellín al demandante, el alto tribunal sostiene que son validas las notificaciones entregadas en la dirección suministrada por el contribuyente así se hagan a personas distintas de los representantes legales de las sociedades contribuyente. Lo anterior en razón de que se presume que la entrega a alguien que se encuentra en la dirección suministrada por el contribuyente tiene algún tipo de vínculo con quienes</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>analizó si tenía validez la notificación por correo practicada mediante la entrega del acto en la dirección correcta, pero a una persona que supuestamente era desconocida por el interesado esto pues, el hecho de entregar la notificación a alguien que se encuentra en la dirección dada por el contribuyente, permite presumir que tiene algún tipo de vínculo con quienes regularmente habitan en ese lugar.</p> <p>Dicha presunción que cobra aún más fuerza tratándose de sociedades debidamente inscritas y dotadas de toda una estructura organizacional en las que los representantes legales no son siempre las persona encargadas de atender al público en general. Con lo anterior quiere significarse que son válidas las entregas a personas distintas de los representantes legales de las sociedades contribuyentes, sin perjuicio de que éstas puedan demostrar la inexistencia de relación alguna con el receptor del correo y, por esa vía, desvirtuar la presunción de la que se viene hablando.</p>		<p>regularmente habitan en ese lugar, lo anterior sin perjuicio de que éstas puedan demostrar la inexistencia de relación alguna con el receptor del correo y, por esa vía, desvirtuar la presunción de la que se viene hablando. En ese sentido, al no haber falta de notificación, se mantiene la sanción.</p>
CE 21-08-2014	ICA sobre actividades realizadas mediante patrimonios autónomos.	21-08-2014	Clara Leal Torres	ACUERD O 017 DE 2005 (30 de noviembre) CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL	JORGE OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ	<p>El texto demandado reza: el texto atacado: <i>“Para los efectos del impuesto de industria y comercio que se originen en relación con actividades radicados o realizados (sic) a través de patrimonios autónomos constituidos en virtud de fiducia mercantil, será responsable en el pago de impuestos, intereses, sanciones y actualizaciones derivados de las obligaciones tributarias de los bienes o actividades del patrimonio autónomo el fideicomitente o titular de los derechos fiduciarios. La responsabilidad por las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones formales, la</i></p>	<p>-ICA -Patrimonio autónomo - Fideicomitent e -Derechos Fiduciarios. -Ley 14 de 1983</p>	NIEGA LA NULIDAD en razón de que las normas demandadas interpretadas en su contexto no crean un nuevo sujeto pasivo del ICA (patrimonio autónomo) ya que solo tienen como objeto grabar a los titulares de los derechos fiduciarios.

				(CASANA RE) - ARTICULO 8 PARAGRAFO 2 (No anulado) / DECRETO 100-24-0002 DE 2006 (4 de enero) ALCALDE DE YOPAL (CASANA RE) - ARTICULO 54 PARAGRAFO 2 (No anulado)	<p><i>afectación de los recursos del patrimonio al pago de los impuestos y sanciones de los beneficiarios se regirá por lo previsto en el artículo 102 del Estatuto Tributario Nacional”.</i></p> <p>- Aunque los patrimonios autónomos, en vigencia de la Ley 14 de 1983, no son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio, ya que no tienen la calidad de personas ni de sociedades de hecho, pues son, como su nombre lo indica, un conjunto de bienes que no están vinculados a un sujeto de derecho. El H. Consejo de estado afirma que, las disposiciones acusadas <u>no crearon</u> un nuevo sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio: los patrimonios autónomos.</p> <p>Si bien en la sentencia del 5 de febrero de 2009, esta Sección confirmó la sentencia que declaró la nulidad de una norma similar a la que se demanda en el presente proceso, en esta oportunidad la Sala precisa el criterio sostenido en dicha providencia, ya que una lectura contextual de las normas permite concluir que lo que pretende el ente territorial es que la obligación por el pago del impuesto de industria y comercio por las actividades realizadas por los patrimonios autónomos que sean susceptibles de ser gravadas con dicho impuesto, se radique en el fideicomitente o titular de los derechos fiduciarios, por lo que en esas condiciones la norma se ajusta a la legalidad. En otras palabras, las disposiciones demandadas no gravan al patrimonio autónomo, sino a las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho fideicomitentes o titulares de los derechos fiduciarios, que sí pueden ser</p>	-Ley 1430 de 2010	
--	--	--	--	--	--	-------------------	--

						<p>sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio en razón de su personalidad jurídica y previsión legal (Art. 54 Ley 1430 de 2010).</p> <p>Reitera el Conejo de Estado que, toda vez que el fideicomitente puede llegar a ser sujeto pasivo del impuesto si en él se “configura el hecho gravado”, conforme lo prevé la Ley 1430. De allí que deba declararse la validez de la norma local, condicionada a que será el fideicomitente o el titular de los derechos fiduciarios el sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, si en él se configura el hecho gravado y siempre que realice actividades industriales, comerciales o de servicios a través de patrimonios autónomos.</p>		
<p>CE Auto: 25000- 23-27- 000- 2007- 00210- 01 [19913]</p>	<p>Responsabi lidad fiscal de los Patrimonios Autónomos y su administrad or.</p>	<p>28-08- 2014</p>	<p>FIDUCIA RIA DE OCCIDEN TE S.A.</p>	<p>DISTRITO CAPITAL</p>	<p>MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCI A</p>	<p><i>“La obligación de pago de los impuestos prediales objeto del procedimiento de cobro, se debe hacer con los recursos de los patrimonios autónomos y no con los de la fiduciaria que actúa como vocera de los patrimonios autónomos a los cuales están vinculados los bienes inmuebles.”</i></p>	<p>-Patrimonio autónomo. - Responsabili dad fiscal. -Fiduciario. -Impuesto predial.</p>	<p>NIÉGASE la solicitud de aclaración de la sentencia del 7 de mayo de 2014, formulada por la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. ya que la sentencia es clara en que “La obligación de pago de los impuestos prediales objeto del procedimiento de cobro, se debe hacer con los recursos de los patrimonios autónomos y no con los de la fiduciaria que actúa como vocera de los patrimonios autónomos a los cuales están vinculados los bienes</p>

								<i>inmuebles.”</i>
C.E Rad. 11001- 03-06- 000- 2015- 00129- 00(2264) del 27/08/20 15	Procesos de contratación estatal del fondo de adaptación y sus consecuenc ias	27/08/20 15	Ministerio de Hacienda	Consulta sobre las Consecue ncias en contratació n estatal del fondo de adaptación de las condenas, medidas de asegurami ento e investigaci ones que las autoridade s de un país extranjero impusiese n contra una persona jurídica extranjera	Álvaro Namén Vargas	<p>-Modalidades de selección al fondo de adaptación:</p> <p>a) Invitación abierta: invitación publica cuando monto de la contratación es igual o superior a 132,000 smmlv.</p> <p>B) Invitación cerrada: “se invitan 2 oferentes que cumplan con requisitos financieros, de organización y experiencia específica cuando el monto sea superior a 1.000 smmlv e inferior a 132.000smmlv”.</p> <p>c) Contratación Directa: “cuantía igual o inferior a 1.000 smmlv , actividades tecnológicas o científicas, prestación de servicios, consultoría, arrendamiento, comodato, adquisición de inmuebles”.</p> <p>-Los contratos de fondo adaptación son contratos estatales, porque este fondo es un establecimiento público adscrito al ministerio de Hacienda y crédito público. La contratación con esta entidad debe regirse por los principios de igualdad, selección objetiva, buena fe, planeación, análisis de riesgos, calidad, economía, transparencia, publicidad y equidad.</p> <p>-Son previsibles los riesgos de corrupción en contratación estatal y las entidades deben gestionarlo en torno a las disposiciones aplicables de la ley 1150.</p> <p>-En contratación estatal el riesgo financiero debe ser asignado en su totalidad al inversionista privado o contratista.</p>	<p>-Fondo de adaptación</p> <p>-Contratación estatal</p> <p>-Inhabilidades en contratación estatal</p> <p>- Incompatibilidades en contratación estatal</p> <p>-Delitos en el extranjero</p> <p>-Invitación abierta</p> <p>-Invitación cerrada</p> <p>-Contratación directa</p>	

				<p>, su representante legal, miembros de junta directiva o socios por la comisión de delitos en el extranjero contra la administración pública, soborno transnacional o infracciones disciplinarias o fiscales,</p>	<p>-“La contratación estatal está limitada para aquellos sujetos que indique la constitución política en su artículo 122, y del artículo 8 de la ley 80 de 1993,pues estas normas regulan prohibiciones de realizar contratos estatales a ciertos sujetos que por su calidad o posición son inhábiles o incompatibles”.</p> <p>-“El fondo Adaptación se encuentra sometido al régimen de inhabilidades e incompatibilidades comprendido en el estatuto general de contratación de la administración publica”.</p> <p>-“La inhabilidad prevista en el artículo 8 de la ley 80 de 1993 aun después de la modificación del texto realizada en el artículo 1 de la ley 1474 de 2011 se presenta no solo cuando los jueces nacionales declaran la responsabilidad penal por la comisión de delitos contra la administración pública o el soborno transnacional sino también cuando la responsabilidad por los mismos delitos es declarada por jueces extranjeros por conductas cometidas total o parcialmente en el exterior”.</p> <p>-Las causales de inhabilidad consagradas en el artículo 58 de la ley 80 se refieren en principio a situaciones ocurridas en el país y que solo tienen efectos dentro de las fronteras nacionales a menos que la ley extranjera o los tratados internacionales les otorguen otros efectos.</p> <p>-Excepcionalmente las 2 primeras causales del artículo 58 de la ley 80 pueden presentarse cuando la medida de aseguramiento en firme o la condena ejecutoriada sea</p>	<p>-Riesgo financiero</p>	
--	--	--	--	---	--	---------------------------	--

						<p>dictada por un juez extranjero siempre que la persona condenada o investigada sea por hechos ilícitos relacionados con sus actuaciones contractuales frente al estado colombiano.</p> <p>-Las medidas del artículo 34 de la ley 1474 de 2011 solo pueden ser impuestas por un juez colombiano en un proceso dentro del país.</p>		
<p>Sentencia C.E Rad. 7300123 3100020 1100216 01 (44386) de 23/09/2015</p>	<p>Debido proceso en contratación estatal</p>	<p>23/09/2015</p>	<p>Compañía mundial de seguros S.A</p>	<p>Recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el trece (13) de abril de dos mil doce (2012), mediante la cual se dispuso:</p>	<p>Hernán Andrade Rincón</p>	<p>-El debido proceso en contratación estatal es un requisito ineludible e indispensable y debe estar presente en todas las actuaciones administrativas adelantadas por las entidades estatales “así estas se hubieran adelantado con anterioridad a la expedición de la ley 1150 de 2007 modificatoria del estatuto de contratación estatal, la cual incorporo expresamente el debido proceso como principio rector en materia sancionatoria en las actuaciones contractuales”.</p> <p>-También el Consejo de Estado ha afirmado en diversas ocasiones que el Debido Proceso es un principio que debe imperar en todas las actuaciones y procedimientos que adelante la administración publica en el ámbito contractual, tanto de los tramitados con fines sancionatorios o de aquellos que no persiguen ese objetivo.</p> <p>-“Compañías aseguradoras a través de expedir una póliza de cumplimiento garantizan la observancia de las obligaciones a cargo de su afianzado y son las llamadas a responder patrimonialmente si se materializa el siniestro contenido en los amparos que cubre la garantía única”. Es por esto que, pese a que la aseguradora no se configura como contratista,</p>	<p>--Debido proceso</p> <p>-Derecho a la defensa</p> <p>-Obligaciones del afianzado</p> <p>-Contratación estatal</p> <p>-Cesión de contrato</p> <p>- Aseguradoras</p> <p>-Amparos en garantía única</p>	<p>“REVOCAR la sentencia proferida el trece (13) de abril de dos mil doce (2012) por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo y en su lugar se dispone:</p> <p>PRIMERO: Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. 01547 del 20 de abril de 2010 por la cual el INVIAS declaró la ocurrencia del siniestro en el Amparo del Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo del Contrato de Obra No. 3673 y en la Resolución No. 3176 del 16 de julio de 2010 por el cual el INVIAS resolvió el recurso de reposición interpuesto por</p>

				<p>“PRIMER O: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”</p>	<p>tiene todo el derecho al debido proceso y a conocer los cargos que se le imputan para ejercer su Derecho de defensa de manera optima, solicitando pruebas o contravirtiendo hechos.</p> <p>-En el caso en específico, se le violó el debido proceso a la aseguradora accionante con la expedición del acto administrativo contenido en la Resolución No. 01547 del 20 de abril de 2010 donde se daba la declaratoria de ocurrencia del siniestro, pues nunca se vinculó a la aseguradora para que ejerciera su Derecho de Contradicción. La sola notificación de este acto a la aseguradora no agota el debido proceso.</p> <p>-La sala precisa que la entidad, antes de emitir la ante citada resolución debió: <i>“ofrecer al interesado todas las oportunidades y herramientas para ejercer plenamente y en debida forma su cabal defensa, tales como ponerlo al tanto de los hechos que se le imputan, correrle traslado de las pruebas que en su contra se pretenden hacer valer, permitirle que aporte y/o solicite el decreto y la práctica de pruebas tendientes a controvertir los cargos de los que se le acusa. Sólo en cuanto se agotare lo expuesto habría lugar a proferir la decisión que en el futuro será susceptible del correspondiente recurso de en sede administrativa”.</i></p> <p>-En este caso además, se había presentado una cesión de contrato que no había sido notificada a la compañía aseguradora por cuanto se encontraba imposibilitada de asegurar la no ocurrencia del siniestro y con mayor razón,</p>	<p>-Observancia de obligaciones de afianzado por parte de la aseguradora.</p> <p>-Póliza de cumplimiento</p>	<p><i>la Compañía Mundial de Seguros S.A. contra la declaratoria de ocurrencia del siniestro, confirmándola en su integridad, por las razones que quedaron expuestas en la parte motiva de esta providencia.</i></p> <p>SEGUNDO: <i>En consecuencia se dispone que la Compañía Mundial de Seguros S.A. no debe pagar suma alguna al INVIAS por concepto de ocurrencia del riesgo en el amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato No. 03763, derivado de la declaratoria del siniestro que en esta providencia se anula.</i></p> <p>TERCERO.- <i>NEGAR las demás pretensiones de la demanda.</i></p> <p>CUARTO: <i>Sin condena en costas.”</i></p> <p>En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

						debía ser llamada a concurrir a la actuación previa a la emisión de la resolución, para poder conocer los cargos que se le imputaban y ejercer su derecho a la defensa.		COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE”
Consejo de Estado – Sala de lo contencioso Administrativo. Radicación número: 25000-23-27-000-2012-00613-01(21068)	- Cesión de contrato. - Tributos.	04-11-2015.	ORTIZ CONSTR UCTORES Y PROYECTOS S.A. Y CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A	Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN Liquidaciones privadas	Martha Teresa Briceño De Valencia.	conforme con la manifestación de voluntad efectuada por los representantes legales de las sociedades integrantes del CONSORCIO VÍAS DEL DISTRITO NIT 900.353.281 en el documento Contrato de Cesión de fecha 19 de abril de 2010, el CONSORCIO VÍAS DEL DISTRITO NIT 900.353.281 está llamado a responder solidariamente con la UNIÓN TEMPORAL VÍAS DE BOGOTÁ 2009 NIT 900.258.788, por las obligaciones tributarias surgidas en desarrollo del contrato IDU 72 DE 2008, conforme con el artículo 793 literal f) del Estatuto Tributario que señala: <i>“Responden con el contribuyente por el pago del tributo: (...) f) Adicionado L.6ª/92, art. 82. Los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del deudor.”</i>		PRIMERO. - LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor de la Nación y a cargo del CONSORCIO VÍAS DEL DISTRITO 2009 NIT 900.353.281, en calidad de deudor solidario de la UNIÓN TEMPORAL VÍAS DE BOGOTÁ 2009 NIT 900.258.788, por las siguientes obligaciones tributarias: Más los intereses que se causen desde el momento en que se hicieron exigibles y hasta cuando sean cancelados en su totalidad, mas costas del presente proceso conforme los artículos 634, 635 y 836-1 del Estatuto Tributario. [...]» En consecuencia, no existe

								título ejecutivo complejo y en este asunto la DIAN no está cobrando obligación alguna proveniente del contrato IDU 072 DE 2008, como erróneamente lo plantea la demandante.
Sentencia C.E Rad. 1300123 3300020 1200153 01 (20703) del 18/02/2016	Impuesto de Industria y Comercio	18/02/2016	Giros y finanzas compañía de financiamiento S.A	Apelación contra la sentencia del 9 de agosto de 2013 que declaro la nulidad de la Resolución No. 71 del 26 de abril de 2011, por medio de la cual se expide una Liquidación Oficial de Revisión y se impone	Martha Teresa Briceño de Valencia	<p>El artículo 32 de la ley 14 de 1983, establece los sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio así: "el impuesto de Industria y Comercio recae, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos".</p> <p>-La base Gravable para las entidades financieras no son los ingresos brutos, son los ingresos operacionales anuales (comisiones, intereses, ingresos varios).</p> <p>-“Los ingresos operacionales de las entidades financieras se entenderán realizados en el municipio donde opere la principal, sucursal, agencia u oficinas abiertas al público, por eso las entidades financieras deberán comunicar a la Superintendencia Financiera, el movimiento de sus operaciones discriminadas por las principales, sucursales, agencias u oficinas abiertas al público que operen en los municipios".</p> <p>-“Corresponde a los Concejos Municipales la definición de la</p>	<p>-Base gravable ICA</p> <p>-Impuesto Sector financiero</p> <p>-ingresos operacionales</p> <p>-Industria y comercio</p> <p>-Entidades financieras</p> <p>- Superintendencias financieras</p>	<p>“ADICIÓNASE el numeral primero de la parte resolutive de la sentencia apelada, que queda así:</p> <p>DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 71 de 26 de abril de 2011 y AMC-RES-000653-2012 de 3 de mayo de 2012, por las cuales el Distrito de Cartagena profirió a la actora liquidación oficial de revisión del impuesto de industria y comercio por el año gravable 2008.</p> <p>A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE la firmeza de la declaración de corrección de ICA presentada por la actora el 23 de junio de 2011.</p>

				una sanción al contribuyente. Y la resolución No. AMC-RES-000653-2012 del 3 de mayo de 2012		base impositiva del impuesto de industria y comercio aplicable”. -“Para excluir de la base gravable de ICA los ingresos obtenidos por fuera del Distrito donde opere la principal oficina, agencia o sucursal, el contribuyente debe probar que dichos ingresos fueron declarados en otros municipios”.		En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada”.
Sentencia C.E Rad. 1100103 2400020 0900048 00 (17645) del 25 /02/2016	Sanción con amonestación por divulgación extemporánea de información eventual al Mercado Público de Valores	25/02/2016	Luis Fernando Vergara Munarriz como representante legal de la sociedad Cementos Argos S.A (antes cementos del caribe S.A)	Nulidad de la Resolución N°. 1336 del 1 de agosto de 2007 proferida por el Superintendente Delegado para Emisores, Portafolio de Inversión y Otros Agentes,	Carmen Teresa Ortiz	- Por mandato constitucional la actividad financiera, bursátil y aseguradora es una actividad de interés público que solo puede ser ejercida con autorización del estado en los términos previstos por ley. -“El congreso tiene la facultad para regular la actividad financiera, bursátil y aseguradora”. Así mismo, el presidente de la república está revestido constitucionalmente de los deberes de inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen el tipo de actividades anteriormente enunciadas -L”a Superintendencia financiera creada por el decreto 4327 de 2005 con el fin de que esta entidad se encargue de supervisar el sistema financiero en Colombia para preservar su estabilidad, seguridad y confianza y promover, desarrollar y organizar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y aseguradores”.	-Actividad financiera -Actividad bursátil -Actividad aseguradora - Superintendencia Financiera -Mercado de valores -Sistema integral de	“Primero: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase”.

				<p>mediante la cual se sancionó al doctor Luis Fernando Vergara Munarriz con amonestación y de la Resolución N°. 1326 del 19 de agosto de 2008 proferida por el Superintendente Financiero, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N°. 1336</p>	<p>-La sala reitera los conceptos sobre los que se debe dilucidar el caso de la siguiente manera: “El Sistema Integral de Información del Mercado de Valores, SIMEV, es el conjunto de recursos humanos, técnicos y de gestión que utilizará la Superintendencia Financiera para permitir y facilitar el suministro de información al mercado y estará compuesto por el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE, el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores – RNAMV y el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores – RNPMV.”</p> <p>-“Los representantes legales de los emisores de valores serán responsables del establecimiento y mantenimiento de adecuados sistemas de revelación y control de la información financiera, para lo cual deberán diseñar procedimientos de control y revelación y asegurar que la información financiera les es presentada en forma adecuada” y “deberán verificar la operatividad de los controles establecidos al interior del correspondiente emisor de valores. El informe a la asamblea general de accionistas deberá contener la evaluación sobre el desempeño de los mencionados sistemas de revelación y control” y también son responsables de presentar ante el comité de auditoría, el revisor fiscal y la junta directiva todas las deficiencias significativas presentadas en el diseño y operación de los controles internos que hubieran impedido a la sociedad registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente la información financiera de la misma”</p> <p>-La responsabilidad por el envío de la información relevante</p>	<p>información del mercado de valores</p> <p>- Registro Nacional de Valores y Emisores</p> <p>- Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores</p> <p>-Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores</p> <p>-Emisores de valores</p> <p>-Información financiera</p> <p>-Revisor fiscal</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

				del 1 de agosto de 2007.		<p>corresponde al representante legal de la entidad emisora.</p> <p>-La resolución 400 de 1995 afirmo que “entidades cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y los agentes de manejo de procesos de titularización deberán divulgar como información eventual, en forma veraz, clara, suficiente y oportuna, tanto a la Superintendencia de Valores como a las bolsas donde tengan inscritos sus valores a cotización y a los sistemas centralizados de negociación donde dichos valores se negocien, todo hecho relevante u operación o acto extraordinario o significativo respecto del mismo emisor, sus negocios, los valores registrados y/o la oferta al mercado de dichos valores..”</p> <p>-“Constituye una infracción a las normas que regulan el mercado de valores y sancionable administrativamente no divulgar en forma veraz, oportuna, completa o suficiente la información que pueda afectar las decisiones de los accionistas en la respectiva asamblea u omitir el deber de informar sobre participaciones de capital y sobre movimientos de compra, venta o disposición de acciones”.</p>	- Responsabilidad por envío de información	
Sentencia C.E Rad. 2500023 3700020 1200021 01	Base Gravable para entidades del sector financiero	02/03/2016	Banco de Occidente S.A	Recurso de apelación contra la sentencia del 8 de	Martha Teresa Briceño	<p>- La ley 14 de 1983 en su articulo 42 estableció una base gravable especial para entidades del sector financiero, dentro de este están los bancos, el mencionado articulo dispone:</p> <p>“Artículo 42°.- La base impositiva para la cuantificación del impuesto regulado en la presente Ley se establecerá por los Concejos Municipales o por el Concejo del Distrito Especial</p>	<p>- Responsabilidad tributaria</p> <p>-ICA</p> <p>-Base</p>	<p>“REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar dispone: ANÚLANSE los actos demandados solo en cuanto modificaron la declaración del ICA del bimestre 1 de 2008, presentada por la actora.</p>

(20266) 02/003/2 016			mayo de 2013 del Tribunal Administra tivo de Cundinam arca, que accedió a las súplicas de la demanda. La parte resolutiva del fallo apelado dispuso lo siguiente: “PRIMER O. DECLÁRE SE la nulidad de las Resolucion es Nos. 1591DDI2 71362 del	de Bogotá, de la siguiente manera: 1. Para los Bancos, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros: a. Cambios posición y certificado de cambio b. Comisiones de operación en moneda nacional de operaciones en moneda extranjera c. Intereses de operaciones con entidades públicas, de operaciones en moneda nacional, de operaciones en moneda extranjera. d. Rendimientos de inversiones de la Sección de Ahorros. e. Ingresos varios. f. Ingresos en operaciones con tarjetas de crédito. [...] -Con base a lo dispuesto anteriormente, la sala reitera que “La base gravable del ICA para las instituciones financieras está constituida por los ingresos operacionales que estas obtengan, como lo establece el artículo 42 de la Ley 14 de 1983”. Para cuantificar el monto se deben tener en cuenta los ingresos operacionales y no los ingresos brutos. -La sala dispone que de conformidad el artículo 101 del Decreto 807 de 1993, y el artículo 647 del Estatuto Tributario, “una de las inexactitudes sancionables en las declaraciones tributarias es la omisión de ingresos de la cual se derive un menor impuesto o saldo a pagar”.	gravable para entidades financieras - Requerimient o especial -Declaración de corrección -Impuestos entidades financieras -Firmeza de declaración tributaria -Dirección distrital de impuestos	A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE la firmeza de la declaración ICA del bimestre 1 de 2008, presentada por la actora. <i>En lo demás, NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.</i> No procede la condena en costas. Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase”.
----------------------------	--	--	---	---	--	--

				<p>10 de diciembre de 2010, y DDDDI 005662 del 28 de febrero de 2012, proferidas por la Secretaría de Hacienda Distrital, por medio de las cuales se profirió liquidación oficial de revisión del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros respecto de los</p>	<p>-El decreto distrital 807 de 1993, en su artículo 24 se refiere a la firmeza de las declaraciones, y estipula que esta quedara en firme "...si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. "También quedará en firme la declaración tributaria si vencido el término para practicar la liquidación se revisión, esta no se notificó"</p> <p>-Respecto del termino para notificar el requerimiento especial, el artículo 705 del estatuto tributario lo determina así: "...deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva".</p> <p>-“La Dirección Distrital de Impuestos puede emplazar a los contribuyentes para que corrijan sus declaraciones o para que cumplan la obligación de declarar”.</p> <p>-La sala precisa que el emplazamiento para corregir es acto</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--

			<p>bimestres 1 a 5 del año gravable 2008 al banco de Occidente S.A. y se confirmó, respectivamente de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.</p> <p>SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho DECLÁRESE la</p>	<p>facultativo de la autoridad tributaria en el cual invita al contribuyente a corregir la declaración cuando advierte que hay indicios de que esta tiene alguna inexactitud.</p> <p>-Si la declaración tributaria obligatoria es oportuna, el término para notificar el requerimiento especial es de dos años, contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Si el requerimiento no se notifica en ese lapso, la declaración queda en firme y no puede ser modificada por la autoridad tributaria.</p> <p>-Pero la sala también reitera que hay una excepción a los términos de firmeza, y es la siguiente: “La ley tributaria permite que el término de firmeza de la declaración se suspenda por 3 meses cuando se notifica el auto que ordena la inspección tributaria y por un mes cuando se notifica el emplazamiento para corregir”.</p> <p>-Si se notifica el emplazamiento para corregir durante o después de la inspección tributaria, no suspende nuevamente el término para notificar el requerimiento especial, pues esto no tendría coherencia jurídica alguna.</p> <p>-La presentación de la declaración de corrección no amplía el término para notificar el requerimiento especial.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				firmeza de las correcciones de las liquidaciones privadas del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros correspondientes a los bimestres 1º a 5º del año gravable 2008 presentadas por el Banco de Occidente S.A. el 27 de noviembre de 2009.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				TERCERO : No se condena en costas por no aparecer probadas [...]”				
Sentencia C.E 2500023 2700020 1100053 01 (19972)de 10/03/2016	Cobro Activo	10/03/2016	Alianza Fiduciaria S.A	Recurso de Apelación contra la sentencia del 19 de Octubre de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que decidió: << PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de	Hugo Fernando Bastidas	<p>- No se deben confundir las obligaciones tributarias que tiene el Fideicomitente con las que pueda contraer el fiduciario por realizar hechos generadores de una obligación tributaria, las normas mercantiles han establecido una clara diferencia entre los patrimonios del Fideicomitente, la fiduciaria y el Fideicomiso.</p> <p>-“Fiducia Mercantil supone una transferencia de bienes por parte de un constituyente para que con estos se cumpla una finalidad específica y previamente determinada. Los bienes transferidos se constituyen como Patrimonio Autónomo, y estos bienes Fideicomitados se deben separar de el resto del activo de una fiduciaria”.</p> <p>-El impuesto predial, aplicable al caso según la ocurrencia de los hechos esta delimitado por el Decreto Distrital 807 de 1993. Específicamente en su artículo 11-1 adicionado por el artículo 6 del Decreto 401 de 1999, se disponen las obligaciones tributarias de los patrimonios autónomos. Al respecto la norma afirma:</p> <p>“Artículo 6º.-Cumplimiento de las Obligaciones de los</p>	<p>-Excepción de falta de Título Ejecutivo</p> <p>-Impuesto predial</p> <p>- Subsidiariedad del beneficiario</p> <p>- Mandamiento de pago</p> <p>-Patrimonios autónomos</p> <p>-Obligaciones tributarias de</p>	<p>“PRIMERO. REVOCANSE los numerales segundo y tercero de la sentencia apelada. En su lugar, se dispone:</p> <p>SEGUNDO. DECLARAR probada la excepción de falta de título ejecutivo en relación con las obligaciones contenidas en la liquidación provisional No. 2005EE74075 del 10 de mayo de 2005.</p> <p>TERCERO. En consecuencia, continúese adelante con el proceso de cobro coactivo respecto de las obligaciones contenidas en las liquidaciones provisionales que se enlistan a continuación, a condición de que se entienda que el mandamiento de pago se libra</p>

				<p>las resoluciones No. DDI-185005 de 9 de agosto de 2010 y No. DDI-195230 de 7 de octubre de 2010, expedidas por la Oficina de Cobro de la Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital de Bogotá.</p>	<p><i>Patrimonios Autónomos.</i> Adiciónase el Decreto 807 de 1993 con el siguiente artículo: "Artículo 11-1º.- Cumplimiento de las Obligaciones de los Patrimonios Autónomos.</p> <p>-En el caso de los fondos comunes, fondos de valores o patrimonios autónomos, "se entenderá cumplido el deber de presentar las declaraciones tributarias, cuando la declaración se haya efectuado por el fondo, o patrimonio autónomo, o por las sociedades que los administre".</p> <p>-Con relación a cada uno de los patrimonios autónomos bajo su responsabilidad, "los fiduciarios están obligados a cumplir las obligaciones formales señaladas en las normas legales para los contribuyentes, los retenedores y los responsables, según sea el caso. Para tal efecto, se identificarán de forma global todos los fideicomisos que administre, con un NIT diferente al de la sociedad fiduciaria".</p> <p>-Las sociedades fiduciarias presentarán una sola declaración por todos los patrimonios autónomos. "La sociedad fiduciaria tendrá a disposición de la Dirección Distrital de Impuestos, para cuando esta lo solicite, una desagregación de los factores de la declaración atribuible a cada patrimonio autónomo".</p> <p>-"Los fiduciarios son responsables por las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones formales a cargo de los patrimonios autónomos, así como de la sanción por corrección aritmética y de cualquier otra sanción</p>	<p>fiduciaria y patrimonios autónomos.</p> <p>-Bienes Fideicomitados</p> <p>- Fideicomitente</p> <p>-Fiduciario</p> <p>-Activo de la fiduciaria</p> <p>-Fideicomisos</p>	<p>a cargo de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., COMO VOCERA DE LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS, para que se haga efectivo el cobro del impuesto predial con cargo a los recursos de los patrimonios autónomos, y a cargo de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., para que se haga efectivo el cobro de la sanción por extemporaneidad con cargo a los bienes de la sociedad fiduciaria".</p> <p>"En lo demás CONFIRMASE la sentencia apelada.</p> <p>Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase".</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>SEGUNDA. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR probada la excepción de falta de título ejecutivo y ORDENAR la cesación del proceso de cobro coactivo en relación con las obligaciones contenidas en las liquidaciones provisionales</p>	<p>relacionada con dichas declaraciones”.</p> <p>-“Con cargo a los recursos del fideicomiso, los fiduciarios deberán atender el pago de los impuestos distritales que se generen como resultado de las operaciones del mismo, así como de sus correspondientes intereses moratorios y de la actualización por inflación, cuando sean procedentes”.</p> <p>-Cuando los recursos del fideicomiso sean insuficientes, los beneficiarios responderán solidariamente por tales impuestos, retenciones y sanciones”.</p> <p>-De esta norma se puede inferir que las fiduciarias tienen 3 obligaciones tributarias esenciales:</p> <p>1) Presentar las declaraciones tributarias correspondientes respecto de cada uno de los patrimonios autónomos. 2)Pagar las sanciones derivadas del incumplimiento de obligaciones formales, que es responsabilidad directa y exclusiva de la fiduciaria. 3) Pagar los impuestos distritales con cargo a los recursos del fideicomiso y, en caso de que estos sean insuficientes, responderán solidariamente los beneficiarios por tales impuestos, retenciones y sanciones.</p> <p>-Como primera medida, “la fiduciaria es quien debe realizar el pago del impuesto como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, pero esta obligación esta condicionada a que existan recursos dentro del Patrimonio Autónomo, pues de no existir entran a responder los beneficiarios hay subsidiariedad en al responsabilidad</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

				2005EE72 552, 2005EE72 553, 2005EE72 998, 2005EE66 837, 2005EE73 007, 2005EE73 008, 2005EE73 009, 2005EE73 010, 2005EE73 782, 2005EE93 717, 2005EE93 718, 2005EE93 719, 2005EE93 720, 2005EE93 721, 2005EE93 722,		<p>exclusiva del beneficiario. Fiduciaria NO es responsable solidariamente por el pago del impuesto predial”.</p> <p>-En este caso las liquidaciones provisionales del impuesto predial, prestan merito ejecutivo pues son actos administrativos ejecutoriados</p> <p>-Mandamiento de pago es el instrumento del que se vale la administración para ejecutar títulos ejecutivos</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

				<p>2005EE93 723, 2005EE93 724 y 2005EE93 725 de 10 de mayo de 2005, emanadas de la Unidad de Determina ción de la Subdirecci ón de Impuestos a la propiedad de la Dirección Distrital de Impuestos. TERCERO . NEGAR las demás pretension es de la demanda. En</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<i>consecuen cia, continúese adelante con el proceso de cobro coactivo respecto de las obligacion es contenidas en las liquidacion es provisional es No. 2005EE73 782 y 2005EE74 075 de 10 de mayo de 2005, expedidas por la Unidad de Determina ción de la</i>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<i>Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Dirección Distrital de Impuestos. CUARTO. Devuélvanse los antecedentes administrativos a la oficina de origen.>></i>				
Sentencia C.E Rad. 25000-23-26-000-2011-00530-01 (49004) del 04/04/2016	Contrato de seguro de manejo global bancario. Contrato de encargo fiduciario.	04/04/2016	Fiduciaria La Previsora S.A	Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 28 de junio de 2013,	Jaime Orlando Santofimio Gamboa	--La sala que estudia el caso reitera la jurisprudencia previamente emitida que sirve como precedente, al respecto cabe resaltar: “en relación con el seguro de riesgos financieros, existe la póliza denominada de infidelidad y riesgo financiero, cuya finalidad es la de proteger a las empresas de los perjuicios que pueden sufrir como consecuencia de la infidelidad de sus empleados, por fraudes, el hurto calificado, en el transporte de valores, por la falsificación o alteración de firmas, por el dinero falso, el crimen por computador, etc.; sobre esta clase de pólizas, el numeral 3 del artículo 185 del Decreto 663 de	-Falsas sentencias -Encargo fiduciario -Seguro para fiducia -Póliza de seguro de manejo global	“ REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, el 28 de junio de 2013. PRIMERO: CONDENAR a Seguros Colpatria S.A. a pagar a favor de Fiduprevisora S.A. la suma de

				<p>proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, que resolvió negar las pretensiones de la demanda interpuesta por Fiduprevisora contra seguros Colpatria el 01 de agosto de 2011.</p>	<p>1993, establece que “en los Seguros que tengan por objeto el amparo de los riesgos propios de la actividad financiera, se podrán asegurar, mediante convenio expreso, los hechos pretéritos cuya ocurrencia es desconocida por tomador y asegurador”.</p> <p>-Los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren.</p> <p>-Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública sólo podrán celebrarse por las entidades estatales para objetos y con plazos precisamente determinados.</p> <p>-La fiducia que se autoriza para el sector público, nunca implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituirá patrimonio autónomo del propio de la respectiva entidad oficial. Es decir, se autoriza un encargo fiduciario.</p> <p>-“Entidades estatales no pueden utilizar el esquema fiduciario para delegar en las sociedades fiduciarias el cumplimiento de una función pública que les es propia”.</p> <p>-Contrato de seguros puede prever cubrir las pérdidas ocurridas por actos de buena fe hechos por la fiducia, o por negligencia o dolo de sus empleados o responsabilidad civil real o supuesta. En este caso las partes habían acordado un contrato de seguro mediante el cual se cubrían las pérdidas</p>	<p>bancario</p> <p>-Encargos fiduciarios públicos</p> <p>-Negligencia empleados de la fiduciaria</p> <p>-Actividad financiera</p> <p>-Fiducia</p> <p>- Transferencia de dominio</p> <p>-Contrato de seguros</p>	<p>\$1.730.944.533,37; de conformidad con la parte motiva de esta providencia</p> <p>SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda.</p> <p>SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.</p> <p>CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”.</p>
--	--	--	--	--	---	---	---

						por Negligencia o hechos fraudulentos de los empleados y esto fue lo que determino la decisión.		
Sentencia C.E Rad. 6800123 3300020 1300393 01 (53701) del 13/04/2016	Llamamiento en garantía	13/04/2016	Jaime Alberto Madrid Aristizabal	Recurso de apelación contra el auto del 15 de agosto de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo Oral de Santander, en virtud del cual se rechazó el llamamiento en garantía formulado.	Danilo Rojas Betancourth	<p>-“El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual que vincula a la parte dentro de un proceso determinado (llamante) y a una persona ajena al mismo (llamado), permitiéndole al primero traer a este como tercero, para que intervenga dentro de la causa, con el propósito de exigirle que concorra frente a la indemnización del perjuicio que eventualmente puede llegar a quedar a cargo del llamador a causa de la sentencia”.</p> <p>- Se debe aportar prueba, si quiera sumaria, de la existencia del vínculo legal o contractual que da lugar al derecho para formular el llamamiento en garantía.</p> <p>-Para un llamamiento en garantía se debe demostrar la existencia del vínculo sustancial entre la parte demandada y el tercero llamado.</p>	<p>-Llamamiento en garantía</p> <p>-Carga Probatoria</p> <p>-Reparación directa</p> <p>-Vínculo sustancial</p>	<p>“PRIMERO: REVOCAR el auto del 15 de agosto de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo Oral de Santander, en virtud las consideraciones expuestas en la presente providencia.</p> <p>SEGUNDO: En su lugar, ADMITIR la solicitud presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura el 14 de marzo de 2014 y, en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 del C.G.P., SE VINCULA al proceso como llamada en garantía a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., mediante la notificación del presente auto.</p> <p>TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia. Notifíquese y cúmplase”</p>
Sentencia C.E	Fideicomite nte como	19/05/2016	Fiduciaria de	El accionante	Hugo Fernando	Para resolver el problema jurídico planteado en el recurso de	- Fideicomitent	“REVÓCASE el numeral primero de la sentencia

con radicado numero 25000- 23-27- 000- 2011- 00318— 01 (20005) del 19/05/20 16	sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana.		occidente S.A	pide la nulidad de las siguientes resolucion es: *Resoluci ón No. 689 DDI 072379 del 21 de mayo de 2010, “POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE SANCIÓN AL CONTRIB UYENTE FIDUCIAR IA DE OCCIDEN TE S.A. FIDUOCCI DENTE S.A. ABSORBE	Bastidas Bárcenas	<p>apelación la sala empieza por reiterar lo estipulado en el decreto 352 de 2002, norma aplicable al caso, por la fecha en que ocurrieron los hechos, la cual establece que:</p> <p><i>“Artículo 71. Hecho generador. El hecho generador del impuesto de delineación urbana es la expedición de la licencia para la construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y urbanización de terrenos en el Distrito Capital de Bogotá.”</i></p> <p><i>Artículo 74. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto de delineación urbana los propietarios de los predios en los cuales se realiza el hecho generador del impuesto.”</i></p> <p>También hace referencia al Decreto 1052 del 10 de junio de 1998, vigente en el momento de expedir la licencia de construcción de la demanda, es cual estipula en su artículo 8, que: “Podrán ser titulares de licencias los titulares de derechos reales principales, los poseedores, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias, de los inmuebles objeto de la solicitud”.</p> <p>-Tomando como referencia estas 2 normativas expuestas y vigentes al momento de materializados los hechos, la sala concluye que el sujeto pasivo no puede ser otro que quien expide la licencia de construcción, es decir quien realiza el</p>	e -Impuesto de delineación urbana -Fiducia -Fiduciaria - Transferencia de propiedad -Patrimonios autónomos -Sujeto pasivo impuesto delineación urbana -Licencias de construcción -Propiedad bienes objeto de fiducia	proferida el 16 de agosto de 2012, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la Fiduciaria de Occidente S.A. contra del Distrito Capital - Secretaría de Hacienda de Bogotá. En su lugar: <i>PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 689DDI072379 del 21 de mayo de 2010, por medio de la cual el Distrito Capital- Secretaría Distrital de Hacienda impuso sanción a la Fiduciaria de Occidente S.A. por no presentar la declaración del impuesto de delineación urbana correspondiente a la licencia de construcción 05-3-0319, expedida el 17 de mayo de 2005, en la modalidad de obra nueva y demolición total en el predio localizado en la Kr 1 # 68-79</i>
--	---	--	------------------	--	----------------------	---	--	---

				NTE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA UNION S.A. FIDUNION S.A. NIT 800.143.157 VOCERA DE FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., NIT 830.054.076 POR NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO	<p>hecho gravable. Los titulares de la licencia pueden ser los propietarios del derecho de dominio, a título de fiducia, o los fideicomitentes de las mismas fiducias, de los inmuebles sobre los que recae la solicitud de licencia.</p> <p>-En virtud de que los fideicomitentes pueden solicitar las licencias de construcción también pueden declarar y pagar el impuesto, pues este es un requisito indispensable para la obtención de la licencia.</p> <p>-“Prohibirle al fideicomitente que declare y pague el impuesto implicaría prohibirle el requisito exigido por ley para obtener la licencia de construcción, y esto iría en contra de la normativa”. Por eso el fideicomitente puede configurarse como sujeto pasivo del impuesto de delimitación urbana.</p> <p>-“Los propietarios de los bienes sobre los que se solicita la licencia de construcción no son los únicos sujetos pasivos del impuesto de delimitación urbana sino que esta obligación, en determinado caso, puede también recaer sobre los fideicomitentes. Es decir, pese a que se constituya un patrimonio autónomo por la transferencia de la propiedad de un bien a la fiducia, el fideicomitente puede seguir configurado como sujeto pasivo del impuesto de delimitación urbana aunque el bien no este en su propiedad”.</p>		<p>de la ciudad de Bogotá.</p> <p>SEGUNDO. DECLÁRASE la nulidad del artículo segundo de la Resolución DDI144068 del 22 de junio de 2011, expedida por el Distrito Capital- Secretaría Distrital de Hacienda, que, en reconsideración, confirmó la Resolución 689DDI072379 del 21 de mayo de 2010.</p> <p>TERCERO. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la Fiduciaria de Occidente S.A. no está obligada a pagar suma alguna de dinero por concepto de la sanción por no declarar el impuesto de delimitación urbana, impuesta en la Resolución 689DDI072379 del 21 de mayo de 2010, respecto de la licencia de construcción LC-05-3-0319 del 17 de mayo de 2005, expedida por la Curaduría Urbana 3 de</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

				O DE DELINEA CIÓN URBANA CORRESP ONDIENT E A LA LICENCIA DE CONSTRU CCIÓN 05- 3-0319 EXPEDID A EL 17 DE MAYO DE 2005, EN LA MODALID AD DE OBRA NUEVA, DEMOLICI ÓN TOTAL EN EL PREDIO URBANO LOCALIZA DO EN LA DIRECCIÓ				<i>Bogotá“.</i>
--	--	--	--	---	--	--	--	-----------------

				<p>N KR 1 68 79”</p> <p>*Resoluci ón No. DDI 144068 del 22 de junio de 2011, por medio de la cual se resolvió recurso de reconsider ación interpuesto contra las Resolucion es Nos. 689 DDI 72379 (Resolució n Sanción) del 21 de mayo de 2010, 691 DDI 072383</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>(Liquidación Oficial de Aforo) del 21 de mayo de 2010453</p> <p>-La fiduciaria accionante considera que no es sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana en el proyecto de construcción con licencia en la modalidad de obra nueva No. LC-05-3-0319 del</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				17 de mayo de 2005. Pues su fideicomitente Castellanos Duques LTDA, propietario del inmueble, cumplió con la obligación de declarar el impuesto de delineación urbana del mismo, constituyéndose como el sujeto pasivo del impuesto.				
Sentencia C.E	Competencia de la	08/06/2016	Mauricio Fernando	Acción de nulidad	Martha Teresa	La circular externa numero 19 modificó el procedimiento para hacer efectivos los embargos sobre sumas de dinero	-Bienes inembargable	“PRIMERO: DECLÁRASE no probada la excepción de

Rad. Rad. 1100103 2700020 1200035 00 (19565) del 08/06/20 16	superintendencia financiera para impartir conceptos e instrucciones		Rodríguez Tamayo	contra la Circular Externa No 19 del 10 de mayo de 2012, expedida por el Superintendente Financiero de Colombia “por la cual Superintendencia Financiera impartió instrucciones a los establecimientos de crédito y al Banco de la República respecto al cumplimiento de	Briceño	<p>depositadas en las entidades bancarias, que ya está fijado en el artículo 681 numeral 11 del Código de Procedimiento Civil que ordenaba a los bancos consignar los dineros embargados en la cuenta de depósitos judiciales, independientemente de que sean embargables o no, pues los bancos deben cumplir la orden judicial o administrativa y son los jueces o los funcionarios que decreten el embargo los responsables de tomar esa decisión.</p> <p>-La circular demandada modificó el procedimiento legal respecto a los dineros inembargables, pues ordenó a los bancos abstenerse de consignar estos recursos en las cuentas de depósitos judiciales hasta tanto la Procuraduría o la Contraloría se pronunciaran sobre el particular. De conformidad con lo anterior, la circular 19 de la superintendencia financiera violó lo establecido en el código de procedimiento civil, por eso la expresión de dicha resolución que modifica el procedimiento será declarada nula.</p> <p>-Hoy esta vigente el artículo 594 del código general del proceso que establece que “<u>Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia....</u>”</p>	<p>s</p> <p>- Superintendencia Financiera</p> <p>-Conceptos superintendencia</p> <p>-Competencia de superintendencia financiera</p>	<p>inepta demanda propuesta por la demandada.</p> <p>SEGUNDO: ANÚLASE la expresión “(iii) <i>abstenerse de constituir el respectivo depósito judicial en el Banco Agrario hasta que tales organismos de control emitan un pronunciamiento sobre el particular</i>” contenida en la Circular Externa No. 019 del 10 de mayo de 2012, expedida por el Superintendente Financiero.</p> <p>Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase”.</p>
---	--	--	---------------------	---	---------	--	---	--

				órdenes de embargo que recaigan sobre recursos inembargables”.				
14/07/16 – Rad. 25000-23-26-000-2006-01388-02(47309)	Capacidad para ser parte de patrimonio autónomo	14-07-2016	Jaime Hernando Vega Lafaurie y Fiduciaria de Occidente S.A.	En la demanda, la parte actora estructuró su concepto de violación con fundamento en los siguientes aspectos: i) la violación de norma superior; ii) la	Marta Nubia Velásquez Rubio	<p>¿Está legitimado en causa por activa un patrimonio autónomo <u>cesionario de derechos de crédito</u>, para intervenir en una disputa contractual entre el cedente y el deudor cedido?</p> <p>“La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado sentó jurisprudencia acerca de la diferencia entre la cesión del contrato de obra y la cesión de los créditos derivados del contrato, con base en la cual concluyó que la acción procedente para el cesionario del crédito es la de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que en tal evento el cesionario del crédito no se constituye en contratista ni en tercero con interés directo para impetrar la acción contractual. Como consecuencia, el cesionario de un crédito originado en el contrato estatal debe presentar la demanda dentro del término legalmente establecido para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.</p> <p>Sin embargo, en atención a la condición de las partes del contrato estatal, legitimadas por principio para intervenir en</p>	<p>-Legitimación en la causa</p> <p>-Cesión de créditos</p> <p>- Responsabilidad contractual</p>	<p>FALLA</p> <p>PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección B, el 14 de febrero de 2013.</p>

				<p>ocurrencia de las vías de hecho; iii) la violación al debido proceso por incongruencia en la Resolución 1032 de 2.005; iv) la desviación de poder y v) la falsa motivación de los actos impugnados</p>	<p>la acción contractual de que trata el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, procede advertir que no se desconoce la posibilidad jurídica de la figura del cesionario del contrato, factible por aplicación del artículo 887 del Código de Comercio, la cual puede dar lugar a la posición jurídica de parte contractual en la medida en que la cesión sea debidamente perfeccionada y aceptada, de acuerdo con la formalidad escrita y la consideración <i>intuitu personae</i>, propia del contrato estatal.</p> <p>Bajo ese supuesto, cuando se formaliza la cesión del contrato le asiste al cesionario la legitimación activa para demandar las pretensiones contractuales, en la misma forma que lo haría la parte original, de acuerdo con la extensión de la posición contractual cedida y adquirida.</p> <p>(...) Se establece que la entidad fiduciaria puede acudir al proceso judicial obrando en calidad de demandante o demandada, como vocera del patrimonio autónomo, esto es, por cuenta del conjunto de bienes afecto al fin del contrato fiduciario, al cual la ley reconoce una identidad jurídica independiente.</p> <p>En este orden de ideas, se advierte que en el supuesto de comparecer al proceso judicial como vocera de un patrimonio autónomo, la entidad fiduciaria tiene que acreditar el contrato de fiducia que da lugar a la existencia de dicho patrimonio. Se agrega que, teniendo en cuenta el carácter real propio de la constitución del patrimonio autónomo, la fiduciaria debe probar el registro correspondiente al bien o</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>derecho que invoca, si es de aquellos cuya transferencia está sometida a registro.</p> <p>En conclusión, para el caso concreto se anticipa que el requisito de la prueba de la constitución del patrimonio autónomo en este proceso se infería como obligatorio con fundamento en el contenido de las normas del Código de Comercio acerca del contrato de fiducia mercantil, vigente para la época en que fue presentada la demanda en el <i>sub lite</i>. Entonces, su análisis resulta esencial para determinar el derecho de la entidad fiduciaria en orden a legitimarse como demandante en la causa que invocó.</p> <p><u>Con apoyo en las comunicaciones citadas, la Sala comparte la decisión del Tribunal <i>a quo</i> en cuanto a declarar probada la excepción de falta de legitimación activa en la causa por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A., toda vez que esa sociedad no se constituyó en parte del Contrato de Concesión 093 de 1996 y su posición jurídica se circunscribió a recibir la suma resultante de la liquidación del referido contrato.”</u></p>		
30/08/16 – Rad. 25000- 23-37- 000- 2013- 00078- 01(2084 5)	Fiducia de administraci ón	30-08-16	Helm Fiduciaria S.A.	Invocó como normas violadas las siguientes: - Artículo	Martha Teresa Briceño	<p>¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana en el caso de la fiducia mercantil y, por ende, el obligado a declarar y pagar dicho tributo?:</p> <p>“El artículo 1226 del Código de Comercio define la fiducia mercantil como el negocio jurídico en el cual el fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes al fiduciario para que este los administre o enajene, según la finalidad determinada por el constituyente del fideicomiso. El</p>	<p>-Impuesto de delineación urbana -Liquidación de aforo -Declaración de renta de patrimonios autónomos</p>	<p>FALLA CONFÍRMASE la sentencia apelada.</p>

				<p>s 29 y 363 de la Constitución Política.</p> <p>- Artículo s 26, 30, 32, 1625, 1626 y 1630 del Código Civil.</p> <p>- Artículo s 1226 y 1233 del Código de Comercio.</p> <p>- Artículo s 3, 35 y 84 del Código Contencioso Adminis</p>	<p>provecho se determina a favor del constituyente o de un tercero, denominado beneficiario o fideicomisario. Los bienes fideicomitidos se mantienen separados del resto del activo del fiduciario y de los que corresponden a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad señalada en el acto constitutivo.</p> <p>Por la celebración del contrato de fiducia, el fideicomitente adquiere derechos fiduciarios que son bienes inmateriales que representan la participación de este en el patrimonio autónomo.</p> <p>El artículo 1 de la Ley 97 de 1913 autorizó al Concejo de Bogotá para crear y reglamentar el impuesto de delineación urbana.</p> <p>(...) De conformidad con el Acuerdo 020 de 1940, las personas que presentaran los correspondientes planos de la obra estaban obligados a pagar el impuesto de delineación urbana, y la licencia se expedía a los interesados que demostraran el cumplimiento de esa obligación. La norma no señaló que el único que podía solicitar la licencia era el propietario del bien objeto de la licencia de construcción.</p> <p>Luego, el artículo 9 del Acuerdo 28 de 1995, que adoptó el plan de racionalización tributaria de Santafé de Bogotá, D.C., se refirió al hecho generador del impuesto de delineación urbana, en los siguientes términos:</p> <p><i>Artículo 9º. Impuesto de Delineación Urbana. El hecho</i></p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>trativo.</p> <ul style="list-style-type: none">- Artículos 102, 271-1, 580, 683, 715 y 717 del Estatuto Tributario.- Artículo 1 Ley 1437 de 2011.- Artículo 142 Decreto 1651 de 1961.- Artículos 2, 17, 32, 33, 60 y 103 Decreto Distrital 807 de 1993.- Artículo	<p><i>generador del impuesto de delineación urbana es la expedición de la licencia.</i></p> <p>La norma anterior no exigió al solicitante de la licencia urbanística la acreditación de una calidad específica. Tampoco previó que el propietario del bien objeto de construcción o remodelación fuera el único que pudiera solicitar la licencia y, en consecuencia, que la obligación de declarar y pagar el impuesto de delineación urbana radicara exclusivamente en los propietarios de tales inmuebles.</p> <p>En relación con los titulares del derecho a solicitar la licencia de construcción, el Decreto 1052 del 10 de junio de 1998, vigente para la fecha en que se expidió la licencia de construcción LC-08-2-0328 de 21 de mayo de 2008, dispuso lo siguiente:</p> <p><i>“Artículo 8. Titulares de licencias. Podrán ser titulares de licencias los titulares de derechos reales principales, los poseedores, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias, de los inmuebles objeto de la solicitud.”</i></p> <p>De las normas transcritas se establece que si bien es cierto que el artículo 74 del Decreto 352 de 2002 previó como sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana a los propietarios de los predios sobre los que se realiza el hecho generador, también lo es que el sujeto pasivo no puede ser otro que quien realiza el hecho gravable del impuesto de</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

				<p>74 Decreto Distrital 352 de 2002.</p> <ul style="list-style-type: none">- Artículos 14 y 16 del Decreto 564 de 2006.- Artículo 6 del Acuerdo Distrital 105 de 2003.- Concepto 1035 de 2004 de la Dirección Distrital de Impuestos.		<p>delineación urbana, esto es, la expedición de la licencia de construcción de la que pueden ser titulares, entre otros, <i>“los propietarios del derecho de dominio, a título de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias”</i>, de los inmuebles sobre los que recae la solicitud de la licencia.</p> <p>De igual manera, no puede desconocerse que artículo 9 del Acuerdo 20 de 1940 dispuso que estaban obligados a pagar el tributo de delineación urbana los <i>interesados</i> en las respectivas obras o edificaciones, sin que se exigiera la condición de ser propietarios del inmueble objeto de las obras.</p> <p>De la interpretación sistemática de las normas antes citadas se concluye que el fideicomitente puede ser sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana.</p>		
18/05/17 – Rad. 88001-	Fiducia de administración	18-05-2017	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	Mediante apoderado judicial y	Jaime Orlando Santofimio	¿Puede alegar una sociedad fiduciaria la excepción de falta de notificación de un acto administrativo que afecte el bien inmueble que hace parte del patrimonio autónomo	-Caducidad de la acción -Expropiación	RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la

23-31-000-2004-00013-01(35090)A				en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del C.C.A solicitó que se declare administrativamente responsable a la Nación.	Gamboa	<p>bajo su administración, pese a que en virtud de su carácter de profesional, debe mantenerse informada de todas las contingencias que puedan afectar el normal desarrollo del negocio jurídico?:</p> <p>Adicionalmente, en este ítem debe preverse que las actuaciones de ALIANZA, en su calidad de FIDUCIARIO dependen de las solicitudes, informaciones y autorizaciones otorgadas por el BENEFICIARIO.</p> <p>(...) Dado lo anterior, debe preverse que la relación jurídica establecida mediante el contrato de fiducia mercantil que aquí se celebró conlleva el deber de colaboración, en donde las distintas partes vinculadas deben encaminar sus esfuerzos y aportes a que la finalidad del contrato se cumpla, en cuyo efecto se facultó a la sociedad beneficiaria para gestionar todo lo correspondiente al desarrollo del proyecto <i>Caribbean Village Mount Sinaí</i> e, incluso, para comprometer a la Fiduciaria.</p> <p>Así, el fideicomitente entregó la propiedad del predio fideicometido y las licencias para el desarrollo del proyecto, la fiduciaria los recibió y el beneficiario se encargó de todas las gestiones tendientes a desarrollar dicho proyecto; de manera que la gestión de cada parte depende del aporte del otro - aportes ajenos -, en donde surge una división horizontal de trabajo, en la que cada participante confía en el aporte del otro.</p> <p>Consecuencia de lo anterior, debe decirse que el deber de</p>	-Acción de reparación directa	sentencia proferida el 29 de noviembre de 2007 por el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, por los motivos expuestos en esta providencia.
---------------------------------	--	--	--	--	--------	--	-------------------------------	---

					<p>colaboración se encuentra presidido por el principio de confianza, pues, por cuanto fideicomitente, fiduciario y beneficiario persiguen la misma finalidad, la fiducia es un negocio de confianza (<i>trust</i>) en donde se espera que las partes contratantes actúen de manera adecuada, conforme a las obligaciones pactadas y al profesionalismo de cada uno.</p> <p>A la sazón, en el contrato de fiducia que aquí se examina, la fiduciaria no obra como única profesional, sino que el fideicomitente y el beneficiario también son profesionales en el negocio que se pretende desarrollar, ya que el fideicomitente diseñó e inició la ejecución del proyecto inmobiliario, en cuya razón constituyó la fiducia mercantil y la sociedad beneficiaria que fue facultada conforme a su objeto social.</p> <p>De modo que esta relación contractual genera expectativas de conducta de colaboración que, a su vez, se desenvuelven en torno al principio de confianza y buena fe, según la cual, las partes tienen el deber de actuar en función de la finalidad comercial de cada uno de los contratantes, los cuales llevan implícitos los deberes de cuidado e información.</p> <p>Así las cosas, tanto al fideicomitente como a la fiduciaria y al beneficiario le son exigibles el despliegue de todos sus atributos para satisfacer los intereses y finalidades contractuales, pues se trata de un trabajo en equipo, donde el principio de confianza y el deber de colaboración son el fundamento de la relación jurídica, que exige a cada parte hacer lo suyo, para contribuir al logro del propósito común.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>En este sentido en aplicación del principio de confianza las partes, y aun los terceros, confían en que cada uno de los contratantes haga lo propio para la satisfacción de las prestaciones entre ellos pactadas y del objeto contractual.</p> <p>En este sentido se tiene que el principio de confianza se aplica siempre que en el actuar propio se emplee un aporte ajeno y, permite delimitar el alcance del deber de diligencia de las partes frente a determinado evento, teniendo en cuenta la calidad de cada parte y el deber de cuidado que es exigible a cada una de ellas.</p> <p>En este entendido, la Sala considera que la fiduciaria entregó la custodia y tenencia del bien fideicometido a la Beneficiaria y la facultó para adelantar los actos que fueran necesarios para el desarrollo del proyecto, función que exigía el deber de cuidado y de información entre los contratantes.</p> <p>Al respecto debe preverse lo dispuesto en el artículo 1234 del C.Co., según el cual “[s]on deberes indelegables del fiduciario, además de los previstos en el acto constitutivo, los siguientes: 1) Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia; (...) 4) llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicometidos contra actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente; (...)”</p> <p>Del mandato legal aquí transcrito, se infiere que la Fiduciaria</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>debía conocer todo aquello que comprometiera o afectara el bien fideicometido, así como las actuaciones adelantadas por el beneficiario, so pena de ver comprometido su deber de diligencia profesional.</p> <p>(...)De lo anterior se infiere, que en razón de sus obligaciones legales y de la relación contractual con su fideicomitente y beneficiario, la fiduciaria debió conocer las gestiones adelantadas por <i>The Great View Company S.A.</i>, las cuales obedecían a las facultades otorgadas en el contrato de fiducia y, por lo menos, debió conocer la suspensión del proyecto, que en últimas se fundamentaba en la declaración del Parque Nacional, y así como la convocatoria en la cual se discutiría la viabilidad ambiental para la aprobación o prohibición definitiva del <i>Caribbean Village Mount Sinaí</i>, objeto de fiducia, mucho más cuando la convocatoria fue publicada en los dos diarios de más amplia circulación nacional.</p> <p>(...)En este sentido tanto el Tribunal de Cundinamarca, como el Consejo de Estado y en juez de Tutela en Sala de Revisión consideraron imposible que <i>“la fiduciaria no se hubiese enterado de lo que estaba ocurriendo – entre otras, por el hecho de que el Señor Rozo, fideicomitente, actuó a lo largo del procedimiento administrativo en defensa de sus intereses y tenía la obligación contractual de reportar a la fiduciaria este tipo de sucesos.”</i></p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

